

 **realidad
económica**

Revista de economía
editada por el Instituto
Argentino para el
Desarrollo Económico
(IADE) Aparece cada
45 días

215

*Presidente uruguayo Tabaré Vázquez
Ilustración de Hermenegildo Sábat*



**COMO EL URUGUAY,
NO HAY ...**

**INSTITUTO
ARGENTINO
PARA EL
DESARROLLO
ECONÓMICO**

Presidente:

Salvador María Lozada

Vicepresidente:

Alfredo Eric Calcagno

Secretario:

Eliseo Giai

Prosecretario:

Salomón Fainstein

Tesorero:

José María Cardo

Protesorero:

Carlos Zaietz

Vocales Titulares:

Juan Carlos Amigo

Sergio Carpenter

Pedro Etchichury

Dante Falco

Alfredo T. García

Héctor A. García

Flora Losada

Eduardo Mari

Walter Pengué

Daniel Rascovschi

Alberto Rosenthal

Alberto Urthiague

Lucía Vera

Carlos M. Vilas

Guillermo Vitelli

Revisores de Cuentas titulares:

Ana Hawrylkowicz

Norma Penas

Dirección y administración:

Hipólito Yrigoyen 1116 - 4º piso

(C1086AAT) Buenos Aires, Argentina

Teléfonos y fax: 4 381-7380/9337

e-mail: iade@iade.org.ar

realidadeconomica@iade.org.ar

<http://www.iade.org.ar>

ISSN 0325-1926

 **realidad
económica**

Nº 215

1º de octubre al

15 de noviembre de 2005

Editor responsable:

Instituto Argentino para el

Desarrollo Económico (IADE)

Director:

Juan Carlos Amigo

Secretaría de Redacción:

Irene Brousse

Mónica Padlog

Comité Editorial:

Presidente

Horacio Giberti

Enrique O. Arceo

Eduardo Basualdo

Alfredo Eric Calcagno

Dina Foguelman

Miguel Teubal

**Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual Nº 133452**

Los artículos pueden ser libremente re-
producidos con sólo acreditar a Real-
dad Económica como fuente de origen,
salvo indicación en contrario. La respon-
sabilidad de los artículos firmados recae
de manera exclusiva sobre sus autores
y su contenido no refleja, necesaria-
mente, el criterio de la dirección.

**Pedido de suscripción
Nacional**

Valor de la suscripción

8 números/1 año \$90

Exterior

Precio del ejemplar (vía aérea) U\$S18

Suscripción anual (vía aérea) U\$S130

Impreso en Inverprenta S.A., Osvaldo
Cruz 3091/93 - Cdad. de Buenos Aires.
tel. 4302-2054/9711

Correo
Central
Argentino
(B)

Franqueo Pagado
Concesión Nº 3806

SUMARIO

Estado y Sociedad

A propósito de la crisis del Mercosur. Notas sobre el proyecto de país de la “burguesía nacional” en la Argentina

8

Martín Schorr - Andrés Wainer

El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, en el marco de la crisis en que se encuentra inmerso el Mercosur, se propone analizar las *propuestas de solución* esgrimidas en el último tiempo por aquellos sectores de la clase dominante argentina que, luego de ser partícipes activos y beneficiarios directos del modelo concentrador y excluyente iniciado en el país a partir de la última dictadura militar, en la actualidad se autoproclaman como burguesía nacional industrialista y progresista y, como tal, legítima interlocutora del gobierno. Por otro lado, y sobre esa base, el artículo apunta a presentar algunas reflexiones y evidencias sobre el proyecto de país de esos sectores del gran capital local, el papel que en el mismo juegan los sectores populares, el tipo de integración al “mundo globalizado” que se impulsa y el posicionamiento de estos integrantes de la clase dominante frente al “imperialismo”.

Sobre las Cumbres

Al cierre de esta edición de Realidad Económica se están realizando en la ciudad de Mar del Plata la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en forma simultánea. Información y comentarios serán publicados en el próximo número.

Uruguay I

Los principales desafíos del gobierno progresista uruguayo

20

Antonio Elías

En el primer punto de este trabajo se afirma que el modelo neoliberal ha tenido dificultades importantes pero que continúa vigente en América latina; en los siguientes puntos se aportan elementos, desde un enfoque principalmente económico, para analizar la actual situación del Uruguay y los riesgos y oportunidades que ha abierto la nueva situación política, se describen y analizan el carácter estructural de la crisis (punto 2); la opción por la ortodoxia económica (punto 3); la prioridad de la deuda externa sobre la social (punto 4); las características del mercado de trabajo en la explicación de la pobreza; por último, se destaca el dilema del nuevo gobierno, fortalecer institucionalmente a los trabajadores o reafirmar la opción por el mercado y los inversores internacionales.

La disyuntiva del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez es continuar aceptando las premisas del modelo dominante o hacer un viraje eligiendo un camino independiente, lo cual implicará necesariamente desarrollar un paradigma institucional alternativo cuya piedra angular es el fortalecimiento del trabajo frente al capital. Para que haya un Uruguay productivo hay que cambiar el modelo -las reglas de juego y la estrategia de desarrollo- y para ello es necesario crear un punto de inflexión, para lo cual se requiere de una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria. Esa es la tarea de las fuerzas políticas y sociales del cambio, de lo contrario se estarían creando las condiciones para la continuidad del modelo neoliberal. Ese es el peligro... y no sólo en el Uruguay.

Uruguay II

De la resistencia al poder constituyente: la reforma del agua

44

Luis Ibarra

Diversas formas de resistencia a las privatizaciones convergieron en un plebiscito que modificó la Constitución del Uruguay para introducir disposiciones relativas al agua. La enmienda estableció el acceso a los servicios como un derecho humano, la administración exclusiva del estado y la participación de las organizaciones sociales en la gestión. Este artículo analiza la producción de las nuevas instituciones públicas como un resultado de los conflictos y combinaciones entre distintas estrategias políticas de reforma y considera las perspectivas que abre su implementación.

Uruguay III

La forestación en debate. Inversión extranjera e impacto territorial en el Uruguay

61

Raquel M. Alvarado

La política forestal implementada en el Uruguay durante los últimos quince años ha sido objeto de permanente controversia tanto en sus inicios durante la etapa de plantación como en la actual fase de transformación de la madera.

La generosidad de la política de estímulos que los gobiernos han venido otorgando y los posibles efectos ambientales negativos de estas actividades son los puntos centrales de un debate que ya ha trascendido fronteras.



En el contexto económico del Uruguay, la forestación se distingue entre otras actividades económicas por las transformaciones territoriales que ha venido produciendo y por el creciente flujo de inversión extranjera que atrae.

La llegada al poder de la izquierda ha generado expectativas respecto de la corrección de aquellos aspectos de la política forestal que consagran situaciones de privilegio para el capital más concentrado en perjuicio de otros sectores agropecuarios, de los trabajadores forestales y de la comunidad toda.

Documento

Refundar las Naciones Unidas

Hugo Chávez Frías

88

Integración

El acuerdo EUA-RD CAFTA ¿rodeando al Mercosur?

95

José Carlos Núñez

El 10 de mayo de 2005 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, declaró que conseguir la aprobación parlamentaria del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana es la “primera prioridad” de su gobierno para este año en lo que hace a política comercial, por encima incluso de la culminación de la agenda de la ronda de Doha de la OMC. Este tratado, conocido como EUA-RD CAFTA (CAFTA: Central America Free Trade Agreement) plantea la conformación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Su concreción no sería un hecho novedoso en cuanto a la larga relación económica que estos países han mantenido entre sí, pero plantearía una relación más profunda que tiene que ver más con los lineamientos del ALCA que con los acuerdos tradicionales.

Anticipo

El imperio de las finanzas Bienvenidos al casino global

110

Julio Sebares

Desde 1980 hasta fin del siglo pasado, la economía de los países industriales creció a un 2,5% anual. En ese mismo tiempo, la liquidez internacional, medida por el aumento de las reservas se multiplicó por más de quince, las operaciones cambiarias crecieron casi un 30% anual y las emisiones de bonos y títulos de deuda un 10 por ciento. El FMI calcula, a su vez, que los fondos especulativos pueden mover entre 600.000 millones y un billón de dólares diarios para especular con divisas u otros activos financieros. Antes de la liberalización de los mercados de capital en los primeros años setenta, el comercio de divisas diario equivalía a seis veces el valor del comercio mundial anual. Hoy equivale a 50 veces ese valor. En la década de los ochenta la negociación de divisas era un 30% mayor que el valor del comercio internacional de bienes y servicios. En 2000 la superaba en un 60 por ciento. El sostenido incremento de la actividad financiera por encima de la producción, el aumento de las obligaciones financieras desligadas de la actividad real es un fenómeno inquietante cuyo futuro es difícil de predecir. ¿Hasta qué punto puede aumentar la actividad financiera y las ganancias que genera por encima de las operaciones de la economía real?



IADE

En resumidas cuentas

45 días de noticias
1.10 - 15.11. 2005

132

Galera de corrección

¿Para qué sirve la tecnología?

Un desafío para crecer

RICARDO A. FERRARO

Eduardo A. Mari



156

IADE

Actividades 2005

158

A propósito de la crisis del Mercosur. Notas sobre el proyecto de país de la “burguesía nacional” en la Argentina*

Martín Schorr **
*Andrés Wainer****

El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, en el marco de la crisis en que se encuentra inmerso el Mercosur, se propone analizar las *propuestas de solución* esgrimidas en el último tiempo por aquellos sectores de la clase dominante argentina que, luego de ser partícipes activos y beneficiarios directos del modelo concentrador y excluyente iniciado en el país a partir de la última dictadura militar, en la actualidad se autoproclaman como burguesía nacional industrialista y progresista y, como tal, legítima interlocutora del gobierno. Por otro lado, y sobre esa base, el artículo apunta a presentar algunas reflexiones y evidencias sobre el proyecto de país de esos sectores del gran capital local, el papel que en el mismo juegan los sectores populares, el tipo de integración al “mundo globalizado” que se impulsa y el posicionamiento de estos integrantes de la clase dominante frente al “imperialismo”.

* Se agradecen los valiosos comentarios realizados por Enrique Arceo, Daniel Azpiazu y Hernán Soltz a una versión preliminar de este trabajo y, naturalmente, se los exime de toda responsabilidad en cuanto a los errores y las omisiones que pudieran existir.

** Investigador del CONICET y de la FLACSO, docente de la UBA.

*** Becario del CONICET, docente de la UBA.

A casi quince años de su nacimiento formal, el Mercosur se encuentra atravesando una crisis profunda. Prueba de ello son las recurrentes y cada vez más ásperas disputas entre sus dos socios mayores respecto a *qué hacer* con este proyecto de integración.

Las distintas respuestas ensayadas a este crucial interrogante se asocian con múltiples factores y procesos que expresan diferencias no menores entre la Argentina y el Brasil: características de los respectivos regímenes macroeconómicos, trayectoria de ambas economías desde mediados de los años sesenta, dimensión de los mercados domésticos, patrones de especialización productiva y de inserción internacional, rasgos estructurales y comportamiento económico y político de los sectores dominantes de ambos países, fisonomía del Estado e incidencia en su interior de las distintas clases y fracciones de clase, aspectos del entramado institucional, etc.

Sobre la base del reconocimiento de la indudable debilidad relati-

va de la Argentina (en particular en materia industrial)¹, el gobierno de Kirchner ha venido planteando la necesidad de “repensar el Mercosur”. Dados los intereses en juego, no resulta casual que la propuesta oficial haya sido fervientemente apoyada por el gran empresariado industrial de nuestro país. En esta cuestión (como en tantas otras), dichos sectores han logrado ubicarse estratégicamente como interlocutores directos del gobierno y en calidad de representantes del supuesto -y por demás difuso- “interés general de la Nación”. Ello, fundamentalmente, como resultado de haberse autoproclamado como la burguesía nacional productiva y progresista preocupada por la consolidación de un “modelo de la producción y el trabajo” que coloque al país en un sendero opuesto al transitado en las últimas décadas de hegemonía neoliberal. De allí la creciente gravitación de estos sectores (sobre todo a través de la Unión Industrial Argentina) en las diferentes instancias de negociación que se abrieron en el último tiempo con la nación vecina.

¹ En cuanto a esta cuestión, de un trabajo reciente de la CEPAL surge que fueron muy pocas las actividades manufactureras que exhibieron superávits comerciales con el Brasil desde la entrada en vigencia del Mercosur: refinación de petróleo, vehículos automotores, lácteos, bebidas, carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas. En las restantes ramas se verificaron saldos deficitarios (particularmente importantes en electrónica y telecomunicaciones, maquinaria, papel y edición, y material eléctrico y electrodomésticos). De allí que “el comercio con el Brasil en términos del contenido de valor agregado y de puestos de trabajo incorporado en las exportaciones e importaciones ha sido deficitario para la Argentina en casi todos los sectores industriales. Esta tendencia ha aumentado en forma sostenida en el último lustro”. Kosacoff, B. (coord.): *Evaluación del desempeño y aportes para un rediseño del Mercosur*, CEPAL, Buenos Aires, 2004.

Lo expuesto invita a preguntarse acerca de las características de estos actores y, más ampliamente, de su proyecto de país y de cuál es el lugar que en él juega la cuestión regional. Se trata de aportar algunos elementos para poner en perspectiva varios de los recientes planteos argentinos sobre *qué hacer* con el Mercosur y, en ese marco, las *apuestas de fondo* de esta fracción social en relación con los destinos de la Nación.

¿Burguesía nacional?

La categoría de burguesía nacional remite, en primera instancia, a aquella fracción de la burguesía que, además de tener intereses “nacionales” en lo económico (lo cual no supone que la totalidad de su producción sea destinada al mercado interno), cuenta con un proyecto inclusivo de país y está dispuesta a enfrentarse -y efectivamente se enfrenta- al capital extranjero y sus representantes orgánicos en términos políticos e ideológicos. Ahora bien, una fracción de la clase capitalista que pueda cumplir dicha función no puede agotarse en el hecho de que los propietarios de los medios de producción sean de origen nacional; ni siquiera aunque tengan

intereses objetivos que entren en conflicto con los del “imperialismo”. Así, una burguesía nacional sería aquella fracción del capital de origen doméstico que impulsa la aplicación de políticas tendientes a colocar a la nación en un sendero de desarrollo económico y social, para el cual la concreción de un proceso de industrialización constituye un pilar fundamental. Sobre estas bases resultaría viable la ruptura de los lazos de dependencia con el “imperio”².

En este marco, el análisis del comportamiento en los últimos años del sector del gran capital local que hoy se presenta como burguesía nacional, permite extraer algunas conclusiones relevantes acerca de si se estaría -o no- ante una fracción social con las características señaladas.

La primera cuestión a mencionar es que la lógica de acumulación, expansión y ahorro de varios de sus integrantes es crecientemente transnacional y, como tal, se encuentra cada vez más disociada del territorio nacional. Luego de ser partícipes activos y beneficiarios directos de varios de los nichos de ganancias extraordinarias generados durante los años noventa (tal como había acontecido entre 1976 y fines de los ochenta)³, a mediados del decenio estos

² Al respecto, consúltese Arceo, E.: “El impacto de la globalización en la periferia y las nuevas y viejas formas de dependencia en América Latina”, *Cuadernos del CENDES*, Caracas, en prensa, Poulantzas, N: “Las clases sociales”, en AA.VV.: *Las clases sociales en América Latina*, Siglo XXI, México, 1972, y Peña, M.: *La clase dirigente argentina frente al imperialismo*, Buenos Aires, 1973.

³ Véase Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M.: *El nuevo poder económico en la Ar-*

actores cedieron al capital extranjero muchas de sus principales empresas y participaciones accionarias (en particular en las prestatarias privadas de servicios públicos)⁴, a cambio de lo cual recibieron cuantiosas sumas de dinero y desplegaron tres grandes estrategias (no necesariamente excluyentes entre sí):

- en el nivel interno se ubicaron o se consolidaron en sectores exportadores. Buena parte de las firmas controladas por estos capitales conforma el núcleo de la cúpula exportadora de la Argentina; ello, a favor de su control oligopólico sobre un conjunto reducido de actividades de escaso dinamismo en el nivel mundial y caracterizadas en ge-

neral por funciones de producción de naturaleza capital-intensiva (básicamente agroindustria, petróleo y derivados, y unos pocos *commodities* industriales), uno de cuyos principales mercados de destino es el brasileño⁵;

- en un escenario de creciente transnacionalización productiva por parte de firmas y grupos económicos de países periféricos⁶, algunos de estos grandes capitalistas afianzaron su proceso de internacionalización a partir de la adquisición y/o la apertura de nuevas empresas y unidades productivas y/o comerciales en otros países (no sólo de América latina)⁷. De todos modos, casi sin excepcio-

Argentina de los años ochenta. Edición definitiva, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2004, y Basualdo, E.: *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros*, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires, 2000.

⁴ Este proceso continuó durante la posconvertibilidad (claro que con mucha menos intensidad). Entre los compradores de empresas locales hubo varios de origen brasileño. Se destacan la adquisición del *holding* Pecom Energía por parte de la estatal Petrobras y de una importante participación accionaria en Cervecería Quilmes por Ambev (propietaria de Brahma) y en Acindar por Belgo Mineira. A esto se suma el anuncio de la venta de Loma Negra a Camargo Correa.

⁵ En el listado de las principales firmas exportadoras de la Argentina hay varias pertenecientes a los grupos económicos locales más relevantes: Arcor, Grobocopatel, Ledesma, Madanes Quintanilla, Mastellone, Pérez Companc, Techint, Urquía y Werthein. Sobre estas cuestiones, consúltese Schorr, M. y Wainer, A.: “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del modelo de los noventa al del dólar alto”, **Realidad Económica**, N° 211, Buenos Aires, abril-mayo 2005; también, CEP: “Comercio bilateral Argentina-Brasil”, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires, mayo 2005.

⁶ Véase UNCTAD: “Firms in developing countries rapidly expanding foreign investment, transnational activities”, Nueva York, mayo 2005.

⁷ Por ejemplo, fuera de la Argentina el grupo Arcor tiene importantes activos en el Brasil, Canadá, Chile, el Ecuador, EUA., México, el Perú, Suiza y el Uruguay. El conglomerado de origen italiano Techint es propietario de numerosas empresas en el exte-

nes, se trata de “jugadores de segunda” en el “tablero” regional y mucho más en el mundial⁸; y

- lejos de viabilizar un incremento en la acumulación de capital en el nivel doméstico, una parte importante de los recursos percibidos pasó a engrosar sus abultadísimos activos financieros en el exterior (se trata del segmento empresario que explica el grueso de la ingente fuga de capitales al exterior verificada durante la última década y, más ampliamente, desde fines del decenio de los setenta)⁹.

Lo anterior indica que se trata de actores que han afianzado el proceso de internacionalización comercial, productiva y financiera desplegado a partir de la última

dictadura militar. Como resultado de ello, gran parte de sus activos y de sus flujos de ingresos globales ha quedado dolarizado, de allí que constituyan el núcleo de los ganadores del actual “modelo de dólar alto” y su principal base de sustentación¹⁰.

El segundo elemento a destacar es que el proyecto de país de estos sectores empresarios no parece estructurarse en torno de una oposición con el predominante capital extranjero, sino que más bien se plantea en términos de *asociación* (por lo general *subordinada*) o de *no confrontación*. Sea porque muchos de sus integrantes tienen estrechas articulaciones, en el país y en el exterior, con capitales foráneos -casi siempre en calidad de “socios menores”-; porque están insertos en actividades que por diferentes motivos se encuen-

rior, entre las más relevantes figuran: Dálmine (Italia), NKK Tubes (Japón), Tavsa (Venezuela), Tamsa (México), Confab Industrial (Brasil), Algoma Tubes (Canadá) y Silcotub (Rumania); además tiene oficinas comerciales y centros de servicios en numerosos países de América latina, Europa y Asia. También se destacan los casos de los grupos locales Bagó y Roemmers (ambos del sector farmacéutico).

⁸ En el listado de las 100 empresas más grandes de América latina en 2003 sólo hay una “nacional”, Tenaris (Techint), siendo mayoritarias las filiales de multinacionales y firmas brasileñas y mexicanas (muchas estatales). En el *ranking* de las 100 corporaciones más grandes del mundo en el 2002 no aparece ninguna de nuestro país. Véase América Economía: “500 mayores empresas de América latina”, N° 280/281, México, julio 2004, y UNCTAD: World Investment Report, Nueva York, 2004.

⁹ A fines de la Convertibilidad por cada dólar de endeudamiento externo existía aproximadamente un dólar perteneciente a residentes locales que se había fugado al exterior. Para un tratamiento de estos temas, consúltese Comisión Especial de la Cámara de Diputados: *Fuga de divisas en la Argentina. Informe final*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005.

¹⁰ Estas cuestiones son abordadas, entre otros, en Gaggero, A. y Wainer, A.: “Crisis de la convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio”, en **Realidad Económica**, N° 204, Buenos Aires, mayo-junio 2004, Katz, C.: “¿Qué burguesía hay en la Argentina?”, Buenos Aires, julio 2005, mimeo, y Schorr, M.: *Modelo nacional-industrial. Límites y posibilidades*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005.

tran en mayor o menor medida a resguardo de la competencia externa; por su -en la mayoría de los casos considerable- debilidad relativa frente al capital transnacional; o porque directamente son de origen extranjero¹¹.

En tercer lugar, surge que en su proyecto los sectores populares y buena parte de la sociedad argentina no constituyen aliados estratégicos en términos económicos y políticos, sino que en gran medida están excluidos. Basta recordar los pedidos de estos sectores capitalistas y de varios de sus intelectuales orgánicos para que el gobierno de Kirchner “controle” la protesta social; sus falaces argumentaciones acerca de los determinantes de la inflación que se ha

verificado en el último tiempo (que ha tenido a estos segmentos empresarios entre sus principales responsables y beneficiarios, y a los asalariados como los grandes perjudicados); y sus permanentes críticas a los aumentos salariales por decreto y sus posturas en las recientes discusiones sobre los salarios (que han estado muy lejos de mostrar una actitud comprensiva hacia los trabajadores, tal como se ha afirmado, y que demuestran que en última instancia a lo que apuntan es a cristalizar la muy regresiva distribución del ingreso existente, la cual es producto de la vigencia de largos años de neoliberalismo extremo y de las características del *shock* devaluacionista posconvertibilidad)¹².

¹¹ En este punto, cabe traer a colación una cita de un crítico muy agudo de la burguesía nacional en nuestro país en décadas pasadas: “Existe pues, unidad de intereses entre las metrópolis y las clases dominantes nacionales. Pero unidad, repitámoslo, no es sinónimo de identidad, y no excluye las diferencias, los conflictos, los enfrentamientos. La índole de estas diferencias es muy simple: las clases dominantes argentinas, como sus congéneres de todos los países semicoloniales, puján siempre, permanentemente, por obtener una mayor participación en la plusvalía extraída. En torno a la participación en la plusvalía se da un regateo permanente y roces constantes, abiertos y encubiertos. No existiendo ley económica alguna que determine la participación relativa que corresponde a las metrópolis y a las clases dominantes nacionales en la masa de plusvalía disponible, las partes se distribuyen en cada momento con sujeción al permanente enfrentamiento de ambos intereses, aunque siempre corresponde a la metrópoli extraer la mayor parte, puesto que es el socio más poderoso en la vasta empresa conjunta que integra con las clases dominantes nativas”. Peña, M.: *La clase dirigente argentina frente al imperialismo*, Buenos Aires, 1973.

¹² Al respecto, consúltese Schorr, M. y Wainer, A.: “La hilacha de la burguesía”, *Página 12*, 22/5/2005; asimismo, Esquivel, V. y Maurizio, R.: “La desigualdad de ingresos y otras inequidades en la Argentina posconvertibilidad”, ponencia presentada en el Seminario organizado por el “Economics Working Group” del Observatorio Argentino (New School University), Buenos Aires, 1 de junio de 2005, y Lindenboim, J., Graña, J. y Kennedy, D.: “Distribución funcional del ingreso en Argentina. Ayer y hoy”, CEPED, Documento de Trabajo N° 4, Buenos Aires, junio 2005. Sobre estos temas, cabe destacar que por lo general en las posturas de los defensores del actual “modelo

¿Qué Mercosur persigue la gran “burguesía nacional”?

Se trata, en definitiva, de una fracción social que más allá de que se autoproclama como tal, difícilmente tenga los atributos que definirían a una burguesía nacional. Esto también queda de manifiesto cuando se analizan sus propuestas para “resolver” la compleja situación en la que se encuentra el Mercosur (que, a juzgar por lo acontecido hasta el presente, son compartidas en lo sustantivo por el gobierno argentino). Las mismas se han estructurado alrededor de dos cuestiones centrales.

Por un lado, en criticar y reclamar un replanteo de consideración en la tradicional y bastante exitosa y sostenida política brasileña de apoyo al sector privado productivo: créditos “blandos” del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), subsidios públicos de distinta índole en los diferentes ni-

veles gubernamentales con vistas a atraer inversiones, fomento a las exportaciones, apoyo a actividades de investigación y desarrollo, etc. Estas prácticas que han permitido la expansión y el fortalecimiento de numerosas actividades (sobre todo manufactureras), contrastan con el contenido desindustrializador de gran parte de las políticas aplicadas de modo prácticamente ininterrumpido en la Argentina desde la última dictadura militar y resultan claves para entender las considerables “asimetrías estructurales” que se manifiestan entre los dos socios mayores del Mercosur.

Por otro lado, en el insistente reclamo en pos de incrementar la protección frente a las importaciones provenientes del Brasil en actividades consideradas “sensibles” para la Argentina: calzado, textil y electrodomésticos. En la generalidad de los casos, son ramas con una participación importante de las fracciones de menores dimensiones y más débiles

económico” los salarios son percibidos fundamentalmente como costos empresarios, de allí la importancia que se le asigna a la existencia de salarios reducidos en “moneda dura” como “factor competitivo” y la escasa preocupación por el poder adquisitivo de los mismos en moneda nacional y en consecuencia por la distribución del ingreso (en este sentido, resultan por demás ilustrativas las declaraciones recientes de un conspicuo intelectual orgánico de la gran “burguesía nacional”, Javier González Fraga, quien refiriéndose al tipo de cambio real señaló: “Hay que tratar de mantenerlo en términos reales y nominales, desalentando el ingreso de capitales especulativos y generando un superávit fiscal que pueda comprar el superávit comercial. Ahora bien, si es inevitable cierta apreciación prefiero que se de por diferencial de inflación y no por una caída nominal [de la paridad cambiaria]. Si hay inflación porque subió la carne, ésa no necesariamente afecta al empresario que exporta... Arreglar el tema salarial de golpe sería como querer tomar un atajo. Tenemos que saber que los cambios se hacen paso a paso sin tomar atajos. Volver a 1974 como estructura de distribución del ingreso va a llevar muchos años”, *Página 12*, 22/5/2005).

del empresariado nacional; de allí el apoyo brindado por estos sectores las posiciones políticas llevadas a las negociaciones por el gobierno de Kirchner y varios grandes “burgueses nacionales”.

Ahora bien, existe una serie de cuestiones que no casualmente están ausentes en los planteos puestos en la “mesa de negociación” y que aportan nuevos elementos para elucidar las características del proyecto de país que persigue la autoproclamada “burguesía nacional”. Se trata de un conjunto de problemáticas que exceden al Mercosur, pero que sin duda lo involucran directamente, y que expresan que una parte no menor de los “problemas del Mercosur” no responden tanto a las *discrecionales* políticas aplicadas por el Brasil, sino a factores domésticos.

En primer lugar, más allá del indudable estímulo a las exportaciones que se deriva de la vigencia de un elevado tipo de cambio real, es ostensible la ausencia de una política que apunte a la redefinición del perfil de las exportaciones argentinas. Se insiste en mante-

ner una inserción pasiva y subordinada en el escenario regional e internacional, en actividades de bajo dinamismo, con demandas que suelen experimentar fuertes oscilaciones, y con reducido “efecto-tracción” en el nivel interno en lo que se vincula con la creación de eslabonamientos productivos y puestos de trabajo (sobre todo en el ámbito fabril) y con la difusión de conocimiento científico-tecnológico. Esto va en contra de las tendencias prevalecientes en el mercado mundial, donde se visualiza una creciente gravitación en los flujos de comercio de bienes de mucho mayor grado de elaboración y sofisticación que los exportados por nuestro país (se trata, en su mayoría, de productos no basados sobre recursos naturales y que incorporan una importante densidad tecnológica). Y contribuye a profundizar la brecha tecnológica y de productividad que nos separa de las naciones centrales y de muchas periféricas (como, por ejemplo, los “tigres asiáticos” o el propio Brasil)¹³. Además, dificulta sobremanera la posibilidad de avanzar hacia una

¹³ Otro elemento a tener en cuenta es que, dada la diferencia de productividad entre la Argentina y tales países —en gran medida debido al retraso tecnológico de la primera, estrechamente vinculado a su vez con las características de la reestructuración industrial de las últimas décadas—, la depreciación de la moneda se traduce en una desvalorización del trabajo argentino en el mercado internacional y, por lo tanto, tiene lugar un intercambio desigual que “empobrece” en términos relativos el nivel de vida de los trabajadores locales. Sobre el particular, consúltese, entre otros, a Arceo, E.: “El ALCA. Acuerdos, confrontaciones y proyectos de sociedad”, *Realidad Económica*, Nº 200, Buenos Aires, noviembre-diciembre 2003, Emmanuel, A.: *El intercambio desigual*, Siglo XXI, México, 1972, y Wallerstein, I.: *The Capitalist World-Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

estructura industrial más integrada, diversificada y compleja que la actual.

Naturalmente, la instrumentación de medidas tendientes a modificar el contenido de nuestras exportaciones supondría desarrollar nuevos sectores y actores, así como fortalecer a algunos de los pocos existentes no asociados al procesamiento de recursos naturales que en el presente logran colocar una proporción (variable aunque en general reducida) de su producción en el exterior. Y, por esa vía, sentar las bases para restarle poderío económico y capacidad de coacción a la mayoría de nuestros grandes "burgueses nacionales", proveedores casi exclusivos en el nivel local de un "bien" -las divisas- tan necesario para una economía dependiente como la argentina. De allí que esta cuestión no integre el listado de prioridades cuando se discute el Mercosur y, más ampliamente, el rumbo de la actual política económica.

En segundo lugar, y más allá de ciertas declaraciones, en los hechos no se vislumbran intenciones genuinas de transformar el mercado común en algo más que un espacio de libre circulación de capitales y mercancías. Ni de diseñar e implementar en forma coordinada entre todos los países miembro una estrategia regional de división interna del trabajo y de complementación productiva con vistas al desarrollo armónico y sustentable de la región y al acceso al merca-

do mundial en algunos de sus segmentos más dinámicos.

Entre otras cosas, ello llevaría a replantearse el patrón de inserción de nuestro país en el "mercado ampliado" y a promover el desarrollo y el fortalecimiento de actividades y actores muy castigados por el proceso de desindustrialización de las últimas décadas. Se trata de medidas que no parecen encontrarse dentro de los horizontes estratégicos de nuestros "burgueses nacionales". Dadas sus desventajas relativas *vis-à-vis* buena parte del empresariado brasileño y su inserción en la economía doméstica, estos integrantes del poder económico local parecen estar mucho más preocupados por mantener el *statu quo* (con algunas leves modificaciones, como la protección a ciertos sectores), que por avanzar en el sentido señalado (después de todo, el Brasil constituye un importante destino para sus exportaciones).

En tercer lugar, en la crítica al apoyo del Estado brasileño a los sectores productivos de ese país subyace una cuestión doméstica de suma relevancia: la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo socioeconómico en general, e industrial en particular. Así, para hacer frente a nuestra debilidad relativa en la mayoría de los sectores fabriles se pide protección para los más "sensibles" y que el país vecino dé marcha atrás con prácticas de larga data (una de las bases de su potencial

industrial). Ello, en lugar de instrumentar un plan orgánico de reconstrucción fabril que sienta las bases para, entre otras cosas, empezar a reducir las “asimetrías estructurales” existentes y revertir los tremendos legados que sobre la estructura productiva se derivan del “modelo financiero y de ajuste estructural” vigente entre 1976 y 2001. Sin duda, en el campo de la política industrial hay mucho que aprender del Brasil y de numerosos países periféricos que han concretado procesos relativamente exitosos de industrialización a partir de una activa intervención estatal¹⁴.

Todo esto tampoco parece encontrarse en la lista de prioridades de nuestra gran “burguesía nacional”, que ha ganado mucho desde el abandono de la Convertibilidad; seguramente es por eso que postula que la vigencia de un tipo de cambio real alto, una “macro sana” y apoyo estatal *selectivo* (a su favor, claro está) son condiciones necesarias y *suficientes* para concretar la reindustrialización de la Argentina¹⁵.

Hacia otra integración regional

El análisis de las posiciones recientes de las fracciones dominantes locales de nuestro país sobre *qué hacer* con el Mercosur permite reafirmar lo dicho acerca de que difícilmente se esté en presencia de lo que constituiría una burguesía nacional. Ante la aguda crisis en la que se halla inmerso el proceso de integración, la apuesta de estos sectores ha pasado por la defensa de intereses sectoriales específicos, la crítica al Brasil por su política de apoyo a la industria y la preservación de mucho de lo existente. Esta estrategia ha logrado congregarse el apoyo de amplias capas del empresariado doméstico y de buena parte de la clase dirigente (no sólo del actual gobierno). Se trata de “soluciones” que aportan muy poco para empezar a resolver *en serio* los problemas del Mercosur. Sin duda, todo esto se vincula con las características del proyecto de país de nuestros sectores dominantes y con el hecho de que éstos “han dejado, en su transnacio-

¹⁴ Para un análisis pormenorizado de estos temas, consúltese Amsden, A.: *The rise of “The Rest”. Challenges to the west from late-industrializing economies*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

¹⁵ Cabe incorporar aquí una breve digresión: dada la inserción estructural de estos sectores en la economía doméstica, la reindustrialización que se impulsa está estrechamente vinculada con el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales con que cuenta el país (en otros términos, a un perfil productivo muy similar al que tendió a consolidarse entre 1976 y 2001, con todo lo que ello supone en términos de, por ejemplo, creación de empleo y distribución del ingreso). Véase Schorr, M.: *Industria y Nación. Poder económico, neoliberalismo y alternativas de reindustrialización en la Argentina contemporánea*, Edhasa, Buenos Aires, 2004.

nalización subordinada, de encarar un proyecto susceptible de impulsar la reindustrialización sobre la base del desarrollo y el control de nuevas capacidades productivas¹⁶.

Si se acepta que el Mercosur está en crisis y que es imperioso encarar un proceso de reindustrialización de la Argentina sobre nuevas e inclusivas bases de sustentación (y que para ello es indispensable implementar una política orgánica enmarcada en una estrategia nacional de desarrollo que tenga como "norte" el abandono del arcaico principio de las ventajas comparativas estáticas y la búsqueda por resolver los dos grandes *males* de la economía y la sociedad posdictadura militar: la crisis laboral y la inequidad distributiva), pocas dudas quedan de que se requieren visiones y planteos alternativos a los esgrimidos por el *establishment* nacional. En ese marco, es indudable que el impulso a la integración regional, con eje en la complementación productiva de los países latinoamericanos (en particular, aunque no en forma exclusiva, de los que integran el Mercosur), debería ser uno de los pilares básicos de tal programa.

Al respecto, vale recordar las palabras de Adolfo Dorfman, quien a mediados de los años sesenta destacaba la importancia de la in-

tegración fabril de América latina: "Esa integración no interesa por sí, ni mucho menos como un objetivo de comercio exterior, sino como elemento auxiliar para cimentar y expandir el desarrollo industrial interno por los cauces más convenientes, que en los momentos actuales adquiere un alto valor estratégico... es ese objetivo de industrialización el que debe predominar y orientar las demás decisiones y actitudes. Tiene especial importancia no perder de vista esas consideraciones porque, en determinados casos, se presentará como la alternativa de expandirse por la vía de integración y complementación industrial regional, o por la vía del desarrollo de complejos industriales complementarios o integrados dentro del país"¹⁷.

Es indudable que la puesta en práctica de medidas de esta naturaleza no sólo se asocia con cuestiones económicas (agrandar el tamaño del "mercado interno", propender a un desarrollo regional armónico, etc.), sino también políticas: permitir que los países de América latina puedan ubicarse estratégicamente -no a la defensiva- en el "mundo de la globalización" y frente a las múltiples presiones existentes a favor de la concreción del proyecto neoimperialista del Alca (que en el medio local ha sido impulsado por *miem-*

¹⁶ Arceo, E.: "op. cit".

¹⁷ Dorfman, A.: *La industrialización en la América Latina y las políticas de fomento*, Fondo de Cultura Económica, México, 1967.

*bro*s ilustres de la “burguesía nacional” y por altos funcionarios de la actual administración gubernamental)¹⁸.

En suma, para empezar a desandar varios de los regresivos procesos que ha vivido la Argentina en las últimas décadas está claro que se precisa *otro Mercosur y otra integración regional*; planteo que sin duda entra en conflicto con el de la autoproclamada “burguesía nacional”. En su transnacionalización subordinada, que aleja toda posibilidad de reindustrializar el país sobre bases de sustentación crecientemente inclusivas en lo económico-social, la gran “burguesía nacional” reduce sobremanera las posibilidades existentes de llevar adelante un proyecto económico opuesto al del “imperialismo” (de allí que no se interpele a los sectores populares como aliados estratégicos ni, en ese marco, que se realicen concesiones significativas hacia los mismos, todo lo cual refuerza el carácter excluyente del proyecto de país impulsado por esta fracción de la clase dominante local). En ese marco, las disputas pasan, en todo caso, por lograr una mejor posición relativa en la estructura de subordinación y por tratar de ocupar la mayor cantidad posible de espacios que se abren como

“socios menores” del capital extranjero.

En este sentido, las diferencias con el mayor de los socios del Mercosur pueden ser vistas en términos de dos fracciones de clase -la gran burguesía brasileña y la argentina- cuyos proyectos difieren sustancialmente en la forma de integrarse al mercado internacional y en las bases estructurales asociadas con tal patron de integración. Si la burguesía brasileña impulsa un proyecto que aspira a una posición subordinada “activa”, menos dependiente y con una capacidad de maniobra relativamente importante, la “burguesía nacional” argentina aspira a mantener su subordinación “pasiva”, sin posibilidad de revertir en lo sustantivo el sendero desindustrializador de las últimas décadas ni, por ende, modificar el subdesarrollo del país y los lazos de dependencia.

Es por ello que, en última instancia, lo que está en discusión cuando se problematiza el Mercosur no es una cuestión meramente técnica, sino las relaciones de fuerzas internas entre las distintas clases y fracciones de clase, así como las propias bases materiales que les sirven de sustento.

28 de julio de 2005

¹⁸ Véase la edición del 7/11/2003 del diario Clarín (“Techint prefiere a EE.UU. antes que el Mercosur”); también, Bielsa, R.: “Un Alca con principios puede tener un buen final”, *Clarín*, 2/5/2005.

Los principales desafíos del gobierno progresista uruguayo

*Antonio Elías**

En el primer punto de este trabajo se afirma que el modelo neoliberal ha tenido dificultades importantes pero que continúa vigente en América latina; en los siguientes puntos se aportan elementos, desde un enfoque principalmente económico, para analizar la actual situación del Uruguay y los riesgos y oportunidades que ha abierto la nueva situación política, se describe y analiza el carácter estructural de la crisis (punto 2); la opción por la ortodoxia económica (punto 3); la prioridad de la deuda externa sobre la social (punto 4); las características del mercado de trabajo en la explicación de la pobreza; por último, se destaca el dilema del nuevo gobierno, fortalecer institucionalmente a los trabajadores o reafirmar la opción por el mercado y los inversores internacionales.

La disyuntiva del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez es continuar aceptando las premisas del modelo dominante o hacer un viraje eligiendo un camino independiente, lo cual implicará necesariamente desarrollar un paradigma institucional alternativo cuya piedra angular es el fortalecimiento del trabajo frente al capital. Para que haya un Uruguay productivo hay que cambiar el modelo -las reglas de juego y la estrategia de desarrollo- y para ello es necesario crear un punto de inflexión, para lo cual se requiere de una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria. Esa es la tarea de las fuerzas políticas y sociales del cambio, de lo contrario se estarían creando las condiciones para la continuidad del modelo neoliberal. Ese es el peligro... y no sólo en el Uruguay.

* Master en Administración Pública y en Desarrollo Económico. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Instituto de Economía de la Universidad de la República (Montevideo, R.O. del Uruguay). aelias@ccee.edu.uy.

“Estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político y social que pasa por la generación de mejores condiciones para la disputa con la hegemonía de las clases dominantes. La conquista de un gobierno de signo progresista es un jalón fundamental en el proceso de lucha por desplazar al actual bloque en el poder... para resolver las cuestiones de nuestra dependencia secular”¹.

Introducción

En el marco de la grave crisis estructural de la economía latinoamericana con su correlato de exclusión y segmentación social-consecuencia de las seculares relaciones centro-periferia y de la profundización del proceso de globalización- fueron derrotados electoralmente, en la Argentina, el Brasil y el Uruguay, los partidos más claramente identificados con los intereses de las clases dominantes y el neoliberalismo.

En el caso uruguayo, el debilitamiento del “sentido común” neoliberal se reflejó en el acceso al gobierno, el primero de marzo de 2005, de una coalición de fuerzas políticas moderadamente opositoras al modelo neoliberal que se aplicaba en el país desde principio de los setenta. La aplastante victoria electoral en la primera vuelta (31/10/04) le otorgó mayoría parlamentaria absoluta en ambas cámaras, habilitando la posibilidad

de realizar cambios significativos en el marco legal.

Las nuevas autoridades fueron electas bajo un programa común, relativamente laxo, con un discurso preelectoral que escondió la existencia, a su interior, de concepciones político-ideológicas y estrategias de desarrollo sustancialmente diferentes. El objetivo de obtener el “triumfo electoral” hizo que se silenciaron las discrepancias, las que se expresaron posteriormente en las fuertes pugnas por las designaciones en el gabinete ministerial y en el equipo económico, así como en los temas relacionados con el tratamiento de los deudores del sector productivo y el acuerdo de inversiones recíprocas con Estados Unidos.

Las múltiples expectativas que se generaron en los militantes de izquierda, los trabajadores y los sectores más postergados de la sociedad respecto de la dirección y profundidad de los cambios que realizaría la nueva administración no fueron satisfechas hasta ahora. La concepción económica predominante en el gobierno comparte los lineamientos del Fondo Monetario y el Banco Mundial, atendiendo así los intereses del capital financiero internacional y de las empresas transnacionales. Paralelamente, sin embargo, se han producido avances importantes en la reducción de la asimetría entre el capital y el trabajo.

¹ Declaración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, 27/12/2004

Existen, esquematizando, dos grandes tendencias en pugna, una, actualmente predominante, que fundamenta la necesidad de equilibrios fiscales, estabilidad macroeconómica y de las reglas de juego, apostando a la inversión privada extranjera que permitiría un proceso de crecimiento que, supuestamente, sustentaría los proyectos de interés social, propuesta que se identifica a sí misma con las orientaciones de los actuales gobiernos del Brasil y Chile. La otra tendencia, ahora subordinada, plantea una nueva estrategia de desarrollo productivo para superar una crisis estructural de larga data a través de procesos de participación creciente de las organizaciones sociales y de cambios culturales e institucionales que fortalezcan el papel del Estado como orientador del proceso económico.

En este trabajo se sostienen dos hipótesis: una, que existe en el Uruguay un gobierno en disputa entre los intereses del gran capital y los intereses de los trabajadores con potenciales aliados en los sectores productivos de la burguesía y pequeña burguesía industrial y agraria; dos, que para que esta disputa continúe es condición necesaria, aunque no suficiente, que se fortalezca la capacidad de los trabajadores para enfrentar el capital; la ley de libertades sindicales es hoy un mojón

fundamental que determinará, en gran medida, cuál es la orientación de este gobierno.

En ese sentido, la posibilidad de modificar la actual correlación de fuerzas dependerá de los niveles de conciencia, organización y dirección del movimiento popular lo que, en gran medida, pasará por las posiciones que adopte e impulse el movimiento sindical². Éste se ha caracterizado por su independencia y autonomía respecto del Estado y las fuerzas políticas, si bien debe reconocerse que la actual situación es inédita, nunca hubo un gobierno integrado por fuerzas políticas tan cercanas al movimiento sindical.

En el primer punto de este trabajo se afirma que el modelo neoliberal ha tenido dificultades importantes pero que continúa vigente en América latina; en los siguientes puntos se aportan elementos, desde un enfoque principalmente económico, para analizar la actual situación del Uruguay y los riesgos y oportunidades que ha abierto la nueva situación política, se describe y analiza el carácter estructural de la crisis (punto 2); la opción por la ortodoxia económica (punto 3); la prioridad de la deuda externa sobre la social (punto 4); las características del mercado de trabajo en la explicación de la pobreza; por último, se destaca el dilema del nuevo gobierno, que consiste en fortalecer institucio-

² El movimiento sindical está organizado en una central única, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).

nalmente a los trabajadores o reafirmar la opción por el mercado y los inversores internacionales.

1. El modelo neoliberal ha tenido reveses pero sigue vigente en América latina

El actual proceso de globalización se caracteriza por contener un centro proteccionista -con un Estado que realiza políticas intervencionistas- y una periferia aperturista en el que el Estado deja librado el proceso económico a la iniciativa de las empresas privadas, fundamentalmente las transnacionales. Como consecuencia, la dinámica de la economía mundial sigue siendo desigual y concentradora.

El modelo de sustitución de importaciones que predominó en América latina hasta la década de los sesenta fue remplazado por un modelo con fundamentos neoclásicos, lo que se expresa en políticas con una clara hegemonía de mercado y en la apertura externa (asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado lograría la convergencia de las economías) que lleva al predominio del capital financiero. Dicho capital, en su primera fase, se sintetiza en el denominado Consenso de Washington y al que posteriormente, a mediados de los noventa, se incorpora las llamadas reformas de “segunda generación” que apuntan centralmente a la modificación del marco institucional para excluir la política

del ámbito de la economía.

El paradigma dominante tiene como núcleo central el supuesto de que el mercado, más allá de sus imperfecciones, asigna mejor los recursos que el Estado y considera, además, que la acción del Estado para corregir fallas en el funcionamiento del mercado genera más perjuicios que beneficios. Con dicha visión como punto de referencia se aplican políticas económicas que han desestructurado nuestras economías. Políticas cuya forma concreta, más allá de las múltiples heterodoxias, depende del nivel de desarrollo de cada país, de la correlación de fuerzas políticas y sociales, y del nivel técnico-político de los encargados de ejecutarlas.

El neoliberalismo desarrolla un modelo de política económica in-moral válido para un mercado perfecto mítico -piedra de toque del paradigma que rigió durante el período- ignorando el mercado mundial real -caracterizado por el proteccionismo comercial y la especulación financiera-. Oculta, a través de un discurso simplificador, que en el mercado se reflejan -en forma inseparable- relaciones económicas, políticas y sociales asimétricas.

En la flexibilización del mercado laboral se expresan, con meridiana claridad, los intereses de los sectores dominantes que implican una reducción de los beneficios obtenidos a lo largo del siglo pasado por los trabajadores. La propuesta de dejar librado el merca-

do laboral al libre juego de la oferta y la demanda no toma en consideración las profundas asimetrías de información y poder entre trabajadores y empresarios.

En países con insuficientes fuentes de empleo como los nuestros -y, por tanto, con ejércitos de reserva cuantiosos-, la desregulación del mercado laboral reduce a niveles extremos la capacidad de negociación del trabajo ante el capital. Los bajos salarios, la precarización del trabajo, el desempleo, la segmentación social y la exclusión son producto de una desigualdad estructural que es profundizada por las políticas de liberalización de los mercados.

La implementación de políticas que reducen la masa salarial en países periféricos, generalmente dominados por políticas exportadoras, se ve facilitada porque para los sectores dominantes, insertos en el mercado internacional, el ciclo económico no se cierra en el mercado interno sino en el globalizado. Por lo tanto, las condiciones para deprimir los niveles de retribución de la fuerza de trabajo son mucho más favorables que las existentes en los países centrales, donde la retribución del trabajo es, por un lado, un costo para el capital, y, por otro, un componente clave de la demanda agregada, por lo cual si se produce una disminución de las retribuciones más allá de ciertos límites, hay una reducción del mercado que termina interrumpiendo el ci-

clo de realización del capital.

El otro componente clave del planteo neoliberal es la reducción del papel del Estado, tanto en su incidencia económica directa como productor de bienes y servicios públicos, como en su papel regulador, en tanto modificaría las posibilidades de funcionamiento del mercado, generando distorsiones en la asignación de factores y en la posibilidad de fomentar el ahorro y la inversión. En su versión más dura, el neoliberalismo pretende, inclusive, que el mercado determine por sí mismo la oferta de bienes preferentes como la salud y la educación, todo lo cual redundaría en mayores beneficios y en nuevos mercados para la inversión privada.

Así los dos pilares básicos del modelo de sustitución de importaciones -el papel central del Estado (peso relevante de los gastos del estado en el PIB, importante número de empresas públicas y un amplio marco regulatorio que incluía la protección de los derechos de los trabajadores) y el cierre relativo de la economía (barreras arancelarias, controles de cambio y tipo de cambios diferenciales, cuotas)- fueron remplazados por un nuevo modelo basado sobre el desplazamiento del Estado por el mercado y una fuerte apertura de la economía a la competencia internacional que, supuestamente, permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que facili-

Cuadro N° 1. Proporción del PIB per cápita de siete países latinoamericanos respecto del promedio de seis países industrializados

	1950	1973	2002
Promedio de seis países industrializados	100	100	100
Promedio de siete países de América latina	57	43	15
Argentina	82	61	17
Brasil	28	30	12
Chile	63	38	17
Colombia	34	27	8
México	34	32	24
Perú	37	30	8
Venezuela	122	82	17

Notas: Los países industrializados considerados son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia; el promedio aritmético de estos países es igual a 100.

Fuentes: Años 1950 y 1973, Olga Pérez Soto sobre la base de Maddison (1995); año 2002, elaborado según el Informe del Banco Mundial 2004.

taría el ingreso de capitales y de tecnología, lo cual no sucedió.

A la fecha, la evolución de la economía mundial permite afirmar, como se demuestra en el **cuadro N° 1**, que: a) sigue siendo válido analizar la economía mundial reconociendo que existen dos polos, centro y periferia; b) el subdesarrollo de la periferia responde a causas intrínsecas al sistema capitalista; c) la globalización -proceso derivado de los avances científico-tecnológicos y del proyecto hegemónico del capital transnacional- aumenta la brecha entre los países centrales y los periféricos; d) el proceso de las economías periféricas no es un camino hacia el desarrollo, sino la contracara complementaria del desarrollo de los países centrales.

Un dato ilustrativo de la brecha es el PIB per cápita promedio del año 2002, que alcanza a US\$ 24.375 para los seis países industrializados y a sólo US\$ 3.579 para las siete mayores economías de América latina.

Como puede comprobarse el autoritarismo reestructurador de los setenta, la década perdida de los ochenta, el crecimiento con exclusión social de los noventa y el desmoronamiento socioeconómico del último quinquenio han ampliado la brecha entre los países centrales y los países periféricos de América latina. Nuestros países son crecientemente marginales en la economía mundial, las sociedades son cada vez más heterogéneas, el tradicional dualismo entre incluidos y excluidos se

Cuadro Nº 2. Evolución de las personas que viven en América latina y el Caribe con menos de dos dólares al día

	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2001
En millones	99	119	115	125	136	117	127	128
En % del total	26,9	30,4	27,8	28,4	29,5	24,1	25,1	24,5

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2004.

agudiza, se amplía la segmentación social, empeora la distribución del ingreso, crece el desempleo y la precarización del trabajo.

El crecimiento de la pobreza es impresionante, en América latina 128 millones de personas, un 24,5% de la población total, viven con menos de US\$ 2 por día, casi 30% más de los que había en 1981. La situación en 20 años de reinado neoliberal empeoró en términos absolutos (**cuadro Nº 2**).

En ese marco de ampliación de la brecha entre países centrales y periféricos y de crecimiento sostenido de la pobreza en nuestro continente han llegado al gobierno, en el último quinquenio, fuerzas y dirigentes políticos que fueron opositores a las políticas neoliberales. Sin embargo, es necesario reconocer que: a) las políticas de los gobiernos de Lula, Kirchner y Vázquez, si bien son muy diferentes entre sí, tienen como factor común que están muy lejos de dar respuesta a la grave crisis estructural y los altos niveles de exclusión en sus respectivos países; b) los acuerdos de integración regional no se vieron fortalecidos por esta coincidencia;

el fracaso continuado del MERCOSUR, particularmente para los pequeños países, así lo demuestra.

2. El caso uruguayo: una crisis estructural de larga data agravada por el neoliberalismo

La sociedad uruguaya, como parte del contexto ya señalado, no ha encontrado los caminos para superar una crisis económica estructural de inserción internacional y de desarrollo productivo de larga data, que tiene su origen en factores históricos, geográficos, demográficos, institucionales y de escala.

En los últimos 50 años, el Uruguay se caracterizó por una tasa de crecimiento de apenas 1% anual per cápita; el dramático incremento de la pobreza y la marginalidad; el agravamiento de los problemas estructurales del mercado de trabajo; un fuerte proceso migratorio de personas en edad laborable y con alto nivel de calificación; el déficit de inversiones pública y privada y un elevado endeudamiento público que actual-

mente llega a casi 100% del producto bruto interno³.

Los sectores dominantes ubicaron las causas profundas del estancamiento productivo de la economía uruguaya en la transferencia de recursos del sector exportador hacia los sectores protegidos y como respuesta imponen (dictadura militar mediante, 1973-1985) un modelo extrovertido: la producción debe dirigirse hacia el mercado externo.

En un marco de fuerte represión se procesaron importantes transformaciones institucionales, que se concretaron en una ley de inversiones extranjeras (1974) y una disminución generalizada y progresiva de las restricciones a las importaciones con el fin de generar una reconversión industrial para reemplazar la industria sustitutiva de importaciones por actividades de exportación.

Mientras que la liberalización comercial se fue procesando con marchas y contramarchas entre un esquema de apertura unilateral y otro de integración regional -a pesar de los acuerdos bilaterales con la Argentina y el Brasil y la posterior creación del Mercosur- la apertura y la desregulación financiera se aplican en forma clara en función de un proyecto que concibe al Uruguay como “plaza financiera regional”, basado fundamentalmente sobre la admisión del dólar como unidad de cuenta

para los contratos internos; la libre movilidad de capitales y de divisas; la instalación de la banca *off-shore*.

El conjunto de criterios de política económica sobre los que se sustentó la prosecución del libre mercado y la “defensa del consumidor” generó lo contrario a la sustitución de importaciones: la sustitución de bienes producidos en el país por bienes producidos en el exterior. El mercado externo, complementariamente, no logró asumir su papel como impulsor fundamental del crecimiento.

El modelo aplicado desde los setenta ha sido extremista en su preferencia por el mercado y en el cuestionamiento de la acción colectiva a través del Estado. En ese sentido trata de excluir lo político, porque lo político provoca acciones voluntarias que inciden negativamente en el orden “natural” del mercado, omitiendo que los procesos sociales son siempre históricos y no naturales.

Entre 1999 y 2002 se produjo en el Uruguay la mayor crisis económica de los últimos 100 años, la que fue detonada por las devaluaciones de sus principales socios comerciales y la incapacidad de la conducción económica para adaptarse a la nueva situación regional. Se deterioraron las finanzas públicas, aumentó el riesgo-país, se debilitó el sistema bancario y se perdió la confianza en la

³ En el documento “Compromiso Nacional por Empleo, Ingreso y Responsabilidades” presentado el 19 de mayo de 2005.

banca oficial. En 2002 se produjo una formidable fuga de capitales, se retiraron el 46% de los depósitos en dólares del sistema bancario. Los depósitos de no residentes cayeron 65% y los de residentes casi 30 por ciento

El costo fiscal de la crisis bancaria por concepto de asistencia a instituciones afectadas por la “corrida” de depósitos fue muy elevado, puede estimarse en aproximadamente 2 mil millones de dólares equivalentes a un 11% del PIB de 2002.

Como consecuencia de los persistentes déficit fiscales, y de su financiamiento con endeudamiento en moneda extranjera, la deuda bruta del sector público, que en 1998 era relativamente baja como porcentaje del PIB, se triplicó, pasando de 33,9% en 1998 a 92,8% en 2002.

La crisis determinó un pronunciado deterioro de las principales variables macroeconómicas: Ingreso Bruto Nacional (-19,7), PIB (-17,5), consumo (-20,2), inversión (-50,9), exportaciones (-19,8), importaciones (-37,3), inflación (31,7), déficit fiscal promedio (4,3). Se produjo como consecuencia un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población y al igual que en crisis anteriores, la expulsión de sus ciudadanos (emigración) surge como una “válvula de escape” para los problemas de la sociedad uruguaya.

El canje de la deuda externa pú-

blica, mayo de 2003, que alejó el *default* -postergando los pagos por amortizaciones y aumentando los costos por intereses- sustentó una estabilización de las variables macroeconómicas y una relativa recuperación de la confianza en el sistema financiero: cayó el “riesgo país” y la tasa de interés, crecieron los depósitos bancarios pero se mantuvo la extrema fragilidad del sistema financiero, los depósitos en su inmensa mayoría siguen siendo de corto plazo y en moneda extranjera.

Debe destacarse que el período electoral no generó modificaciones negativas en las variables económicas, por lo contrario el déficit fiscal del Gobierno Central bajo de 4,6 %, en 2003, a 2,1% del PIB en 2004 y el acceso al gobierno de fuerzas progresistas no generó temores en el sistema financiero: no hubo aumento del riesgo país ni fuga de capitales. La continuidad de las políticas ortodoxas demostró que fueron correctas las expectativas del “mercado”.

Las dos grandes crisis que culminaron en macrodevaluaciones en 1982 y 2002, demuestran que “la aplicación de modelos de estabilización basados sobre ‘*anclas cambiarias*’, con sobrevaluación de la moneda, déficit fiscal y en cuenta corriente, y dependencia creciente del financiamiento interno y externo, generan una fase de crecimiento acelerado que luego, ante el cambio de las condiciones de financiamiento, da lugar a una

crisis múltiple (de balanza de pagos, bancaria, de financiamiento del sector público y del sector real), y que “una economía pequeña como la uruguaya, que requiere crecer hacia fuera, no puede tener niveles de tipo de cambio real desalineados de los de sus principales socios comerciales”⁴

3. Los objetivos macroeconómicos de una conducción ortodoxa marcan la agenda

El nuevo gobierno generó diversas expectativas sobre los cambios que iban a realizarse, lo que se explica por la existencia de múltiples lecturas acerca de lo que significaba su propuesta programática “multicolor”. Para muchos no pretendía ir más allá de avanzar hacia lo que algún dirigente denominó “capitalismo en serio”, acompañado de “un plato de comida para todos”. La interpretación de lo que es un capitalismo en serio se refleja claramente en el acuerdo concretado con el FMI, mientras el “plato de comida”, por ahora, llega a pocos, demorado y mal servido.

En los primeros meses del nuevo gobierno (marzo-octubre) la agenda ha estado marcada por los objetivos macroeconómicos, que se

han transformado en el fiel de la balanza de las decisiones de todas las políticas, en la medida que la búsqueda del equilibrio fiscal (ortodoxia económica) y de cierto nivel de superávit fiscal primario (exigencia de los acreedores y sus representantes) generan una restricción presupuestaria muy dura que impide atender en tiempo y forma las demandas sociales e implementar políticas de desarrollo productivo.

El diagnóstico del gobierno identifica, implícitamente, como causa fundamental de la actual situación que el modelo fue mal implementado por los anteriores gobiernos: ergo, la estrategia es profundizar la línea ortodoxa de los últimos treinta años. La agenda de cambios acordada con el FMI así lo demuestra, incluido el exabrupto de afirmar ante los organismos internacionales, que las reformas estructurales que fueron impulsadas por anteriores gobiernos y rechazadas por la ciudadanía ahora podrán realizarse: “está abierto el campo para seguir haciendo reformas” porque las impulsará un gobierno progresista⁵.

La disyuntiva que tenía el nuevo gobierno al asumir el primero de marzo era apostar a ser “ganador relativo” en la competencia por atraer capitales extranjeros acep-

⁴ “Diagnóstico de la situación actual del país y lineamientos de salida a la crisis”, comisión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2003. El autor es coautor del documento.

⁵ Semanario *Búsqueda*, 9/07/05, declaraciones del Viceministro de Economía en un seminario del BID, en Washington.

tando las premisas del modelo dominante, o elegir un camino alternativo e independiente, lo cual implicaría, necesariamente, redefinir los niveles de apertura de nuestra economía: el equipo económico eligió lo primero. Se profundiza la dependencia de los designios del Fondo Monetario y el Banco Mundial, lo que sumado a las fuertes carencias del proceso de integración regional, marcan con enorme claridad un problema estructural del país: la dificultad para lograr una inserción internacional que posibilite un proceso de desarrollo sostenido y sustentable.

Se percibe, también, que los objetivos de la política económica no se corresponden con la construcción de un país productivo con justicia social; por lo contrario, se estarían profundizando el predominio del capital financiero y ampliando los niveles de dependencia respecto de los países centrales a través de los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito y el cuestionado Tratado Bilateral de protección recíproca de inversiones, aún no resuelto, con los Estados Unidos⁶.

Debe destacarse que el acuerdo *stand-by* con el FMI tiene una duración de tres años, el máximo posible, lo cual implica una voluntad expresa del gobierno de comprometerse en forma duradera, lo que podría explicarse por la conveniencia de: a) dar claras señas

de confiabilidad a los potenciales inversores; b) fijar un techo difícilmente modificable a las demandas sociales; c) evitar los costos asociados con las negociaciones, los cuales van desde las pujas al interior del gobierno hasta los potenciales conflictos con los trabajadores organizados. En esa misma línea de razonamiento se ubicaría el hecho de que Danilo Astori fue nominado como ministro de economía en Washington y es el único ministro que tendría garantizada la permanencia por cinco años.

El acuerdo realizado con el FMI implica obtener un superávit fiscal primario creciente de 3,5% (2005), 3,7% (2006) y 4% (2007) del PIB. Lograr dichos superávits requiere impulsar una ley presupuestaria sumamente restrictiva que no dará respuesta a la deuda social. Las dificultades para el nuevo gobierno están, además, en la composición y rigidez del gasto público: en 2004 los gastos no discrecionales fueron el 57% del total de egresos (36% de asistencia a la seguridad social y 21% de intereses de deuda) y los discrecionales sólo 43% (18% remuneraciones, 16% otros gastos de funcionamiento, 3% transferencias y sólo 6% inversiones).

Las necesidades de financiamiento del sector público que devienen de la opción por la reducción de la deuda con el FMI, impli-

⁶ Firmado por el presidente Jorge Batlle el 25/10/04 y que requiere ratificación parlamentaria.

can obtener financiamiento por encima de los 2.000 millones de dólares anuales, a efectos de cumplir con los vencimientos de deuda, cubrir el déficit fiscal y, en menor medida, recomponer el nivel de reservas internacionales. Esta opción de política aumenta la vulnerabilidad del país ante la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

La reiteración de la apuesta a una inserción internacional basada sobre la apertura indiscriminada y la reafirmación del mercado como principal mecanismo para la asignación de recursos, no avanza en la dirección de reducir la vulnerabilidad de nuestra economía y crea condiciones para una profunda frustración en una ciudadanía que apostó al desplazamiento del “pensamiento único” predominante en lo económico.

El mal manejo de la inflación y el tipo de cambio atentan contra el desarrollo del país productivo. Luego de la crisis hubo una mejora sustancial de la competitividad externa consecuencia de la pronunciada devaluación de 2002, la baja inflación posterior y la apreciación de la moneda de los socios comerciales de la región y de Europa. Comenzó, sin embargo, a mediados de 2004, un nuevo proceso de sobrevaluación de la moneda nacional, el valor del dólar cayó 18,4% en términos nominales (de julio 2004 a julio 2005), mientras la inflación en pesos alcanzó a 4,4% en igual período.

Ello afectó negativamente la competitividad de las exportaciones favoreciendo las importaciones con su consiguiente efecto negativo sobre el mercado interno. Increíblemente, el nuevo gobierno vuelve a repetir las recetas equivocadas, generando el razonable rechazo del sector productivo y el apoyo de los importadores y del sector financiero. Es de señalar, en particular, que los precios en dólares del Uruguay son 30% superiores a los de la Argentina, su principal socio comercial, considerando como paridad 1999.

El modelo que está impulsando la actual conducción económica es conocido, sus fundamentos elementales y sus resultados, históricos y recientes, son negativos. Asumen como premisa que el crecimiento de un país depende de las inversiones (lo cual es indiscutible, porque habría que conocer el tipo y la calidad de las mismas) y se continúa el argumento afirmando que los inversores vendrán al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de juego y aval del FMI.

En ese marco las políticas de conservación de los ajustes fiscales realizados por los gobiernos anteriores en los salarios de los funcionarios, los gastos de funcionamiento y las inversiones son fundamentales para garantizar el pago de los intereses de la deuda. El atraso cambiario, a su vez, po-

tencia esta estrategia en el proceso de transformación de los pesos del superávit fiscal primario a dólares para el pago de las obligaciones de dicha deuda.

El mantenimiento de las actuales reglas económicas y la agenda de cambios estructurales que impulsan el FMI y el Banco Mundial son, también, parte de la estrategia. A partir del supuesto de que cualquier modificación de las reglas establecidas generará incertidumbre entre los potenciales inversores -necesarios para ampliar la capacidad productiva y/o cubrir las necesidades financieras del Estado- se asumen como mandamientos: *cumplirás los contratos, no tocarás las AFAP, reafirmarás el acuerdo de inversiones recíprocas con Estados Unidos, asociarás las empresas públicas con capitales extranjeros, eliminarás los monopolios públicos, honrarás la deuda, ejecutarás a los malos pagadores.*

A veces, sin embargo, el cumplimiento estricto de ciertas reglas puede molestar a los potenciales inversores. La propia reforma constitucional que deja exclusivamente en manos del Estado los servicios de agua corriente, aprobada por la ciudadanía en octubre de 2004 en un acto de democracia directa, es sometida a un decreto interpretativo por lo cual se elimina su carácter retroactivo. ¡Una buena señal para el capital transnacional y una muy mala señal para la ciudadanía!

La idea fuerza central que ordena la “consistencia y coherencia interna” del equipo económico es tan simple -al igual que cualquier reducción de problemas complejos a una sola variable- que le permite actuar con premura cuando cualquier otro integrante del gobierno se va de “línea”: ¡No se hará nada que pueda afectar la credibilidad del país ante el capital extranjero!

No existe una sola explicación acerca de por qué no vinieron los inversores extranjeros en el período 1990-1998, cuando el país tuvo un fuerte crecimiento del producto, cierta estabilidad macroeconómica y cumplimiento de las reglas de juego. Quizá se asuma como respuesta la que dieron los gobiernos anteriores: no hubo inversiones por la “inestabilidad” legal provocada por el uso de instrumentos de democracia directa por parte -entre otros- de la propia fuerza que hoy gobierna.

También sería conveniente saber por qué entienden que el capital extranjero daría prioridad a algunas seguridades del entorno en que operará la inversión y dejará de lado los factores de riesgo del propio negocio, en particular el tamaño y evolución de la demanda, el acceso seguro a los mercados externos y la capacidad de los competidores para producir con menores costos.

Si toda inversión es producto de un *trade off* entre rentabilidad y riesgo - en relación con otros usos

alternativos del capital -, el atraso cambiario, ya señalado, sería un desestímulo muy “estable” a la inversión productiva en bienes y servicios comercializables con el exterior por su incidencia negativa en los costos de producción.

4. La deuda externa tiene prioridad

En el marco conceptual anteriormente señalado se acordaron primero montos y reglas con los organismos multilaterales de crédito para poder pagar los intereses de la deuda (las amortizaciones se pagan contrayendo nuevos préstamos) y luego se verá qué se puede hacer para atender las necesidades sociales y el desarrollo económico en el marco de las restricciones acordadas.

El Sector Público del Uruguay debe en su totalidad US\$ 13.518 millones y sus compromisos de pago para los próximos 30 años suman US\$ 19.979 millones. El PIB en 2004 fue de US\$ 13.216 millones (creció 12,3%, en términos constantes). Esto significa que la deuda pública total es algo mayor que el PIB de 2004, y que los compromisos de pago totales (amortizaciones + intereses) significan un 150% de dicho producto.

En los cinco años del nuevo gobierno se concentran pagos por US\$ 6.141 millones en amortizaciones y US\$ 2.751 millones de intereses, 46% y 45%, respectivamente, de las obligaciones de los

próximos 30 años. El peso de las obligaciones con los organismos multilaterales representa el 85% del total de las amortizaciones del período 2005-2009, siendo el principal acreedor el FMI. Desde dicha posición como acreedor privilegiado el FMI continúa, nuevamente, imponiendo sus políticas de ampliación de la apertura comercial y financiera, la desregulación, las privatizaciones y el ajuste fiscal permanente.

Los intereses de la deuda en los dos primeros años del nuevo gobierno son una quinta parte de los ingresos del Gobierno Central, que ascienden a US\$ 2.862 millones en 2004. En dicho año los pagos por intereses fueron superiores a las remuneraciones anuales de todos los funcionarios del Gobierno Central (112%).

Debe destacarse, por último que un 45% de la deuda pública esta pactado a tasa variable en momentos en que aumenta la tasa de interés internacional. Nuevamente, como en los años '80 la deuda pública, fundamentalmente externa, vuelve a ser un problema central por su impacto sobre la economía y sobre las disponibilidades del presupuesto nacional, lo que reduce significativamente el margen de maniobra del gobierno uruguayo, si éste continúa con su política de priorizar la deuda pública, en detrimento de la deuda social.

Como consecuencia de lo anterior el primer presupuesto del gobierno progresista no fue partici-

pativo ni priorizó las necesidades sociales. Primero se asignaron las partidas para los acreedores internacionales y lo que quedó se distribuyó entre cuatro paredes.

Para satisfacer las necesidades sociales, era imprescindible tomar medidas para reducir los pagos del sector público por servicio de deuda. La opción hecha recorre el camino contrario: pagar lo máximo lo más rápidamente posible para desendeudarse con los organismos multilaterales, lo que implica contraer deuda con el sector privado a intereses mayores.

El primer presupuesto nacional de un gobierno integrado por fuerzas de izquierda se inscribe en el contexto de una economía y una sociedad severamente empobrecidas. El crecimiento del PIB de 2004 (12,3 por ciento) no se reflejó en el poder adquisitivo promedio de los hogares. Los niveles de pobreza e indigencia llegan a cifras nunca antes vistas, lo que aumenta significativamente las necesidades sociales que no pueden ser satisfechas en el mercado por falta de capacidad de pago.

Los egresos del gobierno central, que el Estado podría utilizar para satisfacer dichas necesidades, se han reducido significativamente en el período de crisis, pasando de 5.168 millones de dólares en 1999 a 3.083 millones en 2004, lo que implica un ajuste enorme, de aproximadamente 33 por ciento. El aumento previsto

para el quinquenio ascendería a unos US\$ 500 millones, lo que explica, por lo exiguo de la cifra, que esta política presupuestaria pueda ser calificada como de restricción fiscal permanente.

Varias instancias de negociación se realizaron y realizan previo a la presentación del proyecto presupuestario. Primero se negoció y acordó con el FMI una carta de intención, la cual fija las pautas de la política fiscal con el objetivo de obtener un superávit primario de magnitud inédita: 4 por ciento del PIB a partir de 2007. Esto significa una severa restricción para impulsar un proceso de expansión del gasto público destinado a satisfacer las demandas sociales y el desarrollo económico.

Se destinarán al pago de intereses de deuda casi tres mil millones de dólares, en tanto al Plan Nacional de Emergencia se le dedicarán solamente 200 millones. Con esta información es insostenible afirmar que la prioridad nacional es atender la pobreza y la indigencia. Las prioridades son otras: reducir la deuda con el FMI (política impulsada por dicho organismo para sanear sus finanzas) y lograr un porcentaje de deuda sobre el PIB, 60 por ciento, para aspirar a obtener el *investment grade* (grado inversor)⁷.

Esto significa una severa restricción de recursos para aumentar los salarios de los funcionarios públicos, el monto de las pasivida-

⁷ El Uruguay obtuvo el grado inversor en la década de los noventa y lo perdió en 2002. En el período en cuestión las inversiones no llegaron.

des, las inversiones en infraestructura vial, edilicia y equipamiento para los servicios básicos que brinda el Estado: salud, educación, vivienda, justicia, seguridad, etcétera.

Hay, sin embargo, preguntas política y económicamente muy importantes: ¿qué hará el gobierno si no obtiene los niveles de recaudación esperados? ¿Cuáles serían las metas que se dejarían de cumplir, las asumidas con el FMI o las que se aprueben en este presupuesto quinquenal? Todo indica que, si se mantiene la lógica predominante, tendrán prioridad los acreedores externos postergando la satisfacción de las necesidades sociales para un incierto futuro. La creciente y apremiante deuda social continuará impaga

El fin que justifica los medios no es, como antaño, revolución o contrarrevolución social, es algo mucho más abstracto y, por supuesto, seguramente estéril⁸: lograr que la deuda sea igual o menor que el 60 por ciento del PIB (aunque se reconozca que aumentará en valor absoluto) para acceder al *investment grade*, lo que supuestamente permitiría obtener créditos y captar inversiones extranjeras en mejores condiciones.

Lo que está sucediendo con la política económica y el proceso

presupuestario obligan a recordar que “vivimos entre dos grandes confusiones que, aisladas son costosas y juntas son nefastas. La primera apunta a la crisis de las ideologías. La segunda a la pobreza de los métodos de gobierno.”⁹

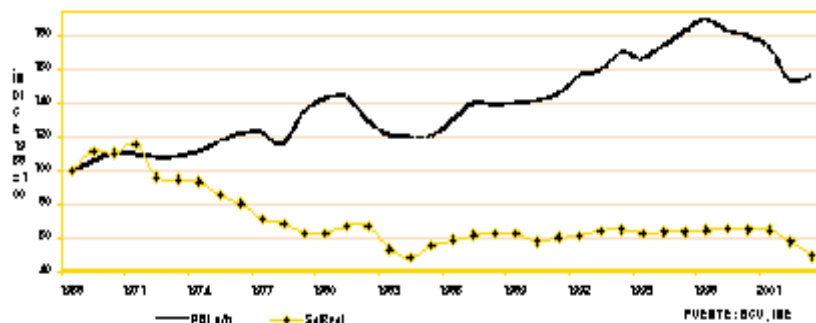
5. La subordinación del trabajo al capital explica la creciente desigualdad

La incapacidad del país para generar empleo adecuado a todos los que lo necesitan (la informalidad, el subempleo, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios) explica en gran medida el crecimiento del número de personas con necesidades básicas insatisfechas.

En el Uruguay, que se había destacado por tener índices de pobreza e indigencia menores a la mayoría de los países de la región, se ha producido en los últimos años un acelerado proceso de exclusión social. Viven en situación de pobreza más del 40% de la población, afectando fundamentalmente a los niños y adolescentes, 61% de los menores de dieciocho años, y como contrapartida solamente son pobres el 10% de las personas en la tercera edad y el 38% de los adultos⁹. La pobreza excede las carencias materia-

⁸ Matus, Carlos, “Adiós, Señor Presidente. Gobernantes gobernados.”, Fondo Editorial Altadir, Venezuela, 1987.

⁹ Amarante, Verónica; Arim, Rodrigo y Vigorito, Andrea; “Pobreza, red de protección social y situación de la infancia en Uruguay”, Doc. del BID, diciembre de 2004.

Gráfico N° 1. producto por habitante y salario real 1968-2003

Fuente: "Diagnóstico de la situación actual del país y lineamientos de salida a la crisis"; Comisión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2003.

les imponiendo restricciones a los derechos humanos y ciudadanos.

Estudios realizados demuestran que: "El aumento de la desigualdad obedece principalmente al mal desempeño del mercado de trabajo en los '90. Tanto el aumento del desempleo como el aumento de la desigualdad salarial se trasladó a los hogares (...) La situación del mercado de trabajo es un factor explicativo central de la evolución de la desigualdad de los hogares y por tanto, de la pobreza"¹⁰.

Hay indicadores rotundos: a) el salario real se redujo 23% de 1998 a 2004; b) el desempleo creció de 10,1% en 1998 a 16,9% en 2003, si bien descendió en 2004 a 12,1%, aunque vuelve a subir en setiembre de 2005 a 12,3%; c) los ocupados con problemas de em-

pleo pasaron de 20,3% a 44,6%; d) continuó aumentando la brecha entre el producto por habitante y el salario real, el crecimiento del PIB en 2003 y 2004 no se reflejó en el salario real que se redujo 12,4% y 0,4%, respectivamente; en 2005, el salario real se incrementó 4,5%, entre enero y agosto, nuevamente menos que el PIB que creció 6,9% en el primer semestre.

El aumento de la brecha entre el producto por habitante y el salario real es una tendencia negativa de larga data, como puede verse en el **gráfico N° 1**.

Durante la recesión 1999-2003 se deterioró la calidad del empleo por el aumento del subempleo y del empleo no registrado, que acompañan el incremento del desempleo, de la emigración, de la

¹⁰ Vigorito, Andrea, "Pobreza urbana en Uruguay. La medición de la pobreza", *Brecha*, 02/07/2004.

pobreza y de la exclusión¹¹, según demuestra un estudio del Instituto de Economía. Como consecuencia el 40% de la población económicamente activa no tiene cobertura de seguridad social, considerando los trabajadores que deberían ser cotizantes del BPS y no los son y los desempleados que no cobran la prestación del seguro de desempleo¹².

Como se ha señalado claramente “todo el andamiaje de servicios sociales que dispone el país está pensado para una sociedad cuyas formas de inclusión social se estructuraban en el pilar del empleo (...) las estructuras institucionales no estaban preparadas para absorber en la escala que hoy tiene, fenómenos que antes no eran relevantes tales como la desintegración familiar, el hambre concentrada sobre focos de población de la periferia, el desempleo persistente, la saturación de los servicios de salud pública, los niveles de pobreza e indigencia de los niños entre otros”¹³.

La situación descrita es resultado del fracaso de un modelo económico que dismanteló el sistema productivo, flexibilizó y precarizó el trabajo y ubicó en el centro del proceso el sistema financiero, atendiendo cuidadosamente el pago de la deuda externa acep-

tando los condicionamientos que acompañan cada nuevo préstamo o refinanciación, dejando de lado las funciones del Estado que atenderían los aspectos referidos a la justicia social y la equidad. Las políticas que pretendan seguir administrando la crisis sin enfrentar los intereses del capital financiero transnacional y sus aliados locales están destinadas a perpetuar, incluso profundizar, las relaciones de dependencia y la desigualdad social.

5. La cara positiva del gobierno: la reducción de las asimetrías entre el capital y el trabajo

El nuevo gobierno ha intentado detener y hacer retroceder el proceso de flexibilización y desregulación del mercado laboral impulsado por el neoliberalismo.

La nueva política de derechos laborales se expresa, entre otros aspectos, en las convocatorias a los Consejos de Salarios, con la ampliación del ámbito a los trabajadores del gobierno central y del sector rural; las señales emitidas respecto del cuestionamiento a los despidos injustificados; la derogación del decreto¹⁴ que permitía el desalojo de empresas ocupadas por la policía, sin interven-

¹¹ Notaro, Jorge, “La calidad del empleo en Uruguay 1984-2003”, Instituto de Economía, Versión preliminar, 2005.

¹² “Noticias buenas y de las otras”, N° 36, setiembre de 2004.

¹³ Leal, Gustavo, “El ocaso del país modelo y sus formas de integración social”, Semanario *Bitácora*, 18/2/04.

¹⁴ Decreto 145/005 del 2/05/05 derogatorio del 512/966 y el 286/000.

ción judicial; el proyecto de ley de Libertades Sindicales¹⁵, ya aprobado en diputados, el cual prevé la creación de un Registro de Infractores a la Libertad Sindical, y establece que las empresas que ingresen a él por violar la normativa no podrán mantener contratos ni participar en licitaciones convocadas por el Estado.

Lo anterior se reflejó positivamente, en un crecimiento muy importante del número de sindicatos y de trabajadores sindicalizados; negativamente, en el incremento de los despidos para debilitar a los sindicatos en los Consejos de Salarios y en las presiones de las Cámaras Empresariales sobre el gobierno para que no se aprobara la ley de derechos sindicales en el Senado. Lamentablemente el gobierno retrocedió en este último aspecto creando un ámbito cuatripartito (poder ejecutivo, poder legislativo, empresarios y trabajadores) para discutir el contenido de dicha ley.

El gobierno había comprometido, también, su vocación participativa abriendo espacios para la inclusión y la participación de las fuerzas representativas de la sociedad. No obstante y cuando ya han sido definidas las grandes líneas del programa a aplicar en los próximos cinco años, incluido el presupuesto nacional, han sido muy escasas, casi nulas, las posibilidades reales, concretas, de participar e influir.

La convocatoria al “Compromiso Nacional” -espacio privilegiado por el gobierno para llegar a su “soñado” pacto social donde todos ganan- ha mostrado los límites de un proceso de participación “restringido” a lo que ya se negoció y acordó con el FMI.

Quedaron fuera del “Compromiso Nacional” las pautas de la política fiscal, el elevado superávit primario y la agenda de cambios estructurales que abarcan, entre otros, a la Dirección General Impositiva, las cajas militar, policial y bancaria, la autonomía del Banco Central y la expansión de la presencia del sector privado en los servicios públicos. En setiembre, luego de la primera auditoria del FMI, se amplió el acuerdo para abrir el paso a la inversión privada en asociación con empresas públicas, las que pasarían a ser regidas por el derecho privado, con la consiguiente pérdida de derecho para los trabajadores.

El gobierno se enfrenta con una disyuntiva muy importante para el futuro del país: no es posible mantener simultáneamente un proceso de profundización del modelo neoliberal, amigable para la inversión del gran capital, y un distanciamiento de dicho modelo a través de cambios institucionales que fortalezcan a los trabajadores y al movimiento sindical, creando mejores condiciones para éstos en la disputa con el capital. Las características que adquiera la

¹⁵ Ver www.parlamento.gub.uy/repartidos/camara/d2005060282-00.htm

nueva ley de derechos sindicales marcará cuál ha sido la opción de este gobierno.

Los indiscutibles avances realizados, en los primeros meses del actual gobierno, en la protección de los derechos del trabajo en su relación con el capital implican, si se continúan y profundizan, el comienzo de un punto de inflexión y de ruptura con el modelo neoliberal.

De lo contrario no es aventurado suponer que se agudizarán las contradicciones entre los trabajadores organizados y el proyecto económico que se está implementando aceleradamente desde el ámbito de gobierno más eficaz y eficiente, en la búsqueda de sus objetivos: el Ministerio de Economía.

Este análisis no puede ignorar que existen profundas contradicciones dentro del gobierno y de las fuerzas políticas que lo integran respecto del acuerdo de protección de inversiones con los Estados Unidos. El significado de aprobar o no dicho acuerdo va más allá de su contenido: implicaría adoptar una postura sobre el modelo predominante en las últimas décadas. Al respecto debe destacarse, si bien no tiene implicancias económicas directas, que la izquierda en el gobierno rompió con su tradición histórica de rechazo a las operaciones navales conjuntas con los Estados Unidos al aprobar en el parlamento la participación de la armada nacional

en la operación "Unitas".

6. Tiempo de desafíos y definiciones

La posibilidad de resolver los graves problemas y el futuro económico del país en el marco de la globalización proteccionista es baja, pero si se continúan aceptando los lineamientos que imponen los acreedores externos es prácticamente nula. A su vez, el insuficiente desarrollo de los acuerdos en el Mercosur ha impedido generar condiciones para elaborar un proyecto nacional en el marco de uno regional, porque ni siquiera existen garantías de acceso a dichos mercados.

Para abordar la salida de la crisis y elaborar estrategias alternativas de desarrollo es necesario reconocer el fracaso de las políticas centradas sobre mejorar el sistema de incentivos mediante la apertura, la desregulación y la liberalización de mercados. Las instituciones creadas por el neoliberalismo no pueden ser adecuadas para un país productivo, con justicia social y profundización democrática.

Esto nos lleva a plantear cuestiones centrales que no han sido abordadas por el discurso oficial: ¿cuáles son los cambios institucionales necesarios para romper la actual trayectoria? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo del país? Para analizar estos temas se debe recurrir a dos hipótesis: a) las

reglas del sistema mundial capitalista se expresan en el marco institucional de nuestro país y son un freno al desarrollo de las fuerzas productivas; b) no existen actualmente condiciones para modificar en forma radical dicha situación de dominio.

Parecería que se repiten los errores cometidos por gobiernos de países cercanos que, al percibir los acotados márgenes de maniobra existentes para llevar adelante políticas consecuentes con sus objetivos históricos, renuncian a ellos o los postergan indefinidamente. Ni la improvisación efectista y las arengas vebementes, ni las metas de "hambre cero" y los discursos "desde el Sur" en los foros internacionales, ocultan la ausencia de cambios profundos en las estructuras económicas de nuestros países vecinos y la falta de respuestas efectivas para la pobreza y la indigencia.

El problema fundamental está, entonces, en la dirección de los cambios: o se trabaja para crear una nueva trayectoria o, en los hechos, se consolida el predominio del capital trasnacional y sus aliados locales. Para implantar un modelo de desarrollo incluyente es imprescindible diseñar cambios institucionales que modifiquen el actual orden social y una estrategia que les dé viabilidad.

El avance hacia una nueva sociedad exige, en primer término, definir aquellos cambios institucionales imprescindibles para romper la actual trayectoria capitalista que condena a la miseria a la mayoría de la población. En segundo lugar, la implementación de un nuevo conjunto de reglas sólo será viable si existen cambios culturales e ideológicos profundos, lo cual no puede quedarse en declaraciones. Es necesario crear un sistema de incentivos eficaz y eficiente que combine estímulos morales y materiales.

El problema, reiteramos, no es la mayor o menor velocidad de los cambios sino esencialmente su dirección. Las fuerzas políticas progresistas han sido prolíferas al definir los objetivos de sus programas de gobierno, pero han sido bastante menos precisas a la hora de definir los instrumentos para lograrlos. En particular han subestimado la importancia fundamental de los cambios ideológicos e institucionales como mecanismo para modificar un orden social y encontrar nuevas vías para el desarrollo.

Parecería que se repiten los errores cometidos por gobiernos de países cercanos que, al percibir los acotados márgenes de maniobra existentes para llevar adelante políticas consecuentes con sus objetivos históricos, renuncian a ellos o los postergan indefinidamente. Ni la improvisación efectista y las arengas vehemen-

tes, ni las metas de “hambre cero” y los discursos “desde el Sur” en los foros internacionales, ocultan la ausencia de cambios profundos en las estructuras económicas de nuestros países vecinos y la falta de respuestas efectivas para la pobreza y la indigencia.

Se trata, por lo contrario, de llevar adelante un proyecto alternativo de desarrollo, entendido como un conjunto organizado de cambios institucionales y de políticas socioeconómicas orientadas por un horizonte cultural y de valores que se plantee superar las graves carencias de las políticas mercadocéntricas y extrovertidas aún predominantes.

Si el actual gobierno “progresista” continúa aplicando y profundizando una política económica ortodoxa se verá obligado a detener y modificar la línea de cambios institucionales que se están realizando en el ámbito de las relaciones laborales lo cual pondrá en riesgo la reproducción de su propia legitimidad. En caso contrario deberá modificar su política económica y su agenda de cambios institucionales a favor del capital transnacional, apostando a la participación social, particularmente de los trabajadores.

Son múltiples los desafíos de un gobierno que pretenda avanzar hacia el desarrollo productivo, la inclusión social y la democratización de las decisiones. En particular debería:

a. Modificar la institucionalidad económica -creada en treinta años de neoliberalismo-, para lograr una desconexión relativa del mercado globalizado y redefinir el papel del Estado como actor fundamental del proceso económico, lo que permitiría favorecer el desarrollo del mercado interno y de actores sociales fundamentales como los trabajadores, en el marco de una estrategia de desarrollo superadora de la causa principal de la deuda social: la baja calidad de las condiciones de trabajo. Para esto debería mejorarse sustancialmente la capacidad del Estado, el cual con transparencia absoluta debería impulsar procesos de democratización efectiva de las decisiones económicas.

b. Obtener recursos para comenzar a pagar una enorme deuda social (que no se agota con el plan de emergencia cuestionable en tanto trata un problema estructural como si fuera un problema coyuntural), lo que implicará, necesariamente, rever su posición respecto de los acreedores de la deuda pública, en particular el FMI. De lo contrario, no podrá disponer de recursos para atender, a través del presupuesto público, las demandas sociales e impulsar el desarrollo productivo.

c. Mantener un adecuado equilibrio entre inflación y tipo de cambio, con el objetivo de lograr

un tipo de cambio competitivo que sostenga el crecimiento exportador y proteja al mercado interno.

Si, por lo contrario, las políticas económicas ortodoxas continúan predominando, esto significará la frustración de una gran parte de la población que votó por el cambio, la cual, seguramente, no podrá identificarse con la siguiente definición del Ministro de Economía: "Para hacer algo en serio por los uruguayos que viven en la indigencia es que necesitamos hacer los acuerdos con el FMI, alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es ser de izquierda"¹⁶.

Las dos tendencias, el camino del cambio o la continuidad de la ortodoxia, pueden coexistir durante un tiempo, pero el estrecho margen de maniobra económico financiero provocará la agudización de la contradicción que significaría mejorar sustancialmente la capacidad de los trabajadores

-defensa de los fueros sindicales, aplicación de los consejos de salarios, ley de negociación colectiva- y tratar de aplicar, a la vez, políticas que no difieren significativamente de las que han predominado en los últimos años.

La disyuntiva del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez es continuar aceptando las premisas del modelo dominante o hacer un viraje eligiendo un camino independiente, lo cual implicará necesariamente desarrollar un paradigma institucional alternativo cuya piedra angular es el fortalecimiento del trabajo frente al capital. Para que haya un Uruguay productivo hay que cambiar el modelo -las reglas de juego y la estrategia de desarrollo- y para ello es necesario crear un punto de inflexión, para lo cual se requiere de una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria. Esa es la tarea de las fuerzas políticas y sociales del cambio, de lo contrario se estarían creando las condiciones para la continuidad del modelo neoliberal. Ese es el peligro... y

¹⁶ Semanario *Búsqueda*, Declaraciones de Danilo Astori, 18 de agosto de 2005.

De la resistencia al poder constituyente: la reforma del agua*

*Luis Ibarra***

Diversas formas de resistencia a las privatizaciones convergieron en un plebiscito que modificó la Constitución del Uruguay para introducir disposiciones relativas al agua. La enmienda estableció el acceso a los servicios como un derecho humano, la administración exclusiva del Estado y la participación de las organizaciones sociales en la gestión. Este artículo analiza la producción de las nuevas instituciones públicas como un resultado de los conflictos y combinaciones entre distintas estrategias políticas de reforma, y considera las perspectivas que abre su implementación.

* Una versión preliminar de este trabajo aparece con el título “El plebiscito del agua” en D. Buquet (coord.), Elecciones 2004-2005, Montevideo, Instituto de Ciencia Política - Ediciones de la Banda Oriental.

** Magíster en Ciencia Política, especialista en Gobierno y Políticas Públicas, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay); ha publicado investigaciones sobre procesos electorales, reformas del estado y ciudadanía. libarra@fcs1.fcs.edu.uy

Introducción

Un plebiscito efectuado simultáneamente con las elecciones modificó la Constitución del Uruguay agregando un conjunto de disposiciones relativas a la administración del agua. La enmienda constitucional quedó en segundo plano detrás del acceso de la izquierda al gobierno y, sin embargo, tanto desde el punto de vista de los sujetos políticos como del contenido de los cambios, es un vuelco copernicano en la trayectoria de las últimas décadas. De ejemplo de lentitud y atraso en las reformas estructurales, a ojos de los organismos financieros internacionales, el Uruguay se convirtió en una referencia para los movimientos globales con la reforma del agua.

Este artículo analiza la reforma del agua en el Uruguay como producto de estrategias y luchas políticas que condujeron a la producción de nuevas instituciones públicas y plantean, a su vez, nuevos interrogantes y desafíos. Para evaluarla cabalmente es necesario partir de una consideración de las estrategias políticas y la situación previa de los servicios en el Uruguay. Cumplidos estos pasos, el artículo se concentra en el proceso político de la reforma y examina, por último, las perspectivas de su implementación.

1. Las estrategias políticas en los servicios públicos

Los servicios públicos están en el centro de las luchas políticas contemporáneas. No se trata simplemente de una discusión acerca de las técnicas más adecuadas para producir y distribuir ciertos bienes. El agua, la energía, las comunicaciones, atienden necesidades esenciales de la vida y sus formas de administración son un aspecto clave en el gobierno de las poblaciones y la producción de subjetividades.

Los servicios del estado organizaron la reproducción social dentro de formas centralizadas y jerárquicas, pero fueron desbordados por exigencias que pusieron en crisis sus funciones disciplinarias. La reacción fue una reestructura que asume, diluye y reintegra los elementos antagónicos dentro de nuevos proyectos de estabilización política, que recuperan la funcionalidad de los servicios.

Nuevos conceptos organizan la práctica y la reflexión política. La idea de gobernabilidad entró en circulación para designar los límites de la capacidad del estado para responder a las demandas y efectuar políticas públicas. Los diagnósticos atribuyen la crisis a una sobrecarga de demandas, que hace imposible la gobernabilidad del sistema y recomendaron conducir los servicios a opciones de mercado y aislar el sistema político de las presiones sociales.

El concepto de gobernanza recubre el tránsito desde la actividad exclusiva del estado hacia modos de gobierno donde también intervienen otras formas de conducción y plantea, de manera particular, la cuestión de la capacidad del estado para articular los distintos tipos de conducción (Pierre, 2000). Dos versiones tienen un lugar preeminente en los debates internacionales: los partidos de derecha se asociaron a la introducción de mecanismos de mercado en el sector público, mientras que la socialdemocracia favorece la articulación de redes entre organizaciones públicas y privadas como una tercera vía entre estado y mercado.

Finalmente, la idea de gubernamentalidad (Foucault, 1978) refiere a la articulación recíproca de las técnicas de gobierno y las formas de racionalidad que las sostienen. El estado aparece aquí como un resultado; es el efecto variable de relaciones de fuerza, que conducen a la gubernamentalización de ciertas prácticas sociales y delimitan lo público y lo privado. Las reformas se comprenden a partir de los conflictos y compromisos entre estrategias que se distinguen por sus propias lógicas y técnicas particulares. Las racionalidades políticas incluyen prescripciones normativas, elementos teóricos y referencias empíricas que sustentan y justifican las técnicas, en tanto que las técnicas de gobierno, hacen operativas esas

racionalidades por medio de instrumentos y procedimientos característicos (Rose y Miller 1992).

El Banco Mundial usa el término “buena gobernanza” para referirse a las estrategias que introducen mecanismos de mercado en el sector público. Su racionalidad política tiene como referencia los cambios en el mundo y toma sus fundamentos teóricos y normativos del neoliberalismo (Bevir y Rhodes, 2001). Considera que la globalización trajo una movilidad del capital, que sale de los países con grandes burocracias y pesadas regulaciones, y una competencia internacional que presiona para la convergencia de todos hacia un modelo similar de gobernanza. El neoliberalismo afirma la superioridad del mercado respecto del estado pero, a diferencia del liberalismo clásico, no concibe los mercados como una esfera particular de la sociedad, sino como una técnica de gobierno (Lemke, 2001). Los mercados son dispositivos que guían la asignación de recursos escasos entre usos alternativos de manera de maximizar la eficiencia; sus criterios de elección racional pueden aplicarse en cualquier ámbito y, en particular, sirven para una reestructura del estado. La competencia, sin embargo, no existe espontáneamente ni nunca se logra por completo; es una construcción institucional creada y mantenida por una actividad incesante del Estado. Concluye que el Estado debe dejar de

producir servicios directamente y pasar a regular su prestación adecuada por medio del mercado.

Una segunda estrategia, parcialmente superpuesta con la primera, fue desarrollada en la Unión Europea y apela, en cambio, a las redes como un sistema de gobernanza con mayor eficiencia y legitimidad que jerarquías y mercados. Su racionalidad política se basa sobre el neoinstitucionalismo (Bevir y Rhodes, 2001). Admite las presiones de la globalización, pero desplaza la atención hacia los diversos contextos nacionales, institucionales y culturales que generan respuestas distintas a esas presiones. Entiende que las reformas debilitaron los estados y fragmentaron la provisión de servicios sin crear propiamente mercados sino redes de organizaciones públicas y privadas, que dependen entre sí. El Estado es una organización más; no puede comandar, sino tratar de conducir el conjunto por medio de la negociación y el diálogo. Sus técnicas de gobierno incluyen una mayor interpenetración entre el Estado y la sociedad civil; el cambio en el papel del Estado desde la intervención hacia la conducción y coordinación; y un cambio correlativo en la actividad estatal hacia la negociación, la incorporación de actores no estatales en el proceso político y la confianza en modos más reflexivos de actividad política.

Las estrategias de reforma asumen la atención de las necesida-

des como un impulso dinamizador de la acumulación de capital. Disuelven las presiones políticas sobre los servicios públicos en una variedad de demandas particulares, que acceden a servicios diferenciados en precio y calidad según su poder de compra. Reintegran los antagonismos sociales en una producción de nuevas subjetividades en las que la figura del ciudadano, dotado de derechos y obligaciones, es reemplazada por la del consumidor, con libertad y responsabilidad por su propia reproducción. La intervención directa queda reservada para los pobres, vistos como objeto de una atención focalizada y control especial.

Estas reformas encontraron resistencias que, por un lado, afirman los derechos sociales y, por otro, desarrollan organizaciones que cubren los vacíos dejados por el Estado y el mercado en la reproducción social (De Angelis, 2003). El levantamiento zapatista formuló un desafío político novedoso y las protestas de Seattle señalaron el comienzo de una convergencia de movimientos sociales, que adquirió una expresión positiva con el Foro Social Mundial. Este ciclo de luchas fue acompañado por una elaboración de nociones comunes que contienen una nueva estrategia para los servicios públicos. Su racionalidad política tiene una referencia global en favor de una mundialización distinta, poblada por una multiplicidad de alternativas (*Otro mundo es posible*). Opone a la pri-

vativación de todos los aspectos de la vida y a la transformación de toda actividad y valor en mercancía, el reclamo de espacios públicos y bienes comunes (Klein, 2001). Sus técnicas de gobierno apelan a un nuevo concepto de lo público, que deja de identificarse con el Estado, pasa a designar lo que es producido y utilizado en común, y que exige una reapropiación de la administración por la comunidad mediante formas participativas. (Negri, 1996).

Las diversas estrategias políticas para los servicios públicos se anudan en la cuestión del agua. El Banco Mundial destaca las limitaciones de los recursos públicos y concluye en la necesidad de recurrir al capital privado para atender las necesidades de la población (2004). Los mecanismos de crédito contribuyen a articular los estados con grupos transnacionales que adquieren la explotación de los servicios como concesionarios. Una serie de movimientos sociales y campañas políticas resisten la transformación del agua en mercancía y la subordinación de los servicios a la ganancia. Señalan sus efectos negativos para el acceso de las poblaciones pobres y una gestión sustentable. Despliegan una estrategia diferente que incluye entre sus principios la definición del agua como un bien común, el acceso a los servicios como derecho humano, financiado colectivamente, y una democratización de la gestión (FAME, 2005).

Las estrategias políticas para el agua recorrieron su propio curso en el Uruguay durante los últimos años.

2. El agua en el Uruguay: servicios públicos y concesiones privadas

El suministro de agua potable y el saneamiento están organizados en el Uruguay como un servicio público, administrado directa y exclusivamente por el Estado. La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, fue creada en el año 1952 y se encuentra entre las principales empresas del país, con ventas anuales por 203 millones de dólares (*Búsqueda*, Montevideo, 10 de octubre de 2002).

Los servicios de agua potable cubren la casi totalidad de la población urbana, mientras que existen carencias significativas en la extensión y la calidad del saneamiento. Para el año 2004, los servicios de agua cubrían 2.996.750 habitantes, a través de 756.282 conexiones, con una cobertura de la población nucleada del 98 por ciento. En cuanto al saneamiento (exceptuando Montevideo de competencia municipal y Maldonado entregado en concesión), el país tiene más de 1.440.000 habitantes nucleados en localidades mayores de mil habitantes, de los cuales un 35 por ciento cuenta con servicio de alcantarillado a través de 150.000 conexiones (OSE, 2004).

En la década de los noventa, esta organización de los servicios experimentó cambios con las concesiones de servicios públicos a capitales privados.

La primera se efectuó en el año 1992 y recayó sobre una zona turística de alto poder adquisitivo: las localidades de La Barra, Manantiales y José Ignacio en el departamento de Maldonado. El concesionario instaló los servicios y recibió su explotación por un plazo de 25 años con tarifas que, según el contrato, deben cubrir las inversiones efectuadas y los costos operativos más un beneficio razonable (URSEA, 2004). La concesión fue adjudicada a la firma Aguas de la Costa, propiedad de Aguas de Barcelona de España. Las obras significaron una inversión de doce millones de dólares y los servicios atienden alrededor de tres mil usuarios. Su gestión ha sido criticada en razón de impactos ambientales negativos y, sobre todo, por las elevadas tarifas, que multiplican varias veces las cobradas por los servicios públicos en el resto del país (FFOSE, 2004). La concesión se justificó por una insuficiencia de los recursos públicos, que llevó a recurrir al capital privado para “acortar los plazos de satisfacción de las necesidades”, según dijo Alberto Bianchi, presidente del directorio de OSE en el período, mientras que para Adriana Marquisio, del sindicato de los trabajadores del sector, “el agua se privatiza con el pretexto de extender

el saneamiento, pero si OSE cobrara las tarifas de Aguas de la Costa podría hacer todo lo que se propusiera” (*El Espectador*, Montevideo, 20 de setiembre de 2004).

Una segunda concesión en 1998 abarcó las principales ciudades del departamento de Maldonado. El concesionario recibió la explotación de la red de agua potable existente por un plazo de 30 años a cambio de una ampliación del saneamiento; en este caso, está obligado a pagar un canon al Estado y mantener tarifas similares a las cobradas por los servicios públicos (URSEA 2004). La concesión fue adjudicada a la firma Uragua, propiedad de Aguas de Bilbao del País Vasco, en un proceso lleno de irregularidades (Cf. *El Observador*, Montevideo, 30 de julio de 2003). Su gestión ha sido igualmente polémica con deficiencias en la continuidad y la calidad de los servicios, sobrefacturación, incumplimiento de las obras comprometidas y atrasos reiterados en el pago de sus obligaciones con el Estado. El nuevo presidente del directorio de OSE, Juan Justo Amaro, sostuvo que “el país no estaba en condiciones de realizar el saneamiento en el departamento de Maldonado y Uragua se hizo cargo de la distribución del agua a cambio de encarar el saneamiento”; en cambio, para el diputado de Maldonado por el Frente Amplio, Darío Pérez, “no vinieron a invertir sino a administrar el dinero que se pudiera recaudar”

(Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, 30 de diciembre de 2002).

Esta concesión creó un mecanismo por el cual la recaudación de los servicios de agua potable no sólo cubre los costos operativos y ganancias de la empresa, sino que garantiza y financia también las eventuales obras de saneamiento. En este negocio, la empresa pública perdió una recaudación anual de 18 millones de dólares a cambio del pago de un canon de un millón y medio, pero recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares para acondicionar la red de agua potable de Maldonado antes de entregarla al concesionario.

Este dispositivo quebró con la crisis financiera de 2002. La devaluación del peso redujo a la mitad la recaudación medida en dólares, haciendo literalmente agua el negocio, y la empresa exigió una renegociación del contrato que restableciera la rentabilidad bajo la amenaza de abandonar los servicios.

La renegociación del contrato generó una diferenciación política entre los partidos. El gobierno y el Partido Colorado sostuvieron, por medio de Amaro, que “en el marco regional y del país constituiría una señal negativa el alejamiento de una inversión extranjera, no sólo por lo que significa en sí misma, sino por la imagen externa

que proyectaría del país y las consecuencias que tendría en los actuales capitales externos que pretenden afincarse en el Uruguay”. El Partido Nacional cuestionó la renegociación porque no incluye el cumplimiento de las obras comprometidas y “no genera beneficios directos a los usuarios y al organismo y sí sólo al concesionario”, según Alberto Casas, director nacionalista de OSE. El Frente Amplio añadió la necesidad de examinar si la empresa está en condiciones de cumplir los compromisos y, “en cuanto al argumento de la necesidad de mantener la imagen del país para las inversiones extranjeras, si las que van a venir al Uruguay lo hacen de la forma en que se desarrolló la inversión de Uruguay, sería preferible que no vinieran”, dijo el diputado Riverós (Comisión de Vivienda..., cit.).

Las concesiones en el departamento de Maldonado enfrentaron dos estrategias políticas para los servicios públicos.

Por un lado, los sucesivos gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado siguieron una misma lógica política, que parte de una insuficiencia de los recursos públicos para concluir en que el Estado debe dejar las áreas rentables a los agentes privados y concentrarse en los sectores de interés “social”. Los servicios de agua y saneamiento se abren a la acumulación de capital y el Estado se convierte en un regulador

que garantiza la inversión y asegura la rentabilidad privada. Los servicios públicos se reservan exclusivamente para los pobres, vistos como objeto de una atención focalizada. La primera concesión, operada por Aguas de Barcelona, corresponde estrictamente a esa estrategia, mientras que la segunda, en manos de Aguas de Bilbao, superpuso elementos adicionales de especulación financiera y acceso al crédito, que la pusieron en crisis y obraron como factor de distanciamiento entre los partidos.

Por otro lado el sindicato del sector, la Federación de Funcionarios de OSE se opuso a la transformación de los servicios en mercancías. Según el sindicato, las obras siempre son pagadas por los usuarios a través de las tarifas, sea recaudando primero para luego invertir o bien contratando créditos que después son pagados con la recaudación. En esto no existe diferencia entre los servicios públicos o privados. La diferencia es que el servicio público distribuye los costos entre el conjunto de la población usuaria, mientras que los privados los hacen recaer exclusivamente sobre los beneficiarios directos y sólo son factibles, por lo tanto, en zonas de gran concentración urbana o alto poder adquisitivo. La entrega de las áreas rentables al capital privado es un mecanismo que deja los servicios públicos exclusivamente con las áreas deficitarias y los priva al mismo tiempo de los

recursos necesarios para atenderlos.

La gestión de los concesionarios privados añadió nuevos elementos de crítica y oposición relativos a los impactos ambientales, las tarifas y la calidad de los servicios de parte de organizaciones ambientalistas y comisiones vecinales. Los diversos cuestionamientos encontraron un punto de convergencia cuando el gobierno de Jorge Batlle anunció al Fondo Monetario Internacional el propósito de generalizar el sistema de las concesiones en todo el país (Uruguay 2002). Este fue el punto de partida de la reforma del agua.

3. La producción política de la reforma

La reforma del agua tiene como antecedente las resistencias a las concesiones privadas en el departamento de Maldonado y surge en oposición directa al propósito del gobierno de generalizar este mecanismo en todo el país. Consiste en una enmienda constitucional, promovida por la vía de iniciativa popular, con el objetivo de establecer normas que impidan la privatización del agua, recuperen los servicios operados por agentes privados y pongan los fundamentos de una política diferente.

La reforma “nace a partir de la defensa de un recurso vital y esencial en el mundo”, dijo Adriana Marquisio, de la Federación de Funcionarios de OSE (*El Especta-*

dor, Montevideo, 8 de julio de 2004). Sigue una racionalidad política que comprende las experiencias locales a partir de un marco de referencia global y expresa un conjunto de preocupaciones relativas a los derechos humanos, la protección del ambiente, pobreza, exclusión social y democratización política.

El discurso de la reforma, en primer lugar, problematiza la situación del agua como un recurso esencial, pero limitado y amenazado por procesos de contaminación. Esto lo hace susceptible de proporcionar altas ganancias y ser codiciado por las empresas transnacionales, que procuran apoderarse de su explotación. Son apoyadas en sus pretensiones por los organismos financieros internacionales, que ofrecen créditos a los países periféricos condicionados a la privatización de los recursos. La transformación del agua en una mercancía, integrada al ciclo del capital y distribuida en función de la ganancia, acentúa la diferenciación social, amenaza la existencia de las poblaciones pobres y se despreocupa de una gestión sustentable.

La reforma considera el agua como un recurso esencial para la vida y un patrimonio común; define el acceso a los servicios como un derecho humano, que debe asegurarse a todos bajo la responsabilidad colectiva y administrarse de manera sustentable. Sus técni-

cas de gobierno recurren a la propiedad pública y los servicios del estado, pero no se identificaron con una gestión centralizada y jerárquica, sino que expresan también exigencias de democratización y reapropiación de la administración, mediante formas descentralizadas y la participación de las organizaciones sociales en la formulación de las políticas y la gestión y el control de los servicios.

La iniciativa popular

El procedimiento de iniciativa popular supone, en una primera instancia, reunir las firmas de un diez por ciento del registro electoral para que la enmienda constitucional sea plebiscitada junto con la elección nacional. Para ser aprobada, la reforma debe alcanzar, en esa oportunidad, la mayoría absoluta de los sufragios.

Los procedimientos de iniciativa popular tuvieron un uso intenso en el Uruguay durante las últimas décadas, tanto en forma de enmiendas constitucionales como de la impugnación de leyes ordinarias, aunque con resultados diversos. Las asociaciones de jubilados y pensionistas se valieron de este mecanismo para aprobar normas de ajuste de las pasividades; en cambio, no tuvieron éxito tentativas similares de establecer normas presupuestales para la enseñanza y la justicia. La izquierda y los movimientos sociales llevaron

a referéndum la ley de impunidad para las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, pero la votación les fue adversa. Sin embargo, en dos oportunidades lograron anular por esta vía leyes relativas a la privatización de las empresas públicas.

Oscar Bottinelli (2001) señala que los recursos de iniciativa popular operan en dos casos. Uno es cuando actores menores del sistema político creen que ciertos temas pueden sensibilizar al electorado y encontrar apoyos transversales en todos los partidos. El otro corresponde a sistemas políticos divididos de manera relativamente pareja, en los que una de las partes busca dirimir el conflicto en un terreno que supone más favorable.

La reforma del agua aparece como una continuación y una combinación de esos rasgos característicos: partió de actores menores del sistema político y se inscribe en una situación de equilibrio de fuerzas entre los bloques partidarios. Reviste también características novedosas, que evidencian una singular evolución política.

En primer lugar, apeló a la iniciativa popular para bloquear una privatización promovida desde el gobierno, pero no convoca a la ciudadanía como último recurso para derogar la legislación, luego de agotada la negociación política y el trámite parlamentario, como fue el caso de los referéndums. La reforma del agua se anticipó a la decisión gubernamental, tomó la ini-

ciativa y colocó al Poder Ejecutivo a la defensiva; adopta desde el comienzo la vía plebiscitaria, que salta las instancias legislativas y vuelve inoperantes las mayorías parlamentarias adversas.

En segundo lugar, la reforma del agua no tiene un carácter exclusivamente reactivo y defensivo, sino constructivo. No se agota en una coalición negativa, reunida en torno del veto de la legislación, sino que hizo de la resistencia a las privatizaciones el punto de partida de un poder constituyente que elabora nuevas instituciones y principios políticos.

Las multitudes del agua

La reforma constitucional fue el punto de convergencia de una variedad de entidades sociales y se apoyó sobre un arco amplio de alianzas políticas.

Tuvo un papel destacado el sindicato de los trabajadores del sector, la Federación de Funcionarios de OSE y un conjunto de organizaciones sociales que combatieron las privatizaciones: el movimiento sindical, la federación de estudiantes y las cooperativas de vivienda. El sindicato, en particular, no quedó encerrado en una perspectiva corporativa, de defensa de sus intereses particulares como grupo y mecanismos de presión sobre el sistema político. Por lo contrario, se articuló con otras organizaciones sociales y políticas, inscribiendo sus intereses dentro de proyectos de di-

mención nacional y construcción de instituciones. No apeló a las formas de lucha típicas del sindicalismo y la acción de clase, sino a mecanismos de expresión ciudadana en una convocatoria de tipo electoral.

También adquirieron protagonismo organizaciones ambientalistas, comisiones vecinales, gremiales de productores rurales y docentes universitarios. Las diversas formas de resistencia a la privatización del agua concurren a la elaboración de instituciones públicas a partir de sus formas de uso, manejo y conocimientos en común. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, creada para coordinar su acción, configuró un sujeto político amplio y plural, reuniendo entidades que no se confunden en una identidad única ni se diluyen en un grupo indiferenciado, sino que mantienen su propia singularidad y actúan en conjunto a partir de sus vínculos comunes con las características de la multitud (Hardt y Negri, 2004).

La reforma del agua encontró una opinión inicial fuertemente favorable entre la ciudadanía. Antes de comenzar la campaña electoral, una encuesta preguntó a los entrevistados acerca de sus preferencias por los servicios públicos de agua o un concesionario privado (Cifra, *Telemundo*, 5 de julio del 2004). Encontró que un ochenta por ciento se inclinaba por la empresa pública y sólo un nueve por ciento era favorable a la

privatización. Si bien la encuesta no refleja estrictamente los términos de la reforma, concluye que el 89 por ciento del electorado tiene opinión sobre el asunto con un punto de partida muy favorable para la aprobación de la reforma. El estudio de opinión muestra sólo matices entre los simpatizantes de los distintos partidos, ya que en todos los grupos políticos la mayoría absoluta está, en principio, a favor del servicio público.

Esta inclinación inicial sufrirá variantes a medida que se expongan los argumentos y se conozcan las posiciones de los partidos, pero no es un fenómeno circunstancial. Refleja, por lo contrario, una actitud prolongada y consistente de la ciudadanía. Según el analista de opinión pública, Oscar Bottinelli, las empresas públicas "tienen una imagen de muy buena a excelente. En la comparación entre empresas públicas y privadas más o menos del mismo ramo, los uruguayos valoran muy positivamente, mucho mejor a las empresas públicas, a las estatales que a las privadas. En los temas de privatizaciones o desmonopolizaciones los uruguayos en general, mayoritariamente, son contrarios a la privatización o a la venta de los bienes del Estado." (*El Espectador*, Montevideo, 22 de julio de 2002).

La reforma en las estrategias de los partidos

Un aspecto característico de la reforma del agua es que no se planteó como una oposición entre

las organizaciones sociales y el sistema político, sino que integró de manera decisiva a los partidos. La ausencia de vínculos de este tipo llevó a menudo a la ineficacia de experiencias con elevada capacidad de movilización social pero que no encontraron reflejos adecuados en las instituciones públicas, así como también condujo al fracaso de iniciativas que cifraron sus posibilidades de éxito exclusivamente en la concertación partidaria.

La adhesión del Frente Amplio y sectores del Partido Nacional tuvo como primer resultado aislar al gobierno y bloquear la tentativa de extender las concesiones de servicios a todo el país. Un detallado y elaborado proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para promover la inversión privada en los servicios de agua potable, no fue tratado por el Legislativo. La imposibilidad de reunir en esta oportunidad las mayorías parlamentarias que habían acompañado todas las privatizaciones del período era reveladora de los cambios ocurridos en los partidos con vistas a la campaña electoral.

La izquierda tuvo un papel principal en la recolección de las firmas necesarias para hacer posible el plebiscito y todos sus sectores políticos acompañaron la reforma. Este apoyo aportaba un caudal electoral que se situaba por sí solo en el umbral del cincuenta por ciento de los votantes requerido para su aprobación. No obstante,

la reforma del agua no fue un tema destacado de su propuesta política ni ocupó un lugar de importancia en la propaganda. La estrategia electoral del Frente Amplio optó por evitar la polarización y multiplicó las señales de moderación, incluyendo también una actitud ambigua sobre la eficacia de la reforma para recuperar las concesiones privadas.

La reforma fue apoyada también por la mayoría del Partido Nacional con un cambio en el peso de los sectores internos y una reubicación en el espectro político. Los nacionalistas procuraron distanciarse del gobierno y ubicarse en la campaña electoral como la fuerza pública capaz de encabezar un bloque de centro y derecha que disputara la presidencia a la izquierda. La reforma del agua contó con la adhesión de su candidato presidencial, pero era un tema sobre el cual los distintos sectores políticos mantenían posiciones encontradas y fue excluido de la campaña en beneficio de los aspectos que destacaban la unidad partidaria.

Sólo el tercero en disputa, el Partido Colorado, procuró ingresar en la competencia electoral cuestionando la reforma del agua como una expropiación que perjudicaba la imagen del país en el cumplimiento de sus compromisos y amenazaba la recepción de inversiones externas, pero chocó con una armonía de silencio.

El plebiscito del agua

El apoyo de los dos principales candidatos que se disputaban la presidencia contribuía a dejar la reforma fuera del debate político y, al mismo tiempo, a reunir los votos necesarios para su aprobación.

La campaña de la reforma corrió por cuenta de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, que desplegó una propaganda electoral de características desusadas, con fuertes referencias globales y una vocación expresa por generar conciencia sobre la problemática del agua. Bajo la consigna *el agua es de todos*, convocó a reformar la Constitución para evitar la privatización, garantizar el acceso a toda la población y establecer una administración pública participativa, guiada por criterios sociales y ambientales (CNDAV 2004).

La oposición principal a la reforma del agua corrió por cuenta de las organizaciones empresariales. Las cámaras patronales intervinieron en la campaña, difundiendo afirmaciones temerarias respecto de las consecuencias de la reforma. Para la Cámara de Industrias, es un exceso impedir la acción de privados cuando el Estado no tiene los recursos para prestar los servicios. La Cámara Mercantil de Productos del País (2004) caracteriza la reforma como una iniciativa tendiente a estatizar el agua; critica que “ahuyentará las inversiones” y habilita una

“expropiación, al mejor estilo de otros regímenes estatales totalitarios y cada vez más aislados en el mundo”. Con mayor sobriedad, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (2004) “entiende que la forma de lograr una gestión pública exitosa y eficiente en estos servicios, es dando adecuada participación al sector privado”. Añade que “no comparte que actividades que hasta ahora se habían desarrollado con una importante participación del sector privado y una significativa inversión y generación de puestos de trabajo pasen a ser de exclusivo dominio del Estado”.

En uno de los pocos debates realizados en la campaña, los opositores a la reforma acordaron rápidamente con los aspectos declarativos para concentrarse exclusivamente sobre la defensa del capital privado. Repitieron los argumentos acerca de la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la población, las dimensiones de la inversión requerida para el saneamiento y la limitación de los recursos públicos: “lo que importa es que la gente tenga agua potable, que tenga saneamiento, que mejore sus condiciones de vida, independientemente de si el Estado puede hacerlo o no”. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida destacó, por lo contrario, la correspondencia entre la parte declarativa y los aspectos instrumentales de la reforma en el sentido de que sólo una administra-

ción pública es capaz de realizar una prestación de los servicios concebidos como derechos humanos y una gestión sustentable de los recursos (*El Espectador*, Montevideo 20 de setiembre de 2004).

El 31 de octubre de 2004, la reforma plebiscitada superó holgadamente la mayoría absoluta requerida para su aprobación con una votación cercana a los dos tercios del electorado. Acompañaron la enmienda 1.440.006 ciudadanos, que representaron un 65 por ciento de los votantes.

4. Del poder constituyente al poder constituido

La enmienda introdujo en la Constitución del Uruguay cuatro aspectos relativos a la definición, las políticas de aprovechamiento, la propiedad de los recursos hídricos y los servicios de agua y saneamiento.

En primer lugar, declara el agua como un recurso esencial para la vida y a los servicios de agua potable y saneamiento como derechos humanos fundamentales.

En segundo lugar, establece los principios de las políticas de aprovechamiento de los recursos hídricos. Estos comprenden: 1) el ordenamiento del territorio con objetivos de protección del ambiente; 2) la gestión sustentable de los recursos como un asunto de interés general; 3) la participación de los usuarios y la sociedad civil en to-

das las instancias de planificación, gestión y control; 4) una administración descentralizada tomando como base las cuencas hidrográficas; y, por último, 5) que la prestación de los servicios debe anteponer las razones de orden social a las económicas. El texto aprobado prescribe que toda autorización, concesión o permiso de explotación que vulnere estos principios será dejado sin efecto.

Tercero, la reforma da rango constitucional al dominio público sobre las aguas superficiales y subterráneas.

En cuarto lugar y en relación con los servicios, dispone que el abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento serán prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. La norma no adjudica un monopolio a OSE, sino que opta por una fórmula que incluye también, además de la empresa pública, a los municipios y otras entidades públicas. En cambio, excluye la posibilidad de sociedades de economía mixta entre el Estado y capitales privados.

Finalmente, una disposición transitoria regula el paso de un régimen a otro, limitando las reparaciones que pudieran corresponder a las inversiones no amortizadas y excluyendo las indemnizaciones por lucro cesante.

La aprobación de la reforma cerró un capítulo y abrió otro nuevo en el cual los actores políticos se reubican para actuar en el nuevo

escenario institucional. Su implementación plantea dos tipos de problemas de distinta naturaleza: uno, inmediato, refiere al tránsito de un régimen a otro y se relaciona con la recuperación de las concesiones privadas, y el otro, más general, tiene que ver con las cuestiones pendientes de los sistemas anteriores.

El destino de las concesiones privadas fue un primer elemento de reordenamiento entre los actores políticos que no careció de rasgos paradójicos. La articulación entre movimientos sociales y partidos políticos, que fue decisiva para hacer posible y aprobar la reforma, siguió caminos divergentes a la hora de su implementación. El gobierno electo, a cargo del Frente Amplio, resolvió que la reforma impide nuevas concesiones pero no afecta los contratos ya existentes, y limitó las acciones a los casos de incumplimiento. La decisión del gobierno progresista coincide con la defensa de los derechos adquiridos de los concesionarios, que venía realizando el Partido Nacional, mientras que fue considerada como un falseamiento de la voluntad popular por el Partido Colorado. También el movimiento sindical y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida rechazaron la decisión gubernamental, reclamando el cese de todas las concesiones privadas.

De manera más general, la reforma estableció un marco para la

participación, pero su eficacia depende, en última instancia, de la capacidad de las organizaciones sociales para aprovechar las nuevas posibilidades institucionales abiertas y articularse productivamente con la administración pública. Esto se relaciona directamente con la implementación efectiva de las disposiciones relativas a la descentralización, así como también con la capacidad para encarar las cuestiones sustantivas irresueltas por los sistemas anteriores.

5. Para terminar...

La reforma del agua es una inversión copernicana de los rumbos seguidos por el país en las últimas décadas. Los gobiernos de los partidos tradicionales promovieron reformas de mercado y encontraron resistencias del movimiento sindical y la oposición de izquierda, que apelaron a la ciudadanía por medio de recursos de referéndum para impedir las privatizaciones. La reforma del agua, por lo contrario, surgió de abajo, desde los movimientos sociales, y encontró apoyo en los partidos políticos. No se limitó a una coalición de veto y una actitud defensiva, sino que convocó a la ciudadanía a favor de una estrategia diferente, fundada sobre la afirmación de los servicios públicos, la participación social en la administración y una gestión sustentable. A partir de la resistencia a las privatizaciones, las multitudes del agua

se convirtieron en un poder constituyente que construyó nuevas instituciones públicas y principios de políticas a partir de los usos, manejos y conocimientos en común.

La reforma del agua estableció un punto de partida nuevo y una dirección diferente. Una vez aprobada, los actores políticos y sociales se reubican para actuar en el nuevo escenario siguiendo sus propias dinámicas. La implementación de la reforma comenzó mostrando direcciones divergentes entre el nuevo gobierno de izquierda y los movimientos sociales, sobre las que actúa la derecha política procurando ahondar la brecha y pasar de la luna de miel a la desilusión. El poder constituido se separa de la potencia constituyente y comienza a girar sobre sí mismo. Sin embargo, el cambio de signo del gobierno, su proximidad con las organizacio-

nes sociales y la distancia ideológica de la oposición introducen elementos nuevos en este panorama. Y aquí también lo más importante parece ser una inversión del tipo de relaciones establecidas en las últimas décadas. El principal desafío no es la labor imposible de evitar esos conflictos, sino convertirlos en un motor de producción política democrática, en lugar de que actúen como factores de bloqueo.

Eduardo Galeano (2004) expresó la esperanza de que la reforma del agua fuera el comienzo de una recuperación de la audacia y la energía creadora del Uruguay de otros tiempos. Para terminar, se puede sugerir que la reforma descubrió también la relación conflictiva entre movimientos sociales radicales y gobiernos reformistas que fue el motor político que hizo aquel Uruguay posible.

Bibliografía

- Banco Mundial (2004), *Making Service Work for Poor People. World Development Report*, Washington D.C., World Bank.
- Bevir, Mark y R.A.W. Rhodes (2001), *A Decentered Theory of Governance: Rational Choice, Institutionalism, and Interpretation*, Institute of Governmental Studies, University of California, Berkeley, Working Paper.
- Bottinelli, Oscar (2001), "Acerca de los plebiscitos", *El Observador*, Montevideo, 18 de febrero.
- Cámara Mercantil de Productos del País (2004), Informe elaborado por el Asesor Jurídico, Dr. Enrique Lussich, <http://www.camaramercantil.com.uy>
- Cámara Nacional de Comercio y Servicios (2004), Posición de la CNCS: Plebiscito sobre el agua y el saneamiento, <http://www.cncs.com.uy>
- CNDAV (2004), *¿Por qué una reforma constitucional?*, Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Folleto de Propaganda.

- De Angelis, Massimo (2003), "Neoliberal Governance, Reproduction and Accumulation", *The Commoner* N° 7, Spring-Summer.
- FAME (2005), Documentos del Foro Mundial Alternativo del Agua, Ginebra, 23 al 25 de marzo.
- FFOSE (2004), Privatización del agua en el Uruguay, Federación de Funcionarios de OSE, http://www.ffose.org.uy/aguayvida/privatizacion.htm#Privatizacion_Uruguay
- Foucault, Michel (1978), A governmentality, Curso del Collège de France, 1 de febrero, en *Microfísica do poder*, Sao Paulo, Grial, 2000.
- Galeano, Eduardo (2004), "Aguas de octubre", *La Jornada*, México, 1 de noviembre.
- Hall, David (2005), *Reclaiming Public Water. Achievements, Struggles and Visions from Around the World*, Amsterdam, Transnational Institute - Corporate Europe Observatory.
- Hardt, Michael y Antonio Negri (2004), *Multitud*, Buenos Aires, Debate.
- Ibarra, Luis (2005), *La reforma de los servicios públicos en el gobierno de Jorge Batlle*, Montevideo, Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
- Klein, Naomi (2001), "Reclaiming the Commons", *New Left Review* N° 9, May-June
- Lemke, Thomas (2001), "The Birth of Bio-Politics. Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality", *Economy & Society* 30, 2.
- Negri, Antonio (1996), "Réappropriations de l'espace publique", *Futur Antérieur* N° 33/34, París.
- OSE (2004), Agua y Saneamiento, Administración de Obras Sanitarias del Estado, <http://www.ose.com.uy>
- Pierre, Jon (2000), *Debating Governance*, Oxford, Oxford University Press.
- Rose, Nikolas y Peter Miller (1992), "Political power beyond the state: problematics of government", *British Journal of Sociology* 43, 2.
- URSEA (2004), Contratos de concesión, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, <http://www.ursea.gub.uy:8080/web/mnnormativo.nsf>
- Uruguay (2002), Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Montevideo, June 18, <http://www.imf.org/external/country/ury/index.htm>

Uruguay III

La forestación en debate. Inversión extranjera e impacto territorial en el Uruguay

*Raquel M. Alvarado**

La política forestal implementada en el Uruguay durante los últimos quince años ha sido objeto de permanente controversia tanto en sus inicios durante la etapa de plantación como en la actual fase de transformación de la madera.

La generosidad de la política de estímulos que los gobiernos han venido otorgando y los posibles efectos ambientales negativos de estas actividades son los puntos centrales de un debate que ya ha trascendido fronteras.

En el contexto económico del Uruguay, la forestación se distingue entre otras actividades económicas por las transformaciones territoriales que ha venido produciendo y por el creciente flujo de inversión extranjera que atrae.

La llegada al poder de la izquierda ha generado expectativas respecto de la corrección de aquellos aspectos de la política forestal que consagran situaciones de privilegio para el capital más concentrado en perjuicio de otros sectores agropecuarios, de los trabajadores forestales y de la comunidad toda.

* Licenciada en Geografía, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Magister en Políticas Ambientales y territoriales de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. alvarado@fcien.edu.uy

Durante los últimos quince años, se implementó en el Uruguay una política de desarrollo de la actividad forestal que tuvo una serie de singularidades:

- el importante apoyo estatal que recibió -y recibe-, que comprendió tanto el marco regulatorio del sector como la generación de condiciones materiales para la inversión;
- el intenso debate que generó - y genera- tanto en ámbitos técnico-académicos como en la sociedad civil, en dos planos íntimamente vinculados: el ambiental y el económico;
- la fuerte inversión privada (en gran parte extranjera) que atrajo -y atrae- tanto en la fase primaria como en las fases de transformación y servicios del complejo forestal;
- las importantes transformaciones territoriales que produjo -y produce- no sólo en las llamadas "regiones forestales" sino también en puntos muy distantes a ellas.

El rol del estado

El Estado tuvo un papel fundamental en el diseño, implementación y financiación de la política forestal, rasgo llamativo si se tiene en cuenta que en los últimos años la tendencia de los sucesivos gobiernos ha sido la de reducir al mínimo la participación directa del Estado en las actividades productivas.

El espíritu de la política forestal que surge de la exposición de motivos del proyecto de ley forestal enviado al Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo en 1987, parece reflejar un pensamiento desarrollista algo tardío al plantear un desarrollo sectorial sustitutivo de importaciones y objetivos de corrección de desigualdades regionales. Sin embargo, los procesos de apertura de la economía que experimentó el Uruguay en los años '90, al revitalizar el rol de las exportaciones como alternativa de despegue económico incidieron para que aquella política que fue concebida para sustituir importaciones derivara en una actividad exportadora de materias primas que atiende a las necesidades del mercado global antes que a las del mercado interno.

La acción del Estado se concretó en dos planos: en la aprobación de un marco legal específico y en la generación de condiciones materiales que facilitasen las inversiones.

El marco legal está constituido por una ley marco, ley Forestal 15939, aprobada unánimemente a fines de 1987, el artículo 45 de la ley 16002 (Plan de Inversiones Públicas), y un conjunto de decretos reglamentarios de las anteriores. Esta legislación determina las especies y áreas prioritarias para forestar así como los beneficios económicos que recibirán quienes cumplan los requisitos que marca la legislación. Asimismo establece la formulación de planes quinquen-

nales para el sector por parte de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El primer plan quinquenal, conocido como Plan Forestal (decreto 450/88) formula una serie de objetivos de desarrollo del sector, cuyo dispar cumplimiento analizaremos al final de este artículo.

El beneficio más importante a la forestación está constituido por el subsidio directo a las plantaciones (ley 16002 del 28-12-88). Este beneficio consiste en el reintegro del 50% del costo ficto de plantación a quienes habiendo plantado en las áreas de prioridad forestal, -previa aprobación de un plan de manejo-, demuestren luego de un año el prendimiento del 75% de las plantas.

El ritmo de plantación fue superior a lo previsto inicialmente, por lo que el Estado no pudo hacer frente a los pagos en tiempo, generándose una deuda con los productores que actualmente es de unos 30 millones de dólares. A partir de 2003 comenzó a reducirse progresivamente el monto del subsidio para desaparecer totalmente en 2007; pero en septiembre de 2005, el Poder Legislativo derogó la ley anterior, eliminándola en forma inmediata.

Además de este subsidio directo, los forestadores se vieron beneficiados con exenciones a las importaciones de insumos para el sector, al pago del impuesto inmobiliario rural y del impuesto de la

renta agropecuaria, a lo cual se agregaron préstamos con condiciones ventajosas del Banco de la República Oriental del Uruguay. La exención de impuestos y el subsidio directo han significado una importante transferencia de recursos financieros desde el Estado hacia el sector privado forestal, afectando otros sectores productivos por la derivación de la inversión estatal y produciendo desfinanciación en los gobiernos municipales que dejan de percibir el impuesto inmobiliario rural.

Dado que el retorno de la inversión en plantaciones forestales no se da - como mínimo- antes de los ocho años, siempre los planes de desarrollo forestal van acompañados de estímulos estatales. Sin embargo, la política forestal uruguaya es de una generosidad desmedida; basta pensar que el carácter indiscriminado de los subsidios hace que una empresa trasnacional como Shell haya sido subsidiada por el Estado uruguayo cuyo PBI es notoriamente inferior al patrimonio de dicha empresa.

La ley Forestal también consagró la excepción a normativas que desde 1963 impedían la tenencia de tierras a sociedades anónimas, facilitando así la llegada de empresas extranjeras.

Como se mencionó, el Estado también solucionó aspectos materiales que se presentaban como obstáculos al desarrollo del sector. Tal fue el caso del acondicio-

namiento de la infraestructura de transporte que en la forestación adquiere importancia particular. El transporte de productos forestales supone un intenso tránsito de vehículos pesados en cortos períodos de tiempo, lo que produce un importante deterioro de los caminos. Por otra parte, por lo voluminoso de la carga el costo del transporte resulta elevado en relación con el escaso valor agregado de la madera rolliza. Por lo tanto la incidencia del costo de transporte en la rentabilidad de la actividad forestal es muy importante. A principios de los '90, diferentes estudios dieron cuenta de las dificultades que habría de enfrentar el sector cuando llegaran los momentos de corte dado las deficiencias del parque vial y ferroviario. Durante algún tiempo, este problema ocupó importantes espacios en la prensa, exagerándose su magnitud. El transporte fue calificado como el "cuello de botella" del desarrollo forestal, expresión que aludía a las reales deficiencias que presentaba la infraestructura disponible para evacuar la futura producción, pero a partir de la cual se exageró en cuanto a la urgencia de las soluciones requeridas. Esa forma de presión hizo que el Estado asumiera los costos de los estudios de diagnóstico y se formuló el Programa de Transporte de Productos Forestales con financiación del Banco Mundial (76 millones US\$), del Exim Bank del Japón (30 millones US\$) y aportes propios por 44 mi-

llones US\$ para el reacondicionamiento de la infraestructura vial y ferroviaria.

El paso de los años demostró que las proyecciones eran exageradas, pues en ningún momento se registró la situación mencionada, dado que los cortes son escalonados.

Hasta 2000 aproximadamente, la producción obtenida era exportada como madera rolliza sin ningún valor agregado, contradiciendo así algunos de los objetivos planteados en la formulación del Plan Forestal. Así como en la fase primaria el Estado no sólo financió sino que también orientó el desarrollo forestal, -definiendo áreas y especies prioritarias, ofreciendo cursos de capacitación y actualización técnica-, no existió luego política explícita o implícita de parte del Estado tendiente a agregar valor a la producción forestal. Todas las iniciativas tendientes a la industrialización de la madera han provenido del sector privado y el Estado se ha limitado solamente a otorgar beneficios a las empresas pero sin marcar orientación en cuanto al modelo industrial a seguir.

El marco legal vigente para las inversiones industriales está dado por la ley de Inversiones 16.906, de 1999. Esta ley consagra una serie de principios y garantías para la inversión sin diferenciar si ésta es nacional o extranjera, establece beneficios fiscales y flexibiliza algunas normas de materia la-

boral¹. Dentro del marco de la Ley de Inversiones, el Estado ha seguido y sigue subsidiando la producción forestal a través de declaratorias de promoción, exoneraciones impositivas y otorgamiento de zonas francas.

Varios emprendimientos se han visto beneficiados con la declaratoria de promoción que les permite acceder a los beneficios de la ley: es el caso de los emprendimientos portuarios, las plantas de *chips* (astillado) y las plantas de celulosa². Dentro del marco general de esta ley se han celebrado acuerdos de reciprocidad en materia de protección de inversiones con diversos países.

En este punto debemos mencionar el polémico “Acuerdo relativo a la promoción y protección de inversiones entre Finlandia y el Uruguay”. La aprobación de este acuerdo por el Poder Legislativo

-requisito exigido por la empresa Botnia para concretar la inversión en una planta de celulosa- se concretó en 2004 con el voto de todos los partidos políticos excepto el Frente Amplio, adquiriendo rango de ley. Supone una mutua cooperación y protección para las inversiones realizadas por cada uno de los países en el territorio del otro por un período de veinte años, enmarcado en los principios y garantías sentados en la ley de Inversiones. El aspecto más polémico es la garantía del Estado uruguayo frente a las pérdidas que las empresas finlandesas pudiesen sufrir “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones”. Es preocupante que ante eventuales protestas populares, -por ejemplo ante un suceso de contaminación ambiental-, el Estado uruguayo deba indemnizar a la empresa por

¹ Los aspectos principales de esta ley son: 1- Declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. 2-Brinda igualdad en el régimen de admisión y tratamiento a inversiones nacionales y extranjeras. 3-Garantiza la libre transferencia de capitales al exterior en moneda de libre convertibilidad. Los beneficios fiscales consisten en la exoneración del impuesto al patrimonio a los bienes muebles destinados al ciclo productivo, equipos para procesamiento de datos, y a los bienes inmateriales como marcas, patentes, etc. Otro beneficio es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en la adquisición de esos bienes.

² La declaratoria promocional se aplica a proyectos que: -incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad; -faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente las que incorporen mayor valor agregado nacional; -generen empleo productivo directa o indirectamente; -faciliten la integración productiva incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva; -fomenten las actividades de las pymes; -contribuyan a la descentralización geográfica, se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios, con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales (en este caso, los beneficios serán superiores en plazo o cuantía a los proyectos otorgados a los situados en Montevideo).

posibles pérdidas o impedir que la población se manifieste. Asimismo, el Acuerdo garantiza que las inversiones no serán objeto de expropiaciones ni nacionalizaciones. Si bien este acuerdo rige para hipotéticas inversiones uruguayas en Finlandia, parece poco probable que capitales uruguayos se instalen allí.

Otra forma de beneficio directo ha sido el otorgamiento a las empresas Eufores (Ence) y Forestal Oriental (Botnia) el estatuto de zonas francas en los predios donde se construirán las plantas de celulosa. Según consta en las resoluciones del Poder Ejecutivo esta decisión se basa sobre la ley de Zonas Francas (15.921) que “declara de interés nacional la promoción y desarrollo de las zonas francas en el país, con el objetivo de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional” y (...) “la conveniencia de promover, dentro de la política de fomento de la exportación, la instalación de polos de desarrollo económico en el interior de la República, de alta especialización y tecnología industrial”³. Cabe mencionar además que en 2004 se aprobó la exoneración impositiva para las actividades de trozado, descortezado y

chipeado de la madera. Estos últimos beneficios fueron otorgados a escasos días de las elecciones nacionales de octubre de 2004.

El debate forestal

Ninguna otra actividad en el Uruguay se ha hecho de tantos defensores y detractores, instalándose un debate público sobre sus efectos ambientales y económicos o, más específicamente, sobre quiénes son los que van a beneficiarse y quiénes se perjudicarán.

En los primeros años de la década de los '90 se planteó una fuerte polémica sobre los efectos ambientales que tendrían las plantaciones, lo cual redundaría a largo plazo en efectos económicos negativos. Se podían identificar claramente a defensores y detractores de las plantaciones. Entre los primeros se encuentran los productores forestales, los técnicos de la Dirección Forestal del MGAP, y algunos políticos de los partidos tradicionales. Entre los segundos, encontramos a ONGs ambientalistas, algunos académicos, políticos de izquierda y productores ganaderos. En general las posiciones asumidas tanto por unos como por los otros reflejan ciertos preconceptos basados en

³ La concesión es por 30 años previéndose el pago de un canon por parte de las empresas. Las actividades autorizadas dentro de la zona franca son: fabricación de celulosa, fabricación de papel, otras industrias de transformación de la madera, industrias proveedoras de insumos, almacenamiento de materias primas, producción de energía eléctrica, y operaciones portuarias.

gran medida sobre la experiencia de otros países y no en estudios propios.

El debate ambiental

El debate ambiental tal vez haya sido el aspecto más publicitado de la forestación, gracias a lo cual los pormenores del plan forestal llegaron a la opinión pública a través de la prensa, la radio y la realización de foros de debate, adquiriendo en su momento de mayor intensidad un tono muy radicalizado (años 1992 a 1995 aproximadamente).

El debate giró principalmente en torno de la construcción de una imagen negativa de las plantaciones, en particular del eucalipto como agente nocivo para el ambiente. Por otra parte, al ser vistas las plantaciones como parte de una estrategia papelera internacional que iría arrasando con los ecosistemas y comunidades locales a su paso, quienes estimulan o apoyan esta política forestal -productores, políticos o simples técnicos forestales- fueron vistos necesariamente como cómplices del gran capital forestal transnacional. Como era esperable en un país fuertemente politizado como el Uruguay, este debate no podía escapar a una rápida identificación ideológica izquierda-derecha.

Las principales objeciones a las plantaciones son las siguientes:

- la gran masa forestal implantada afectaría el balance hídrico

ya que absorbería grandes volúmenes de agua lo cual afectaría la disponibilidad de agua subsuperficial para otros cultivos adyacentes, produciendo en el mediano plazo un proceso de desertización;

- el eucalipto provocaría un efecto desecante sobre el suelo y afectaría la provisión de nutrientes de modo tal que quedarían inutilizados para otra producción;
- el hecho de ser plantaciones monoespecíficas redundaría en escasa biodiversidad dado que no ofrecen posibilidades de sustento a las especies autóctonas, y a la vez permiten desarrollarse allí algunas especies consideradas plagas, como la cotorra, el zorro y el jabalí, facilitando además la propagación de plagas y del fuego.

Los defensores de la forestación esgrimen la visión clásica acerca de las virtudes del bosque como mejorador del ambiente y desestiman las predicciones de los ambientalistas.

Pasados ya más de quince años desde el inicio de las plantaciones, las afectaciones ambientales en lo que refiere a los recursos hídricos han sido muy puntuales, si bien los resultados sólo podrán verse en el largo plazo.

Luego de varios años en que el debate ambiental parecía haberse calmado, la polémica se vio revitalizada al iniciarse la etapa de transformación de la madera con

las grandes inversiones industriales que ésta trae consigo. Las grandes obras proyectadas, como plantas de celulosa, *chipeadoras*, y puertos, han despertado una gran oposición debido a los riesgos de contaminación aérea, hídrica y sonora. Esta oposición ha sobrepasado el ámbito de los militantes ambientalistas para incluir a los potenciales afectados, habitantes de las áreas donde estas obras tendrán lugar.

Uno de estos proyectos es la construcción de una planta de asillado (y una cinta transportadora que se adentraría en el océano para el embarque a granel) en el puerto de La Paloma⁴. Si bien había sido autorizada por el Ministerio de Transporte en 2004, el actual gobierno revocó dicha autorización para realizar la obra en esa localización, esperándose una nueva propuesta de localización en la costa del departamento de Rocha por parte de la empresa.

En el sonado caso de las plantas de celulosa que se proyectan instalar en el departamento de Río Negro sobre el río Uruguay, el conflicto con la comunidad local alcanzó dimensiones internacionales al unirse a las protestas habitantes de la vecina Gualaguaychú, autoridades de la provincia de Entre Ríos y recientemente el

propio gobierno argentino. Distintas ONGs ambientalistas, así como asociaciones de vecinos de Río Negro y Entre Ríos se manifestaron contrarias a estos proyectos debido a los altos riesgos de contaminación, tanto del agua como del aire, que presentan estas plantas. Su proximidad a la capital departamental, Fray Bentos, y al balneario Las Cañas (principal recurso turístico del departamento) acentúa la gravedad de estos riesgos.

En el caso de la planta de celulosa de Eufores, luego de la presentación del estudio de Impacto Ambiental, de la audiencia pública prevista en la legislación y la comparecencia de sus representantes ante la Cámara de Diputados, la Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la instalación de la planta a pesar de que la empresa no prevé usar las tecnologías más modernas que aseguran un grado menor de contaminación.

La resistencia a la planta de celulosa se vio potenciada por dos hechos: los antecedentes de Ence en España y la relación de Eufores con los trabajadores. Ence presenta muy malos antecedentes en materia ambiental debido a la grave contaminación que una de sus plantas causó en la ría de Pontevedra por lo cual la empresa

⁴ Las principales objeciones que se hacen a este proyecto son: el área de acopio avanza sobre espacios de recreo e interrumpe la conexión entre playas; la *chipeadora* genera polvillo y ruido, en una zona de descanso; y el abastecimiento de la carga al puerto implica un importante tránsito de camiones por la única ruta de acceso a la ciudad balnearia

-estatal en ese entonces- fue condenada y debió pagar indemnizaciones; varios de sus directivos fueron a prisión. En segundo lugar su filial en el Uruguay, Eufores, no ha tenido una buena relación con la comunidad local ni con los medios de comunicación. Ha habido numerosas denuncias acerca de las pésimas condiciones de trabajo en sus plantaciones donde terceriza las tareas con empresas contratistas que no cumplen las normativas, de lo cual Eufores se desentiende.

Botnia, en cambio, ha tenido una estrategia de imagen institucional muy diferente a la de Ence. Desde la etapa de las plantaciones, su subsidiaria Forestal Oriental S.A. se diferenció de otras empresas por realizar estudios de impacto ambiental -de lo cual la ley exime a la forestación- y obtener la certificación ambiental por el manejo sustentable de sus bosques por el Forestry Stewardship Council (FSC) en 2001. Realizó actividades informativas para la comunidad de Fray Bentos, donde los responsables de la empresa y los técnicos a cargo de los estudios de impacto ambiental y socioeconómico respondieron preguntas del público. Asimismo para estos estudios convocaron a prestigiosos investigadores uruguayos de la Universidad pública lo que genera mayor confianza respecto de los estudios de impacto. Otra señal fue invitar a periodistas de los principales medios de comunicación a recorrer

sus plantas en Finlandia para que apreciaran la forma en que operan. Por otra parte, la empresa también se beneficia por la propia imagen del país de origen, que ocupa el primer lugar del mundo en calidad ambiental, según el Índice de Sostenibilidad Ambiental elaborado por el Foro Económico Mundial y las Universidades de Yale y Columbia.

De cualquier modo, a pesar de esta estrategia "más amigable", las fuertes protestas emprendidas desde las dos orillas incluyen a ambas plantas.

La rápida identificación ideológica de las partes en pugna que se hacía una década atrás se vuelve más compleja ahora, pues la izquierda en el poder no sólo no volvió atrás con algunas medidas tomadas por el anterior gobierno sino que defiende activamente la instalación de las plantas de celulosa.

El debate económico

El otro plano del debate giró en torno de sus efectos económicos, planteados en términos de buen o mal negocio para el país.

Durante los años '90 se realizaron diversos estudios sobre los costos que esta política genera al Estado y los beneficios que le reporta al sector privado. Autores como Pérez Arrarte (1997) o Stolicovich (1995) consideran que de acuerdo con el volumen de los beneficios previstos en la legislación

(subsidios, impuestos no percibidos) y al bajo valor agregado de las exportaciones forestales, el balance fiscal es negativo para el Estado.

Desde el ámbito gubernamental y del empresariado forestal también se realizaron estudios sobre el impacto fiscal y socioeconómico. González Posse (1996), Vázquez Platero (1996) y Ramos (2001) comparan la forestación con la actividad productiva realizada con anterioridad en los mismos suelos (ganadería extensiva). Ambos trabajos coinciden en que la rentabilidad para el Estado desde el punto de vista fiscal es superior a la de la ganadería. Se señala que es importante tener en cuenta la recaudación por impuestos a los fletes, gastos de cosecha, proceso industrial y los que gravan el consumo adicional.

Sin embargo, estos trabajos no tomaron en cuenta las inversiones que el país está realizando en infraestructura de transporte así como en investigación y capacitación en el sector.

Una mención aparte merece el tema del empleo. Todos los estudios realizados en los años '90 hacían proyecciones optimistas no sólo acerca de la creación de puestos de trabajo sino también

respecto del nivel salarial, que se preveía superior al salario que percibía el peón rural de un campo ganadero. Ello incluso era aceptado por los opositores a la forestación aunque advertían acerca de su carácter zafral. El paso de los años demostró que la generación de empleo ha sido limitada y que las condiciones de trabajo y los salarios del trabajador forestal son deplorables⁵. Sin embargo, es interesante señalar la dinamización y diversificación de los servicios relacionados con el sector forestal. Han surgido emprendimientos variados, como viveros, consultoras que diseñan planes de manejo y estudios de impacto ambiental y empresas especializadas en venta de campos forestales.

En los últimos años no se ha vuelto a discutir acerca de los costos y beneficios de las plantaciones: la masa forestal está allí y eso no tiene vuelta atrás. Sin embargo, el debate revive a partir de las inversiones proyectadas para la fase de transformación de la madera. Ante todas las facilidades que se le brindan al capital extranjero para instalarse, la "oposición forestal" se plantea si ello redundará en beneficios para el país, sea en ingresos o en empleo genuino.

⁵ Ello ha sido así debido a la tercerización de las tareas que han efectuado los grandes productores hacia empresas de servicios forestales, la mayoría de las cuales son informales y sobreexplotan a los trabajadores, situación denunciada por los propios inspectores del Ministerio de Trabajo que declaran su impotencia ante la falta de instrumentos legales para actuar. Asimismo se ha registrado persecución a los trabajadores sindicalizados.

Un claro ejemplo es el caso de la planta de celulosa de Botnia, inversión que se publicita como la más grande de la historia del país, ya que rondaría los 1.000 millones de dólares. La mayor parte de los componentes de la planta serán traídos desde Finlandia y no fabricados en el Uruguay; al ubicarse en una zona franca, esos insumos no pagarán impuestos para ingresar al territorio.

Por otra parte la ley de inversiones permite la libre repatriación de capitales y el Tratado de Protección de Inversiones deja al Estado como rehén de la empresa y puede significar un cercenamiento del derecho a manifestarse de trabajadores y vecinos. Tampoco hay certeza acerca de las promesas en relación con la cantidad de empleos a crear; y mucho menos acerca de la seguridad en materia ambiental.

Los inversores

La inversión privada en los distintos eslabones del complejo forestal ha sido sostenida durante los diez primeros años de implementación de esta política; disminuyó claramente entre 1999 y 2002, acorde con la crisis que afectó a la región, y se incrementa nuevamente a partir de 2003.

De acuerdo con la función cumplida dentro de la cadena forestal, los agentes privados del sector se pueden clasificar en:

- 1- Productores forestales: viveros y forestadores;
- 2- Actividades industriales vinculadas con la producción forestal: aserraderos y plantas de celulosa;
- 3- Actividades de servicios vinculadas con la producción forestal: servicios directos a las plantaciones, consultoras, transportistas;

Los forestadores son aquellos que poseen o arriendan tierras y las forestan con fines comerciales. Sus formas de organización son sumamente variadas:

- a) *productores unipersonales o empresas familiares*: pequeños productores con tradición en el sector o ajenos al mismo que incursionaron como forma de inversión de largo plazo.
- b) *fondos de inversión* (inversores múltiples): buscan captar ahorristas a través de la venta de paquetes de inversión que incluyen la propiedad de la tierra y el bosque. Existieron tres empresas de este tipo: Paso Alto, Valleflor y Fondo Forestal; con gran presencia en los medios de comunicación captaron capitales de inversores ajenos al sector como profesionales de zonas urbanas.
- c) *fondos de pensión*: Estas inversiones tienen una considerable tradición en el sector habiendo iniciado las plantaciones con bastante anterioridad a las políticas de estímulo, en

la década de los '60. Pertenecientes a las Cajas Bancaria y Notarial y, más recientemente, a la de Profesionales Universitarios, han resultado una experiencia exitosa, complementada con tareas de aserrado y ganadería; se ubican en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Durazno.

- d) *otras formas de asociación*: por ejemplo, los Grupos de Interés Económico, como Forestur, que es una asociación de pequeños y medianos productores del este del país, cuya finalidad es conformar y gestionar una oferta única para exportación. Otro ejemplo es la Asociación de Forestadores del Centro, que nuclea a los plantadores de los departamentos de Florida y Durazno.
- e) *sociedades anónimas*: incluimos aquí a las grandes empresas, con mayor área plantada y mayor capital invertido, algunas integradas verticalmente, nacionales o extranjeras. Entre las empresas nacionales se destaca Fanapel (Fabrica Nacional de Papel). Esta empresa pionera en el sector, fundada en 1898, es la mayor empresa privada de capital nacional. Es una empresa integrada verticalmente: foresta, produce celulosa y papel, distribuye y vende en el mercado nacional e internacional. Ha sido distinguida con premios a la calidad en las líneas de pro-

ducción y ventas. En 2000 adquirió el 82% del paquete accionario de Celulosa Argentina S.A. Entre las extranjeras se destacan Eufores, Botnia y Colonvade, que como han incursionado también en la fase secundaria de la cadena forestal, serán descritas en el próximo punto. Las forestadoras extranjeras son propietarias de algo más de la mitad de la superficie forestada.

¿Por qué vienen empresas extranjeras a plantar en el Uruguay?

Algunos autores, con una mirada crítica acerca de la expansión de las plantaciones forestales se refieren a ello como "imperialismo forestal" (Carrere y Lohman, 1996). Según estos autores, los planes para el desarrollo de plantaciones industriales en gran escala no responden a las necesidades locales, sino a las de una economía industrial dominada por los intereses del Norte en connivencia con las burocracias locales.

El agotamiento progresivo de los bosques naturales y las presiones ambientalistas han dado lugar a una expansión de las transnacionales hacia el sur, que cumple entonces un papel sustitutivo en esa "geopolítica forestal". Otros factores que inciden en la expansión hacia el sur y en particular en el Uruguay son: el rápido crecimiento de las especies de turno corto

en nuestras latitudes respecto de los bosques del hemisferio norte (en algunos casos hasta diez veces más rápido); el menor precio de la tierra, en particular en grandes extensiones continuas; el bajo costo de la mano de obra; las políticas de estímulo; las normativas ambientales poco exigentes; el agotamiento de otros modelos forestales⁶.

La inversión extranjera en la etapa secundaria

A partir de 2001 comienzan a materializarse y presentarse proyectos de inversión en la fase de transformación de la madera. Se trata en su mayor parte de capitales extranjeros, con montos que resultan muy significativos para la escala de la economía uruguaya. El valor total de las inversiones planteadas ronda los 2.000 millones de dólares. Como ya mencionamos, estas inversiones se dirigen a la instalación de plantas de astillado (*chips*), puertos y plataformas logísticas, fabricación de celulosa y, en menor medida, aserraderos.

Los principales inversores en la fase de transformación y transporte de la madera son de origen extranjero y corresponden a destacados grupos que operan en el mercado internacional e incursionan en varias fases de la cadena

forestal. Ellos son Ence (España), Botnia (Finlandia) y Weyerhaeuser (EUA).

Las inversiones del **grupo Ence**, Empresa Nacional de Celulosa de España han liderado esta fase de transformación de la madera, no solo por los montos efectivamente materializados sino por su diversificación en distintos eslabones de la cadena forestal: unos 100 millones de dólares entre plantaciones, plantas industriales e infraestructura portuaria.

Esta empresa, originalmente del Estado español y luego privatizada en 2001, se instaló en el Uruguay en 1990 con el nombre de Eufores S.A. comenzando a plantar eucaliptus en los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú, alcanzando actualmente unas 55 mil hectáreas. Al ser una empresa integrada verticalmente que comprende otras fases del complejo forestal como la fabricación de celulosa, puede absorber toda la madera que produce sin depender de las variaciones del precio internacional. Es el principal exportador de madera rolliza del Uruguay, no sólo propia sino también adquirida a pequeños productores que no tienen escala para exportar en forma independiente. Comercializa unos 650 mil m³ de madera anualmente.

A partir de 2001 este grupo inició sus inversiones en otras fases de

⁶ Es el caso de Chile, donde a partir de 1994 comenzaron a suprimirse algunos beneficios y surgieron problemas con las comunidades mapuches que reivindican la propiedad de tierras que se hallan en manos de poderosas empresas.

la cadena forestal como la transformación y el transporte de la madera. A fines de ese año comenzó la construcción de la Terminal Logística M'Bopicuá (TLM) en el departamento de Río Negro a orillas del río Uruguay, a 12 km al norte de la ciudad de Fray Bentos y a unos 20 km del balneario Las Cañas. El complejo comprende una terminal portuaria especializada en el manejo de productos forestales y una planta de astillado (*chips*) con una capacidad de 800 mil m³ por año. Se inauguró en diciembre de 2003 y supuso una inversión de 35 millones de dólares. Recibió el tratamiento de actividad promovida de acuerdo con la ley 16.906 por lo cual quedó eximida de impuestos y tasas aduaneras para la importación de insumos.

Paralelamente a la construcción de la TLM, Eufores construyó otra planta de *chips* en la ciudad de Montevideo, en el barrio de Peñarol, que se inauguró en marzo de 2003 y tiene una capacidad operativa de 500 mil m³/año, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares, comenzando los primeros embarques a mediados de 2003 desde el puerto de Montevideo.

Eufores ha incursionado también en otras fases de la transformación de la madera: en 2001 adquirió el aserradero Maserlit en la localidad de Menafrá (Río Negro) que procesa unos 28 mil m³ de madera anuales. Pero la inversión más importante y polémica es la

construcción de una planta de fabricación de celulosa junto a la TLM M'Bopicuá, a orillas del río Uruguay. Esta inversión de unos 500 millones de dólares ha sido objeto de gran polémica no solamente en el nivel local sino también en el internacional, como ya se mencionó.

Grupo Botnia: este grupo de origen finlandés incursiona en la fase primaria, y planea instalar una planta de celulosa y una terminal portuaria. Sus antecedentes están en la empresa Forestal Oriental S.A. que a partir de 1990 comenzó a plantar eucaliptus en la zona de Paysandú y Río Negro alcanzando actualmente unas 40.000 hectáreas. El paquete accionario de Forestal Oriental estaba integrado por Royal Dutch Shell (60%) y las finlandesas UPM-Kymmene Corporation (38,6%) y FinnFund (1,4%). En 2003 el grupo Botnia adquirió el paquete accionario de Shell que se retiró del sector en América del Sur. A su vez, el paquete accionario del Grupo Botnia está integrado por UPM-Kymmene (47%), Metsä (M-real, 47 %) y la cooperativa Metsälitto (6%), integrada por 130.000 pequeños productores, que abastece de madera las cinco plantas que tienen en Finlandia. Botnia es el segundo productor europeo de celulosa.

En consecuencia, la participación de UPM-Kymmene en el Uruguay, directa o indirectamente, alcanzaría alrededor del 66 % del total del grupo. Esta papelería ocu-

pa el tercer lugar mundial en la producción de papel, con plantas en 17 países, incluido China.

El grupo Botnia planea la construcción de una planta de celulosa próxima a la ciudad de Fray Bentos y 7 km aguas arriba del balneario Las Cañas. Posteriormente anunció la construcción de un puerto de barcazas. La inversión, de unos 933 millones de dólares en la planta y unos 12 millones en el puerto, recibió la declaración de actividad promovida (ley 16906) y la concesión de una zona franca (ley 15.921) en octubre de 2004⁷.

Colonvade S.A.: Es el nombre que ha tomado en Uruguay RII Weyerhaeuser World Timberfund, que es un *joint venture* entre Weyerhaeuser Forestland International y UBS Brinson Inc. de Chicago que administra fondos de pensión, fideicomisos, etc. Weyerhaeuser, es una de las mayores empresas forestales del mundo (primer productor mundial de pulpa).

Es una empresa verticalmente integrada cuya producción comprende desde las plantaciones hasta la producción de pulpa, papel y tablas⁸. En el Uruguay las subsidiarias se denominan Colon-

vade S.A. y Los Piques S.A. Esta (recientemente adquirida, pertenecía a una sociedad uruguayo-canadiense), posee unas 128 mil hectáreas y lleva invertidos unos 150 millones de dólares en tierras y plantaciones. Colonvade tiene unas 100 mil hectáreas en propiedad; están forestadas unas 53 mil ha, en su mayoría con pino, y Los Piques tiene unas 27.500 ha; están forestadas unas 18 mil ha con Pinus y Eucaliptus Grandis en igual proporción. Es la mayor propietaria de tierras del Uruguay.

Las plantaciones de Weyerhaeuser se ubican en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú; trabajan directamente unas 130 personas y en forma indirecta unas 600 personas. Durante 2001 anunció importantes inversiones en el sector de aserrado: la construcción de cinco plantas industriales por valor de 364 millones de dólares en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú. Estas inversiones fueron declaradas de interés nacional por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, otorgando exoneraciones para dos aserraderos completos, una planta de madera terciada o enchapada, una planta de productos con

⁷ Según voceros de la empresa, la construcción de la planta de celulosa de Botnia producirá un aumento del 1,6% del PBI y agregará unos 200 millones de dólares anuales a la producción nacional. Será la segunda inversión más grande de la historia en el Uruguay, después de la represa de Salto Grande.

⁸ Tiene forestadas 2,3 millones de hectáreas en EUA de su propiedad, licencia para explotar 13,3 millones de hectáreas propiedad del gobierno canadiense, 25 mil hectáreas en Australia y en sociedad 78.200 hectáreas en Nueva Zelanda. Sus exportaciones en el año 2000 fueron del orden de los 15.900 millones de dólares

ingeniería de proceso y otra de procesos densificados. Ya ha comenzado la construcción de una de ellas y esperan tener todas operando en 2014; las exenciones fiscales alcanzarían unos 285 millones de dólares.

Grupo Forestal: Es un grupo formado por varias empresas chilenas que incursionaron primero en el sector ganadero y a partir de 1992 en forestación. Las plantaciones se ubican en el sur y sudeste del país (departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Florida), sumando unas 27.000 hectáreas forestadas con *Eucalyptus globulus*. Este mismo grupo económico asociado con un grupo de forestadores uruguayos (Fore-sur) construyó en Montevideo (La Tablada) una planta *chipeadora* (Chipper S.A.) que se encuentra operando desde mediados de 2004. Este grupo propuso por la modalidad de iniciativa privada para concesión de obra pública, la construcción de una terminal granelera en el puerto de la ciudad de La Paloma, uno de los principales centros turísticos del país. Este proyecto, Puerto Graneles SA, -que ya mencionamos-, supone una inversión aproximada a los 25 millones de dólares⁹.

Las transformaciones territoriales

Más allá de los eventuales impactos ambientales ya mencionados, la implementación de la actividad forestal ha producido una serie de transformaciones en el territorio, algunas inherentes a la propia actividad como el cambio de uso del suelo y otras inducidas por aquellas, como la valorización inmobiliaria o la movilidad de la población. La dispersión de las áreas de prioridad forestal determina que sus efectos se manifiesten en puntos muy distantes unos de otros e inclusive en lugares aparentemente ajenos al desarrollo forestal como Montevideo (Alvarado, 2002).

El intenso ritmo de plantación registrado produjo en una década un importante **cambio de uso del suelo**, superior a 600 mil hectáreas (4% de la superficie del país), que pasaron de la ganadería extensiva a la forestación. Ello fue acompañado de cambios en la propiedad de la tierra, lo cual significó un aprovechamiento más intensivo del suelo debido a la introducción de una lógica empresarial en áreas de ganadería tradicional.

La irrupción de las nuevas empresas trajo aparejado un proceso

⁹ Consiste en la construcción de una terminal de cargas a granel que estaría compuesta por una planta de astillado (*chipeadora*), un área de depósitos y operativa, y una cinta transportadora que se internaría en el océano Atlántico una distancia de 1300 m, donde se alcanza una profundidad de 15 metros, necesaria para la operación de grandes buques.

de **extranjerización de la propiedad de la tierra**. Aproximadamente la mitad del área plantada se encuentra en manos de empresas extranjeras: cerca de 125 mil hectáreas posee Colonvade S.A. (la estadounidense Weyerhaeuser), 35 mil Forestal Oriental (Shell-Kymmene anglo-holandesa-finlandesa), 50 mil Eufores (española), y unas 40 mil en manos de empresas chilenas arribadas en los últimos años.

Una transformación que puede parecer menor frente a los impactos económicos es la **modificación del paisaje**. El clásico paisaje de pasturas y horizontes amplios comienza a desaparecer frente a la aparición de manchas compactas de árboles que producen una sensación de encierro cuando flanquean ambos lados de las rutas, desdibujando la identidad de las zonas serranas caracterizadas por los afloramientos de piedra desnuda.

Paralelamente, el desarrollo de la actividad forestal impactó en forma marcada en el mercado inmobiliario rural. La declaración de prioridad forestal determinó la inmediata **valorización de tierras** hasta entonces consideradas marginales desde el punto de vis-

ta productivo y por lo tanto con bajo valor de mercado. Ante la afluencia de forestadores buscando tierras los propietarios originales de esos campos multiplicaron sus precios de venta¹⁰. En el caso de la forestación los costos de plantación han sido minimizados por la generosidad de la política forestal. Por esa razón los forestadores tuvieron capacidad para pagar elevados precios por la tierra, lo que significó que los primeros beneficiarios de la política forestal fueran los propietarios originales de tierras hasta entonces de escaso valor. La búsqueda de campos forestales tuvo en cuenta dos factores: la aptitud de los suelos y la ubicación respecto de las vías de circulación. Dado que la mayor parte de la producción hasta el momento se exporta como madera rolliza y ésta tiene un bajo valor de mercado, el costo del transporte tiene una incidencia altísima. Por lo tanto la accesibilidad de las plantaciones hacia los puertos de salida de la exportación pasa a tener un papel preponderante.

Un análisis de la **distribución espacial de la inversión** en la fase primaria muestra que la región Noreste es la que ha recibido los mayores montos de inversión, seguida por la región del Litoral, el

¹⁰ La forestación dinamizó el mercado inmobiliario rural al producir un encadenamiento de compras y ventas, ya que quien vendía un campo de prioridad forestal no se retiraba del sector sino que adquiría otro de mayor aptitud para continuar con su actividad ganadera. Ello a su vez determinó que aumentasen los precios de los campos no forestales dado que quienes vendieron a buen precio sus campos de aptitud forestal contaban ahora con mayor poder de compra. Como consecuencia se produjo una suba generalizada en los precios de la tierra rural entre 1996 y 1998.

Centro y por último el Sureste. Es interesante señalar que gran parte de esa inversión se ha dirigido a departamentos de escaso desarrollo económico. Esto se constata al comparar el PBI departamental y la inversión total en plantaciones (Alvarado, 2002).

Otros impactos en el territorio derivan de las acciones tendientes a **readecuar la infraestructura de transporte**. El transporte de la madera, tanto hacia las plantas industriales como hacia los puntos de salida de la exportación, es uno de las fases de la cadena forestal que tiene mayores efectos en el territorio. Por las características de la carga necesita de grandes infraestructuras tanto para depósito como viales. La recuperación vial no sólo mejora la rentabilidad de las empresas sino que reduce el número de accidentes, así como las emisiones de gases contaminantes y ruidos. El incremento del tránsito de camiones que se origina en los períodos de corte favorece a las empresas transportadoras y dinamiza los servicios al transporte (estaciones de servicio, talleres mecánicos), por lo cual más de una vez se ha dicho que la forestación es también un negocio de transporte.

Las tareas de construcción y reacondicionamiento portuario implican tal vez las transformaciones más notables tanto en tierra como en el medio acuático. Estas obras incluyen construcción de muelles y ejecución de dragados con la

consiguiente remoción de sedimentos que serán luego depositados en tierra firme. A su vez la necesidad de contar con playas de acopio dentro o fuera del recinto portuario -pero próximos al mismo-, determina que deban asignarse a este uso espacios que anteriormente cumplían diferente función, generalmente recreativa, lo que es una de las causas de conflicto con la comunidad local. Esto se da en casos como el del puerto de La Paloma y el de Puntas de Sayago (Cerro Free Port S.A), en Montevideo.

Asimismo, la necesidad de contar con accesos adecuados al puerto, hace que deba plantearse la construcción de nuevas vías férreas [por ejemplo: Puntas de Sayago o anillos perimetrales (Fray Bentos)] creando problemas de tránsito y accidentes en las áreas urbanas contiguas.

El puerto de Fray Bentos -estatal- evacua actualmente gran parte de la madera del Litoral, aunque se debe completar carga en Nueva Palmira y Montevideo dado que el dragado del canal Martín García está inconcluso. Como se mencionó, existen algunos problemas de acopio y de circulación de camiones para acceder al puerto.

En el caso del puerto de Montevideo, la principal dificultad hasta el momento es la carencia de espacios de acopio en el recinto portuario. Actualmente la madera no tiene un lugar permanente de depósito sino que puede verse en di-

ferentes puntos del puerto. El puerto de Montevideo no tiene posibilidad de expandir sus instalaciones en tierra pues está muy limitado por la ciudad. A ello se agrega que las áreas contiguas al puerto ocupadas por antiguos depósitos y barracas están siendo objeto de operaciones de renovación urbana. La falta de espacio en el recinto portuario ha determinado la instalación de cuatro plantas de acopio de madera en la zona rural del departamento de Montevideo. Los problemas de acceso y acopio se plantean también con la construcción de plantas de celulosa y de astillado, como se vio en el caso del proyecto de La Paloma.

Otro aspecto sobre el cual impacta la implantación de la forestación es la **movilidad de la población**. En líneas generales se puede decir que la forestación produce decrecimiento poblacional en el área rural y crecimiento en los centros poblados. Sin embargo el fenómeno admite más de una lectura.

La relación entre forestación y movilidad de la población tiene que ver con los requerimientos de mano de obra, considerando esto en dos niveles:

- la mayor o menor capacidad de generación de empleo de la fase primaria (viveros, plantación, podas, raleos, tala) frente a otras actividades agropecuarias;
- la organización de las tareas en

el predio de la plantación.

La forma en que se organiza la explotación no requiere la permanencia de los trabajadores y sus familias en el predio, lo que produce, en primera instancia un desplazamiento de población. En otras palabras, la forestación podría crear igual cantidad de empleos que la ganadería en una determinada zona pero en el nivel del predio requerir menos personal. En este sentido, la cantidad de pobladores permanentes decrece al cambiar el uso del suelo y esas personas (peones y sus familias) que ya no son necesarias se trasladan a los centros poblados (aunque viajen a trabajar al mismo predio). En el análisis de la movilidad debe considerarse también el trabajo generado por los viveros que pueden o no ubicarse en el mismo predio y el hecho de que las necesidades de mano de obra varían en los distintos momentos del ciclo forestal. No debe olvidarse que el proceso de despoblación rural no es un fenómeno nuevo, sino que viene de varias décadas atrás, habiéndose convertido en un rasgo estructural del medio rural uruguayo.

Más allá de estas consideraciones, del análisis de la información censal referente a la migración en el quinquenio anterior al censo de 1996 surge que en áreas intensamente forestadas se observan tanto procesos de aumento como de disminución de la población; se puede concluir que no es posible

determinar un patrón de movilidad poblacional definido asociado con esta actividad (Alvarado, 2002 a).

Asimismo, las grandes obras proyectadas en el departamento de Río Negro permiten prever la afluencia de trabajadores hacia la ciudad de Fray Bentos y sus alrededores, no sólo del interior del departamento sino también desde departamentos vecinos y desde la provincia de Entre Ríos. En consecuencia, con el inminente comienzo de las obras de construcción de las plantas de celulosa, se está verificando en la ciudad de Fray Bentos un proceso de valorización inmobiliaria y reactivación de la industria de la construcción.

Balance y reflexiones finales

Los objetivos del Plan Forestal: un balance

A efectos de realizar un balance de la aplicación de la política forestal se puede partir de los principales objetivos planteados en el Plan Nacional de Forestación (decreto 450/88).

Dos de esos objetivos se pueden considerar cumplidos: crecimiento sostenido del sector y generación de divisas a través de las exportaciones.

El crecimiento ha sido sostenido tanto en cantidad de hectáreas plantadas como en inversión realizada. También se han generado divisas lo cual puede ser apreciado a través de los volúmenes de las exportaciones (**cuadro Nº 1**).

Cuadro Nº 1. Los números de la forestación

	1988	2003
Hectáreas plantadas	31.200	670.042
	1988	2004
Exportaciones (millones de dólares)	13	200
	1992	2002
Participación en el total de exportaciones	1,95%	5,65%
	(1987-2003)	
Inversión	999,5 millones US\$	
	Subsidios	BROU¹
Aportes estatales	31 millones	40 millones

¹ Banco de la República Oriental del Uruguay

Fuentes: Anuario Estadístico 2004-Dirección forestal, Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI, Boletín Dinacyt Nº 253, marzo de 2005.

Otros objetivos pueden considerarse no cumplidos:

- No se ha cubierto el déficit de productos forestales ni se ha logrado el autoabastecimiento ya que se siguen importando ciertos tipos de maderas y papeles; esto sucede porque no ha existido un plan de desarrollo industrial para el sector, quedando este desarrollo librado al interés del sector privado.
- Tampoco se ha cumplido el objetivo más mencionado durante la discusión parlamentaria de la ley forestal: “ahorrar divisas a través de la sustitución de combustibles importados”. Este objetivo, planteado en un momento en que todavía estaban presentes las dificultades producidas por la crisis petrolera de los años ‘70, fue olvidado en la implementación del plan forestal durante la década de los ‘90. Hoy, en vista del constante aumento del precio del petróleo y de la crisis energética regional, este aspecto recupera su importancia potencial ya que el uso de la leña podría convertirse en una fuente alternativa y relativamente “limpia”, como sucedió en el Uruguay durante la crisis energética de los ‘70.
- Un tercer objetivo no cumplido fue la creación de empleo. Como se mencionó el balance es francamente negativo, ya que el número de empleos fue limitado, el nivel salarial muy bajo y las condiciones de trabajo deficientes.

Por último, podemos mencionar dos objetivos parcialmente cumplidos:

- “Contribuir al uso racional del suelo a través de la incorporación de la forestación en áreas de baja productividad agrícola-ganadera y buena productividad forestal”. Si bien esto ha sido cierto para algunas zonas poco productivas como las serranías de Lavalleja, también es cierto que la forestación ha avanzado hacia zonas de mayor productividad agrícola; sustituyendo además actividades creadoras de mayor cantidad de empleos.
- “Estimular la descentralización de la actividad industrial”. Las inversiones proyectadas por Botnia y Ence en el Litoral (departamentos de Río Negro y Paysandú), por Weyerhaeuser en el norte (Tacuarembó y Rivera) y por otros grupos en el este (Rocha y Treinta y Tres) estarían contribuyendo a romper el patrón de localización industrial concentrado en el área metropolitana de Montevideo. (ver cuadro Grandes Inversiones)

Sin embargo, esta aparente “descentralización” requiere un análisis más detallado.

La inversión forestal: des-concentración espacial y concentración de capital

En el Capítulo IX del Plan Nacional de Forestación, se afirma que la forestación “(...) contribuye a solucionar problemas de centralis-

mo y crea desarrollo regional especialmente en las zonas con mayor pobreza de infraestructura". Ello no se ha verificado, al menos en la etapa de plantación. Las fluctuaciones en el precio internacional de la pulpa y su tendencia a la baja en los últimos tiempos sólo aseguran la colocación de la madera a quienes producen en gran escala. Si se agregan las exigencias cada vez mayores en materia de certificaciones de calidad, se dificulta el acceso a los mercados a los pequeños productores independientes. Numerosos productores venden su madera a algunas de las tres empresas exportadoras que manejan grandes volúmenes de madera: Eufores, Tile (Grupo Otegui) y Foresur.

El principal exportador y comprador en el mercado interno es la empresa española Eufores. Al ser una empresa integrada verticalmente, no sólo tiene asegurada la colocación de su madera sino que demanda una mayor cantidad adquiriendo la madera de los pequeños productores independientes. Las diferencias de escala son tan grandes que Eufores puede fijar los precios según su voluntad, es así que está pagando la madera hasta un 30% menos que el precio internacional. Eso hace que la rentabilidad de los pequeños productores sea mínima, dependiendo además de la distancia a los puertos.

El modelo de desarrollo forestal instalado favorece los procesos

de acumulación y concentración de la riqueza (efectos contrarios a los buscados inicialmente) en tres o cuatro grupos económicos integrados verticalmente y espacialmente concentrados: Ence y Botnia en el Litoral, Weyerhaeuser en el Norte y Grupo Forestal) en el Sur y Este del país (ver Mapa).

Al considerar los beneficios aprobados para los emprendimientos industriales y logísticos, llevados a su máxima expresión en las Zonas Francas otorgadas a los grupos Ence y Botnia, parece dudoso que estas inversiones dejen alguna ganancia al país. Si se toma en cuenta que los insumos y maquinaria llegarán desde el país de origen sin pagar impuestos, los montos de las inversiones publicitados se reducen a la tercera parte. Los beneficiados son -más allá de estos grupos económicos- las empresas vinculadas con el transporte y la construcción, que durante algunos años se verá dinamizada (Alvarado, 2005).

Se corre el riesgo de consolidar una economía de enclave en el Litoral, con el peligro consiguiente de la monoproducción. La demanda permanente de madera por estas dos fábricas de celulosa plantea la posibilidad de que los productores abandonen su tradicional actividad agrícola para asegurarse una colocación segura de su producción. El área de abastecimiento inmediato de madera para estas empresas (Río Negro, Paysandú, Soriano) es además el

área de mejores suelos del país para cereales y oleaginosas.

Cabe preguntarse cuál será el “rol dinamizador” de esas empresas en su área de influencia, más allá de los empleos directos, teniendo en cuenta que sólo utilizarán un mínimo de insumos locales.

Además la presencia dominante de las grandes empresas en algunas zonas termina por fijar las reglas del juego no sólo en el precio de la madera sino también en materia de salarios, precios de insumos y costo de la tierra. Estos factores conducen a una progresiva desaparición de los productores independientes o a su relegamiento a un papel de abastecedor de las grandes forestadoras.

Perspectivas

La llegada al poder del Frente Amplio podía hacer prever un cambio radical en la orientación de la política para el sector maderero; sin embargo hasta el momento los cambios han sido limitados.

Al igual que otros países periféricos, el Uruguay enfrenta una disyuntiva entre la defensa de los recursos naturales y la calidad ambiental por un lado, y la posibilidad de captar inversiones por otro, dos aspectos que difícilmente marchen en el mismo sentido.

El nuevo gobierno no ha dado marcha atrás con la política de estímulo a las grandes inversiones vinculadas con el sector, sino que

además las ha respaldado explícitamente, como se ha visto en el desarrollo del conflicto internacional por las plantas de celulosa.

En otros aspectos el accionar del gobierno de Tabaré Vázquez ha sido más consecuente con su prédica anterior, por ejemplo con la eliminación inmediata de los subsidios a las plantaciones y con medidas que apuntan a proteger al trabajador forestal.

Entre ellas se encuentran las siguientes:

- presentación de un proyecto de ley por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece la subsidiariedad de la responsabilidad en las tercerizaciones, de modo que la violación de la legislación laboral por una contratista sea también responsabilidad de la gran empresa que la contrata;
- la instalación por primera vez del Consejo de Salarios para el sector forestal (comisiones paritarias);

En un trabajo anterior nos preguntábamos: “¿En qué medida podrá el gobierno de izquierda orientar este proceso de desarrollo forestal transformando esta economía de enclaves con carácter puramente extractivo, en un modelo productivo que implique un proceso de desarrollo real, con generación de empleo genuino, ingresos fiscales para el Estado y ambientalmente sustentable?” (Alvarado, 2005). En este sentido, la nueva gestión de la Dirección Fo-

restal estudia cómo generar un modelo integrado de producción forestal, sea con el silvopastoreo o con el desarrollo de *clusters* industriales en el sector del aserrado.

¿Cómo lograr que los beneficios del desarrollo forestal no lleguen solamente a las empresas, asegurando un cierto grado de redistribución de la riqueza generada en las zonas productoras?

En ese sentido debemos reconocer que las medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales resultan auspiciosas.

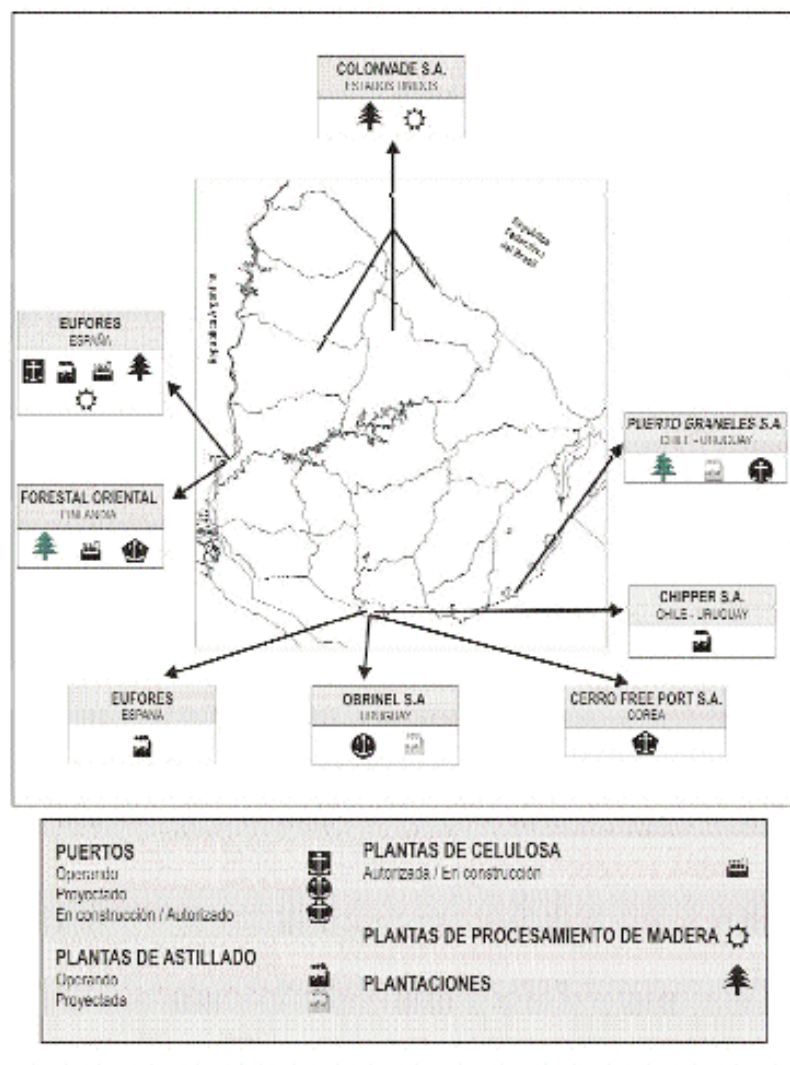
Igualmente surgen otros interrogantes cuya respuesta es difícil aventurar:

¿Cómo compatibilizar el desarrollo industrial vinculado con el sector forestal con la calidad ambiental? Si bien hubiera sido deseable que la fase de transformación de la madera se orientase hacia el procesamiento con fines no celulósicos, el propio mercado marcó un camino que resulta difícil desandar (por las especies plantadas y por la propia forma de manejo de ciertos bosques que ya no puede volver atrás). Los bosques están allí y es necesario agregarles valor para recuperar la

inversión que el Estado ha hecho al implementar esta política.

El gobierno se ha comprometido a controlar el cumplimiento de la normativa ambiental que aplicará además los parámetros exigidos por la Unión Europea. La construcción de las plantas de celulosa llevará unos cuatro años; en ese lapso se pueden formar técnicos que puedan luego ejercer el control. Pero más allá de la buena voluntad, ¿tendrán los gobiernos uruguayos poder suficiente para cerrar una de estas plantas si produjeran contaminación? ¿Cuánto pesaría en ese caso la consiguiente pérdida de empleos? ¿Qué consecuencias para la imagen del país en materia de seguridad jurídica tendría el eventual cierre de una planta si ello se considerase una violación a los acuerdos de protección de inversiones? Si de las millonarias cifras prometidas sólo se invertirá en el país la tercera parte, si es discutible la cantidad de empleos a crearse, ¿vale la pena arriesgar la calidad ambiental de la microrregión con las consiguientes pérdidas económicas en recursos naturales valiosos como el agua y el suelo? (**gráfico N° 1**).

Gráfico N° 1. Localización de grandes inversiones



GRANDES INVERSIONES

Depto/Lugar	Características del emprendimiento	Empresa	Origen	Costo U\$S	situación
Río Negro	Terminal portuaria y logística	Eufores	España		
M Bopiciuá	Planta de chipeado	Eufores	España	35 millones	operando
	Planta de celulosa	Eufores	España	500 millones	autorizada
Young	Parque Industrial				
	Terminal Logística	s/d	s/d	20 millones	proyectado
Menafra	Aseadero	Eufores	España	3 millones	operando
Fray Bentos	Planta de celulosa	Botnia S.A.	Finlandia	933 millones	en construcción
	Puerto de barcazas	Botnia S.A.	Finlandia	12 millones	autorizado
Montevideo					
P. de Sayago	Terminal portuaria	CemoFreePort	Grupo Moon	200 millones	proyectado
Puerto Montevideo	Terminal portuaria	ANP	Estado (Urug)	70 millones	proyectado
Peñarol	Planta de chipeado	Eufores	España	6 millones	operando
La Tablada	Planta de chipeado	Chipper S.A.	Chile-Uruguay	s/d	operando
Puerto Montevideo	Terminal portuaria	Obitnel S.A.	Uruguay	23 millones	proyectado
Colonía	Planta de chipeado				
N. Palmira	Terminal portuaria	Kambara	Japón	50 millones	proyectado
Treinta y Tres					
Charqueada	Terminal portuaria y logística	Timosur S.A.	Brasil (?)	s/d	proyectado
	Planta de chipeado				
Paysandú y Tacuarembó	5 Aseaderos	Colonvade S.A.	EUA	360 millones	proyectado
	Planta laminado de madera	Los Piques S.A.	EUA	35 millones	proyectado
	Panetes madera terciada	Unupanel S.A.	Chile	56 millones	proyectado
Rocha					
La Paloma	Terminal portuaria	Puerto Graneles	Chile-Uruguay	30 millones	proyectado
	Planta de chipeado				

Bibliografía

- Alvarado, Raquel (2005): "Política forestal, inversión trasnacional y transformaciones territoriales en Uruguay", en *Annais do X Encontro de Geógrafos da América Latina*, Sao Paulo.
- Alvarado, Raquel (2002): *Política forestal en Uruguay (1988-2000): caracterización y efectos territoriales*. Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. (inédito)
- Carnelli, Santiago et al. (1998): *Ley de Inversiones. Enfoques multidisciplinarios*. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo.
- Carrere, Ricardo & Lohmann, Larry (1997).- *El papel del sur: Plantaciones forestales en la estrategia papelera internacional*. México, RMALC/ITEM
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General Forestal (2004): *Anuario Estadístico*, Año 4, N° 3, diciembre 2004, Montevideo.
- Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005): *Noticias*, Año VIII, Edición N° 253, Montevideo.
- González Posse, Ernesto y Barrenechea, Pedro,- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección de Recursos Renovables, Dirección Forestal (1996): *Síntesis de los Estudios sobre los Impactos Socioeconómicos de la Forestación en Uruguay* (inédito)
- Pérez Arrarte, Carlos (1997): *Impactos ambientales y económicos de las plantaciones forestales*. Serie Seminarios y Talleres N° 102, Centro interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay. Presentado en el Seminario sobre "Forestación e Impacto Ambiental" organizado por el Centro Agronómico de Rocha (Rocha, setiembre de 1997)
- Ramos, Alvaro y Cabrera, Rafael (2001): *Evaluación del Impacto del Desarrollo Forestal en Uruguay*, Resumen Ejecutivo. Sociedad de Productores Forestales, Montevideo.
- República Oriental del Uruguay, *Registro Nacional de Leyes y Decretos*: Decreto 450/988: Plan Nacional de Forestación, julio 1988; Ley 16002, art.45, art. 90 y art. 91, noviembre 1988; Ley 15939: Ley Forestal, diciembre 1987.
- Stolovich, Luis (1995): *Forestación: ¿un negocio para quién?*, CIEDUR, Montevideo
- Vázquez Platero, Roberto (1996): *Evaluación de Impacto del Desarrollo Forestal en Uruguay*. Sociedad de Productores Forestales, Montevideo.

Refundar las Naciones Unidas*

Hugo Chávez Frías

Propósito desvirtuado

El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas, que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida. Cinco años después de la Cumbre del Milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas.

Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual

la meta se lograría en el año 2215, ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente. Habíamos proclamado la aspiración de lograr en 2015 la enseñanza primaria universal. Al ritmo actual la meta se alcanzará después del año 2100, preparémonos pues para celebrarlo.

Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión: las Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se trata simplemente de proceder a una reforma, el siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad. Esas transformaciones, a las que desde Venezue-

* Discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Sexagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Nueva York, jueves 15 de septiembre de 2005. Los títulos y subtítulos son de **RE**.

la nos referimos, al mundo, tienen para nosotros, desde nuestro punto de vista dos tiempos: el inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía; el primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema, no le rehuimos, y traemos, incluso, propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la necesidad extrema, necesita -además de raíces- alas para volar.

Necesitamos alas para volar, sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema sino como un reto, podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos, complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional, ni una nube radioactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales.

Mientras avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los pueblos, hay cuatro reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta Asamblea, la primera, la expansión del

Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata -seguimos diciéndolo desde hace seis años desde Venezuela- la supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia. Y en cuarto lugar el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva, debe ser consolidado. La gravedad de los problemas convoca a transformaciones profundas, las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los pueblos del mundo, más allá de las reformas reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones Unidas, y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas: "O inventamos o erramos".

En la reunión de enero pasado de este año 2005 estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre; diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de Estados Unidos

si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país. Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes, los pueblos del mundo también: nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina, pero quizá tenga aristas que hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica, que escribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades.

Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las Naciones del mundo,

pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el Sur, "°El Sur también existe!", dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya, o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice al mundo, nuestro Continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825.

Cosas que quedan en el camino

Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes en el mundo, en la que se combinan peligrosamente un imparable incremento del consumo energético, la incapacidad de aumentar la oferta de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en las reservas probadas de combustibles fósiles. Comienza a agotarse el petróleo. Para 2020 la demanda diaria de petróleo será de 120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se consumiría en 20 años una cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad hasta el momento, lo cual significará, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como se sabe incrementa cada día la temperatura de nuestro planeta. Katrina ha sido un doloroso

so ejemplo de las consecuencias que puede traer al hombre ignorar estas realidades. El calentamiento de los océanos es, a su vez, el factor fundamental detrás del demoledor incremento en la fuerza de los huracanes que hemos visto en los últimos años. Valga la ocasión para transmitir una vez más nuestro dolor y nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo hermano de los pueblos de América también, y de los pueblos del mundo.

Es práctica y éticamente inadmisiblemente sacrificar a la especie humana invocando de manera demencial la vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicida insistir en diseminarlo e imponerlo como remedio infalible para los males de los cuales es, precisamente, el principal causante.

Hace poco el señor presidente de Estados Unidos asistió a una reunión de la Organización de Estados Americanos a proponerle a la América latina y al Caribe incrementar las políticas de mercado, la apertura de mercado, es decir, el neoliberalismo, cuando esa es precisamente la causa fundamental de los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos: el capitalismo neoliberal, el Consenso de Washington lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos de este continente.

Ahora más que nunca necesitamos, señor Presidente, un nuevo

orden internacional, recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto período extraordinario de sesiones, celebrado en 1974, algunos de quienes están aquí no habían nacido, seguramente, o estaban muy pequeños.

En 1974, hace 31 años adoptó la declaración y el programa de acción sobre un nuevo Orden Económico Internacional, junto con el plan de acción la Asamblea General adoptó el 14 de diciembre de aquel año 1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que concretó el Nuevo Orden Económico Internacional, siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Esto era cuando se votaba en Naciones Unidas, porque ahora aquí no se vota, ahora aquí se aprueban documentos como este documento que yo denuncié a nombre de Venezuela, como írrito, nulo e ilegal, se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas, ¡no es válido este documento!, habrá que discutir este documento, el Gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas, estas cosas son para discutir las y para eso hago un llamado muy respetuoso, a mis colegas los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno.

Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno, yo sacaba el documento, este docu-

mento fue entregado cinco minutos antes, ¡sólo en inglés!, a nuestros delegados y se aprobó con un martillazo dictatorial, que denunció ante el mundo como ilegal, irrito, nulo e ilegítimo. Oíganme una cosa, señor Presidente, si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos, ¡apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas! Sería lo último: que aceptemos la dictadura aquí en este salón.

Ahora más que nunca -decíamos- requerimos retomar, retomar cosas que se quedaron en el camino, como la propuesta aprobada en esta Asamblea en 1974 de un Nuevo Orden Económico Internacional, para recordar algo, digamos lo siguiente, el Artículo 2 del texto de aquella carta, confirma el derecho de los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materias primas. En su Resolución 3.201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional basado -oiganme bien, os ruego- "en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales,

que corrija las desigualdades y repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las generaciones presentes y futuras, la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido", cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella Resolución histórica de 1974. El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods.

Creo que el presidente de Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me han informado, yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución.*

Intenciones sin voluntad

El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods en 1944, y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento del sistema monetario internacional: sólo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese camino, y nosotros creemos que ese era, y ese sigue siendo el camino. Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico internacional, pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional,

* Respuesta del presidente Chávez a asistentes de la ONU que le indicaban que estaba excedido en el tiempo de su alocución (Nota de **RE**).

no permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del Derecho Internacional para dar cabida a doctrinas como la "Guerra Preventiva", ¡vaya que nos amenazan con la guerra preventiva!, y la llamada ahora "Responsabilidad de Proteger", pero hay que preguntarse quién nos va a proteger, cómo nos van a proteger. Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de Estados Unidos, demostrado ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina: no tiene gobierno que lo proteja de los desastres anunciados de la naturaleza, si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros; estos son conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos, el respeto pleno a los principios del Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor Presidente, la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy, y la base del nuevo orden que propugnamos.

Siete años de revolución bolivariana

Permítanme una vez más, para ir concluyendo, citar a Simón Bolívar, nuestro Libertador, cuando habla de la integración del mundo, del Parlamento Mundial, de un Congreso de parlamentarios, ha-

ce falta retomar muchas propuestas como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica, en 1815, ya lo citaba, leo una frase de su Carta de Jamaica: "Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, de los reinos, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración." Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamente, al terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones militares injustificadas y violatorias del Derecho Internacional, que se han entronizado como doctrina después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha y verdadera cooperación, y el fin de los dobles raseros que algunos países del Norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo. Señor Presidente: en apenas 7 años de Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano puede exhibir importantes conquistas sociales y económicas.

Un millón 406 mil venezolanos aprendieron a leer y a escribir en año y medio, nosotros somos 25 millones aproximadamente y, en escasas semanas el país, dentro de pocos días, podrá declararse libre de analfabetismo, y tres mi-

llones de venezolanos antes excluidos por causa de la pobreza, fueron incorporados a la educación primaria, secundaria y universitaria.

Diecisiete millones de venezolanos y venezolanas -casi el 70% de la población- reciben, por primera vez en la historia, asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos y, en unos pocos años, todos los venezolanos tendrán acceso gratuito a una atención médica por excelencia.

Se suministran hoy más de 1 millón 700 mil toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de personas, casi la mitad de los venezolanos, un millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados.

Señor Presidente, se han creado más de 700 mil puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo en 9 puntos porcentuales -todo esto en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe militar facturado en Washington, y un golpe petrolero facturado

también en Washington- pese a las conspiraciones, a las calumnias del poder mediático, y la permanente amenaza del imperio y sus aliados, que hasta estimula el magnicidio. El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con un reverendo llamado Pat Robertson, muy amigo de la Casa Blanca: pidió públicamente ante el mundo mi asesinato y anda libre, ¡ese es un delito internacional!, ¡terrorismo internacional!

Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo.

Reafirmamos aquí en este salón nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra Patria y guía de nuestra Revolución, juró no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad.

Señores, muchísimas gracias.

Integración

El acuerdo EUA-RD CAFTA ¿rodeando al Mercosur?*

*José Carlos Núñez***

El 10 de mayo de 2005 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, declaró que conseguir la aprobación parlamentaria del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana es la "primera prioridad" de su gobierno para este año en lo que hace a política comercial, por encima incluso de la culminación de la agenda de la ronda de Doha de la OMC.

Este tratado, conocido como RD-CAFTA*** plantea la conformación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Su concreción no sería un hecho novedoso en cuanto a la larga relación económica que estos países han mantenido entre sí, pero plantearía una relación más profunda que tiene que ver más con los lineamientos de ALCA que con los acuerdos tradicionales.

* Documento elaborado para la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA)

** Licenciado en Economía. Director del Instituto de Investigaciones del Comercio Exterior AIERA

*** CAFTA: Central America Free Trade Agreement

Algunos antecedentes

El Mercado Común Centroamericano (MCCA), constituido por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es una de las instituciones de integración más antiguas de la Región. El Tratado de Managua -que dio lugar a su creación- fue firmado en 1960. A pesar de esta larga continuidad jurídica, el proceso integrador tuvo fuertes altibajos en el marco de las tensiones políticas que implicaba para la región la vigencia de la guerra fría. Incluso llegaron a producirse conflictos armados entre sus miembros. Esta situación cambió drásticamente a partir de 1990, cuando se planteó

en toda la región una nueva etapa integradora -que en nuestro país se plasmó en el MERCOSUR- a través de la firma de acuerdos inscriptos en lo que se conocería como "Regionalismo Abierto".

En el marco descrito, justamente en 1990, los presidentes centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y reactivar este proceso de integración, así como sus organismos. En abril de 1993 se llegó a un acuerdo incluyendo libre comercio, liberalización de capitales y libre movilidad de personas. Nicaragua obtuvo en esta oportunidad un tratamiento diferencial. A partir de 1995 todos los miembros del MCCA pertenecen a la OMC.

Gráfico N° 1. Países participantes en el acuerdo con Estados Unidos

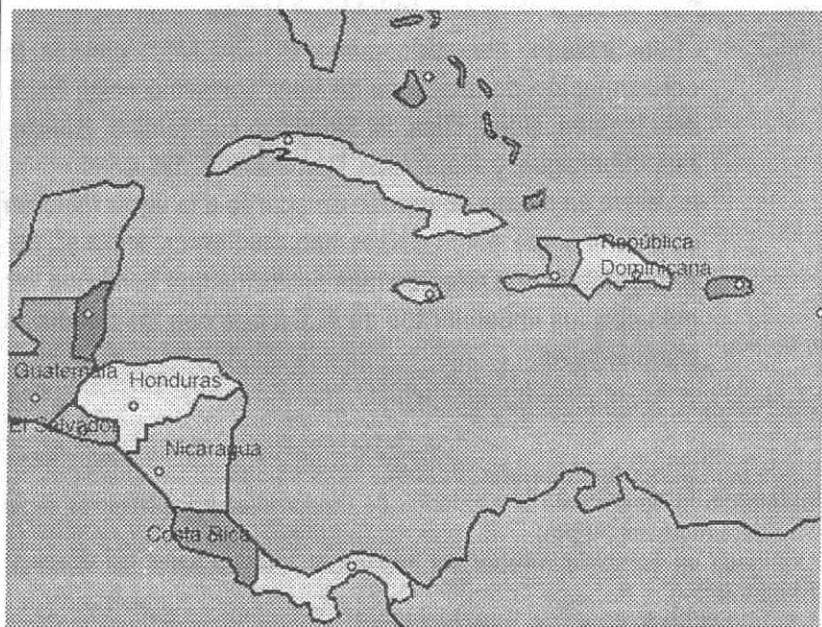
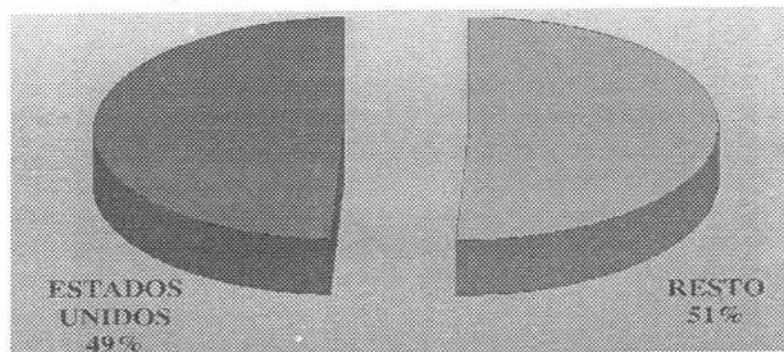


Gráfico N° 2. Participación de Estados Unidos como origen de importaciones de la región



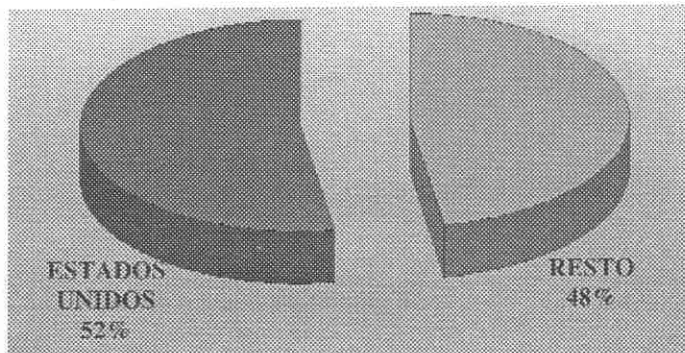
En 1997 se acordó una reforma que contempló el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, la reforma de la Corte Centroamericana de Justicia y la unificación de las secretarías en una sola Secretaría General con sede única en San Salvador, El Salvador. Las principales instituciones del MC-CA son el Consejo de Ministros de Integración, el Comité Ejecutivo de Integración Económica (CEIE) y la Secretaría de Integración Económica Centro Americana (SIECA), aunque las reuniones periódicas en nivel presidencial tienen una fuerte gravitación en la orientación del proceso de integración. Hay que destacar, entre los organismos de apoyo, por su tradición y la solidez de su funcionamiento, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución de la cual -entre otros países de extrazona- la Argentina es miembro.

La ICC

En 1984, Estados Unidos puso en ejecución la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) mediante la cual concedía un tratamiento arancelario especial a favor de los productos provenientes de 24 países de la región de Centroamérica y el Caribe. Este tratamiento, que originalmente tendría una duración de 12 años, consistía en el ingreso de los productos procedentes de la región sin pago de aranceles. Estas preferencias no eran recíprocas, de modo que los países beneficiarios no estaban obligados a conceder reducciones equivalentes en sus derechos aduaneros.

Aunque el sistema se aplicaba en términos generales a todo el universo arancelario, existía una serie de productos que estaban excluidos del acceso libre de derechos: textiles y confecciones, atún enlatado, calzado, caucho y plástico, manufacturas y acceso-

Gráfico N° 3. Participación de Estados Unidos como destino de exportaciones de la región



rios de cuero, relojes y sus partes, etanol, azúcar y carne bovina. Sin embargo, las exportaciones de estos países podían beneficiarse del "Régimen 9802.00.80" por el cual los derechos de importación de Estados Unidos se calculan únicamente sobre el valor agregado en el extranjero y no sobre los componentes estadounidenses que se hubieran utilizado en el ensamble. De este modo, el arancel aplicable por ejemplo, a las confecciones se reducía de 22 a 6% en promedio. En 1986, estas producciones se vieron beneficiadas por una ampliación de las cuotas de ingreso a su mercado que -en virtud del Acuerdo Multifibras del GATT- otorgaba Estados Unidos. Está claro que este mecanismo respondió fundamentalmente a una estrategia de la industria de confecciones de este país que comenzó a desplazar a la región aquellas etapas de la producción donde la intensividad de mano de obra implicaba una fuerte pérdida

de competitividad frente a la producción asiática. En 1990, los beneficios otorgados a través de la ICC fueron otorgados con carácter permanente.

La puesta en marcha del NAFTA -el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México- significó un golpe para gran parte de la producción beneficiada por la ICC, dado que numerosas líneas de confección se trasladaron a México que, a partir de dicho acuerdo, disfrutaba de condiciones aún más favorables para el acceso al mercado estadounidense. Inmediatamente, los países centroamericanos y del Caribe iniciaron negociaciones solicitando igualdad de trato con la producción mexicana. Debe notarse que su posición no era sólida desde que México obtenía sus beneficios en el marco de un tratado de libre comercio que implicaba realizar concesiones, mientras que ICC tenía carácter unilateral. Sin embargo, nuevamente intereses

estratégicos más amplios de los Estados Unidos volvieron a beneficiar a esta región: lanzada la Iniciativa para las Américas que planteaba la conformación de una zona de libre comercio hemisférica -ALCA- que entraría en vigencia durante 2005, no parecía un exceso otorgar a los beneficiarios de ICC el mismo trato que a la producción mexicana como efectivamente se hizo a partir de mayo de 2000. **Estos beneficios regirán hasta septiembre de 2008 o hasta el momento en que entre en vigor el ALCA.** Es a través de esta secuencia de negociaciones como puede entenderse la lógica integral de la estrategia de los socios menores del acuerdo RD-CAFTA, que apuntan fundamentalmente a preservar los beneficios para su industria de confecciones.

Estadísticas comerciales

En su conjunto los países RD-CAFTA exportan por unos 16 mil

millones de dólares e importan por 28 mil millones. El saldo del comercio es deficitario y hay una fuerte dependencia de los Estados Unidos ya sea como destino de exportaciones o como origen de importaciones (**cuadros N° 1 y N° 2**).

Los países con mejor desempeño exportador son la República Dominicana y Costa Rica, que están en el orden de los 5 mil millones de dólares. La República Dominicana es el único país que logra mantener un comercio más o menos equilibrado en el periodo bajo análisis y es claramente el país con mayor importancia económica dentro de los socios menores del acuerdo (**cuadro N° 3**).

En el comercio de la región con Estados Unidos el patrón se repite: la República Dominicana y Costa Rica son los dos países con mejor desempeño, con una participación mucho más destacada del primero, que lleva a cabo el cincuenta por ciento del comercio

Cuadro N° 1.

Países	EXPORTACIONES TOTALES (US\$ millones)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Costa Rica	3.893	5.097	6.316	5.529	4.716	4.950	5.800
El Salvador	1.371	1.256	1.177	1.332	1.213	1.238	1.255
Guatemala	2.344	2.582	2.490	2.699	2.413	2.462	2.635
Honduras	1.446	1.533	1.164	1.322	1.311	962	892
Nicaragua	667	553	509	629	532	559	605
Rep. Dominicana	4.614	4.961	5.137	5.737	5.276	5.165	5.276
TOTAL	14.334	16.001	16.764	17.248	15.462	15.336	16.564

Cuadro N° 2

Países	IMPORTACIONES TOTALES (US\$ millones)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Costa Rica	4.512	5.893	6.012	5.229	6.274	6.896	7.389
El Salvador	2.981	3.121	3.140	3.795	3.866	3.909	4.382
Guatemala	3.852	4.651	4.560	5.171	5.607	6.304	6.722
Honduras	2.149	2.535	2.676	2.885	2.997	3.106	3.316
Nicaragua	1.470	1.534	1.723	1.721	1.775	1.788	1.906
Rep. Dominicana	4.192	4.897	5.207	6.416	5.953	6.237	5.096
TOTAL	19.165	22.631	23.318	25.217	26.471	28.241	28.810

de la región. De este modo, a primera vista podría asociarse un mayor relacionamiento con el mercado estadounidense a un mejor desempeño del sector comercial externo. Este resultado exitoso en primera instancia nada dice acerca de la distribución de los beneficios de ese comercio al interior de la economía, ni sus implicancias en términos de desarrollo y distribución del ingreso, que deberían ser objeto de un estudio más profundo (cuadros N° 4 y N° 5).

En lo que hace a la dirección del comercio, puede apreciarse que tanto para la región como individualmente, con escasas excepciones Estados Unidos es el principal proveedor y cliente de estos países. Esto condice con el esquema implementado a partir de ICC: partes y piezas de origen estadounidense llegan a la región para ser ensambladas o terminadas y regresan nuevamente a ese mercado. Puede notarse también que los dos países con mejor desempeño (Costa Rica y la

Cuadro N° 3.

Países	SALDO DEL INTERCAMBIO (US\$ millones)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Costa Rica	-819	-796	304	300	-1.558	-1.946	-1.588
El Salvador	-1.609	-1.865	-1.963	-2.462	-2.653	-2.671	-3.127
Guatemala	-1.508	-2.069	-2.100	-2.472	-3.194	-3.842	-4.087
Honduras	-703	-1.002	-1.512	-1.563	-1.686	-2.144	-2.324
Nicaragua	-803	-981	-1.214	-1.091	-1.243	-1.230	-1.300
Rep. Dominicana	422	84	-70	-679	-677	-1.072	180
TOTAL	-4.821	-6.530	-6.555	-7.969	-11.010	-12.906	-12.245

Cuadro N° 4. Comercio con Estados Unidos

PAISES	AÑOS							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EXPORTACIONES (US\$ millones)								
Total Exportaciones	8.987	8.448	8.832	9.302	9.328	8.148	8.144	8.676
Costa Rica	1.402	1.778	2.100	3.100	2.723	2.187	2.363	2.676
El Salvador	190	265	263	243	311	223	249	240
Guatemala	744	840	837	836	971	843	725	769
Honduras	696	939	894	854	701	771	445	412
Nicaragua	201	300	207	180	238	141	202	206
Rep. Dominicana	3.575	4.327	4.441	4.287	4.383	4.163	4.169	4.455
IMPORTACIONES (US\$ millones)								
Total Importaciones	8.852	10.542	11.978	11.780	12.149	12.663	13.598	14.128
Costa Rica	1.905	2.119	3.138	2.858	2.553	3.261	3.571	3.664
El Salvador	1.055	1.212	1.185	1.155	1.299	1.302	1.295	1.488
Guatemala	1.380	1.585	1.931	1.851	2.070	1.954	2.806	2.941
Honduras	902	1.157	1.309	1.248	1.338	1.282	1.196	1.323
Nicaragua	362	545	482	566	417	477	481	506
Rep. Dominicana	3.191	3.924	3.944	4.101	4.473	4.397	4.250	4.205
SALDO (US\$ millones)								
Saldo de la Balanza	-4.865	-2.094	-3.138	-2.478	-2.821	-4.514	-5.454	-5.451
Costa Rica	-471	-342	-938	242	170	-1.073	-1.217	-1.889
El Salvador	-865	-947	-922	-912	-988	-1.079	-1.046	-1.248
Guatemala	-836	-746	-1.093	-1.013	-1.099	-1.321	-2.081	-2.153
Honduras	-206	-218	-416	-593	-636	-491	-750	-911
Nicaragua	-71	-245	-299	-387	-179	-336	-276	-300
Rep. Dominicana	385	403	497	186	-90	-214	-87	250

Fuente: Elaborado por IICE sobre SIECA, FTA y USTR

República Dominicana) han conseguido diversificar los destinos de sus exportaciones saliendo de lo que es exclusivamente la re-

gión. La presencia de importaciones desde el Japón en estos dos casos sugiere que estos destinos pueden ser utilizados también

Cuadro N° 5. Participación de Estados Unidos en el comercio total

PAISES	AÑOS							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EXPORTACIONES (US\$ millones)								
Total Exportaciones	13.258	14.334	16.081	16.764	17.248	15.462	15.334	16.564
Total Exportaciones a USA	8.987	8.448	8.832	9.302	9.328	8.148	8.144	8.676
% de Part. USA sobre Total	53%	59%	55%	55%	54%	53%	53%	52%
IMPORTACIONES (US\$ millones)								
Total Importaciones	19.866	19.155	22.631	23.318	25.217	26.471	28.241	28.810
Total Importaciones de USA	8.852	10.542	11.978	11.780	12.149	12.663	13.598	14.128
% de Part. USA sobre Total	45%	55%	53%	51%	48%	48%	48%	49%
SALDO (US\$ millones)								
Total Saldo Balanza	-6.608	-4.821	-6.639	-6.555	-7.969	-11.010	-12.908	-12.246
Comercial	-6.608	-4.821	-6.639	-6.555	-7.969	-11.010	-12.908	-12.246
Saldo Balanza Comercial con Estados Unidos de América	-1.865	-2.094	-3.138	-2.478	-2.821	-4.514	-5.454	-5.451

Fuente: Elaborado por IICE sobre SIECA, FTA y USTR

Cuadro N° 6. Participación de cada país en el comercio con Estados Unidos

PAISES	AÑOS							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EXPORTACIONES								
Total Exportaciones a USA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Costa Rica	21%	21%	25%	33%	29%	27%	29%	30%
El Salvador	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Guatemala	11%	10%	9%	9%	10%	9%	9%	9%
Honduras	10%	11%	10%	7%	5%	9%	5%	5%
Nicaragua	4%	4%	2%	2%	3%	2%	2%	2%
Rep. Dominicana	51%	51%	50%	46%	47%	51%	51%	51%
IMPORTACIONES								
Total Impt. de USA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Costa Rica	22%	29%	26%	24%	21%	26%	25%	25%
El Salvador	12%	11%	10%	10%	11%	10%	10%	11%
Guatemala	16%	15%	16%	16%	17%	15%	21%	21%
Honduras	10%	11%	11%	11%	11%	10%	9%	9%
Nicaragua	4%	5%	4%	5%	3%	4%	4%	4%
Rep. Dominicana	36%	37%	33%	35%	37%	35%	31%	30%

Fuente: Elaborado por IICE sobre SIECA, FTA y USRT

desde el exterior para convertirse en plataformas de acceso con alguna ventaja diferencial en el mercado de Estados Unidos.

En cuanto a la composición del comercio, los principales bienes

de exportación de la región son los productos tropicales (bananas, ananás, café, azúcar) y las exportaciones están fuertemente concentradas en pocos productos, constituyendo un patrón típico

Cuadro N° 7. Principales socios

Costa Rica		El Salvador		Guatemala	
Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones
USA	USA	USA	Guatemala	USA	USA
México	Países Bajos	Guatemala	USA	México	El Salvador
Japón	Guatemala	México	Honduras	El Salvador	Honduras
Venezuela	Malasia	Ecuador	Costa Rica	Panamá	Nicaragua
Colombia	Nicaragua	Costa Rica	Nicaragua	Costa Rica	Costa Rica
Honduras		Nicaragua		Rep. Dominicana	
Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones
USA	USA	USA	USA	USA	USA
Guatemala	El Salvador	Venezuela	El Salvador	Venezuela	Bélgica
México	Guatemala	Costa Rica	Costa Rica	México	Puerto Rico
El Salvador	Alemania	México	Honduras	Japón	Haití
Costa Rica	México	Guatemala	México	España	Corea del Sur

Fuente: IICE

Cuadro N° 8. Costa Rica

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
Semiconductores de óxido metálico	22,84%	Partes de aparatos eléctricos	21,12%
Otros semiconductores	3,39%	Aparatos de medicina	11,52%
Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir	2,74%	Bananas	10,79%
Partes de Circuitos integrados	2,45%	Ananás	4,81%
Aparatos de medicina	2,20%	Café	3,36%
Diésel oil (Gas oil)	1,77%	Prendas de algodón	3,24%
Maíz amarillo	1,72%	Prendas de algodón	2,83%
Partes y accesorios de máquinas eléctricas	1,56%	Fruitas	1,74%
Porotos de soja	1,48%	Partes de Circuitos integrados	1,58%
Prendas de algodón	1,04%	Juntas o empaquetaduras de caucho	1,53%
Total 10 principales productos	41,18%	Total 10 principales productos	61,52%
Resto de productos	58,82%	Resto de productos	38,48%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

Cuadro N° 9. El Salvador

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
Diésel oil (Gas oil)	4,73%	Café oro.	17,72%
Maíz amarillo.	3,28%	Azúcar	7,32%
Las demás gasolinas	3,18%	Ropa de tocador o cocina, tejido tipo toalla	7,06%
Trigo duro.	2,99%	VELAS	4,46%
Aparatos emisores con aparato receptor	2,74%	Camisetas de algodón	4,45%
Harina	2,31%	Lencería de fibras sintéticas o artificiales.	3,88%
Partes y accesorios de aparatos eléctricos	2,18%	Alcohol etílico absoluto.	3,28%
Automóviles hasta 2,000 cm ³ de cilindrada.	2,08%	Papel higiénico.	3,38%
ALGODON SIN CARDAR NI PEÑAR.	1,97%	CERVEZA DE MALTA.	2,14%
Aceites y grasas lubricantes	1,66%	Camarones	2,06%
Total 10 principales productos	27,13%	Total 10 principales productos	54,55%
Resto de productos	72,87%	Resto de productos	45,45%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

Cuadro N° 10. Guatemala

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
Diésel oil (Gas oil)	5,83%	Bananas	26,27%
Las demás gasolinas	4,63%	Petróleo Crudo	21,97%
Aceites de petróleo	3,37%	Café	19,23%
Automóviles de 1500 a 3000 cm ³	2,95%	Azúcar	5,55%
Tela Denim	2,68%	Prendas de algodón	4,68%
Aparatos emisores con aparato receptor	2,59%	Demás plátanos	2,42%
Camiones hasta 5 Tn	2,55%	Prendas de algodón	1,75%
Maíz amarillo	2,25%	Plantas	1,56%
Trigo duro	2,17%	Arvejas	1,21%
Harina	1,64%	Sanitarios de porcelana	1,14%
Total 10 principales productos	38,67%	Total 10 principales productos	85,78%
Resto de productos	61,33%	Resto de productos	14,22%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

Cuadro N° 11. Honduras

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
DESEL OIL (GAS OIL)	6,11%	Bananas	23,57%
FUEL OIL	4,72%	Oro en bruto	8,21%
LAS DEMAS GASOLINAS	2,73%	Frutas	7,36%
HARINA	2,14%	Minerales de metales preciosos	7,14%
MAIZ AMARILLO	2,07%	Langostas	6,49%
Arroz	1,59%	Café	5,33%
Automóviles de 1500 a 3000 cm ³	1,55%	Cigarrillos	2,43%
Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir	1,48%	Azúcar	2,33%
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,32%	Arañas	2,17%
Trigo	1,29%	Prendas de algodón	2,00%
Total 10 principales productos	27,00%	Total 10 principales productos	67,06%
Resto de productos	73,00%	Resto de productos	32,94%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

Cuadro N° 12. Nicaragua

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
TRIGO DURO	3,77%	Café	17,74%
Jeringas incluso con aguja	3,53%	Langostas	15,82%
PETROLEO CRUDO	3,45%	Carne bovina deshuesada	8,79%
Televisores	3,35%	Oro en bruto	8,79%
DESEL OIL (GAS OIL)	2,87%	Camarones cultivados	6,35%
MAIZ AMARILLO	2,79%	Bananas	5,94%
ACEITE EN BRUTO, INCLUIDO DESGOMADO	2,40%	Camarones	5,04%
HARINA DE SOJA	1,89%	Azúcar	3,26%
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,80%	Cigarrillos	2,99%
CONTINGENTE ORIGINARIO DE PAISES MIEM	1,77%	Acete en bruto	2,22%
Total 10 principales productos	27,63%	Total 10 principales productos	76,66%
Resto de productos	72,37%	Resto de productos	23,34%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

Cuadro N° 13. República Dominicana

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	
Aceites de petróleo	29,59%	Fundición, Hierro y acero	4,45%
Automóviles	15,07%	Aceites minerales	3,17%
Partes de aparatos eléctricos	10,71%	Azúcar	1,48%
Partes de aparatos mecánicos	10,64%	Melones	1,23%
Manufacturas de hierro y acero	6,83%	Cigarrillos	0,70%
Papel	3,77%	Cacao	0,57%
Manufacturas de plástico	3,65%	Hortalizas	0,49%
Fundición, hierro y acero	3,04%	Bebidas	0,45%
Cereales	3,00%	Café	0,42%
Medicamentos	2,51%	Manufacturas de plástico	0,36%
Total 10 principales productos	88,81%	Total 10 principales productos	13,32%
Resto de productos	11,19%	Resto de productos	86,68%
TOTAL IMPORTACION 2003	100,00%	TOTAL EXPORTACION 2003	100,00%

Fuente: IICE sobre SIECA

de economías en desarrollo. Nuevamente la República Dominicana muestra un mejor desempeño que se pone de manifiesto por el hecho de que sus principales diez productos de exportación sólo concentran un 13 por ciento de las exportaciones totales. Otro dato a tener en cuenta es que entre los principales productos de importación figuran componentes electrónicos y de algodón que responden al esquema de aprovechamiento de mano de obra barata para el reingreso a los Estados Unidos o su exportación al resto del mundo. De hecho aunque con valores muy reducidos, uno de los principales productos que la Argentina importa desde la región son partes y piezas para aparatos eléctricos y memorias para computadoras.

¿Qué aporta RD-CAFTA para Estados Unidos?

Está claro que para los países centroamericanos, la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos significa mantener la vigencia de un esquema que les ha permitido generar cierto valor agregado local mediante el aprovechamiento de la mano de obra barata. Desde el punto de vista norteamericano, el propósito fundamental no estriba en el flujo comercial que pueda generarse puesto que no es significativo en el marco general del comercio. Tratados como el que nos ocupa

tienen para Estados Unidos el valor de servir como medio para ejercer presión sobre los demás socios involucrados en negociaciones como el ALCA y la OMC. Estos tratados paulatinamente van reformulando los términos de las relaciones entre los países participantes en esas negociaciones. De alguna manera, el techo de las concesiones que Estados Unidos obtiene en cada negociación va elevando el piso de las que reclamará a futuros socios. Si bien el objetivo ideal de Estados Unidos es negociar un ALCA integral que abarque a todos los países del continente americano menos Cuba, un sistema de varios acuerdos bilaterales con países o regiones representa una segunda opción que necesariamente es más costosa para las contrapartes, puesto que como centro de la negociación Estados Unidos tiene acceso a todos los mercados pero no ocurre lo mismo entre México y el Caribe o Canadá y los países andinos.

Por otro lado, para Estados Unidos hay tres sectores económicos de particular importancia en el momento de elegir sus socios y establecer los objetivos de los Tratados de Libre Comercio: algunos están dirigidos a asegurar el suministro de energía (tal el caso de las negociaciones con países andinos) otros a manejar el ingreso de productos agrícolas sensibles y por último, también se pretende facilitar los ajustes estructurales en la industria de los textiles

y el vestido, dada la finalización del sistema de cuotas textiles que a partir de este año dispuso en su momento la Ronda Uruguay. El Tratado RD-CAFTA tiende a garantizar que las confecciones importadas que se comercializan en el mercado estadounidense estén fabricadas, en gran parte, sobre la base de materias primas y componentes de ese origen. Por otro lado, no se trata sólo de un acuerdo de liberación comercial sino que, como viene también siendo la costumbre de EUA, el mismo incluye disposiciones -y seguridades- en temas como inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales, normas ambientales y laborales y todos los temas que resultan de particular interés de los grupos económicos radicados en ese país.

Con respecto a los productos sensibles, cabe citar el ejemplo del azúcar, que se encuentra altamente protegido en EUA: el RD CAFTA dispone la liberalización parcial de las importaciones de este producto por parte de aquel país; pero si bien se permiten incrementos en la cantidad de azúcar libre de aranceles que pueden exportar a EUA los cinco países, aún al final del período de transición habrá aranceles que gravarán a los ingresos que estén por encima de la cuota.

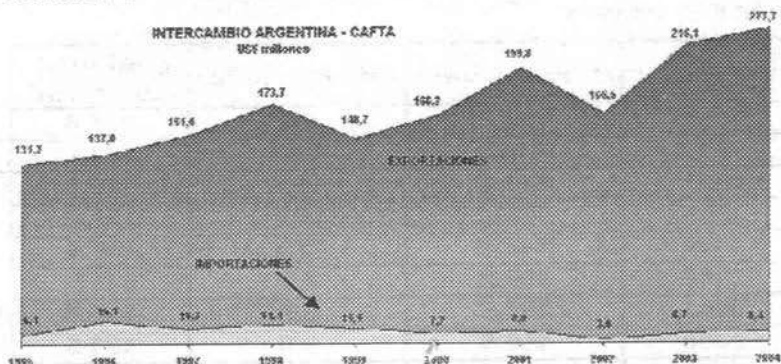
Por el sí o por el no

Para los presidentes de los cinco países centroamericanos y del

Caribe que realizaron una gira por las diez ciudades de Estados Unidos con las que sus países mantuvieron mayor intercambio comercial, el tratado le servirá a la región para multiplicar el volumen de sus exportaciones y en consecuencia generar fuentes de empleo y en definitiva un crecimiento de su PBI. Para el presidente Bush el CAFTA "...reducirá las barreras en sectores clave como los textiles. Ello pondrá a los países del CAFTA y los Estados Unidos en una mejor posición para competir con los productores de bajos costos de Asia." También señaló que sus futuros socios "son pequeñas naciones, pero están haciendo compromisos grandes y valientes y requieren de un continuo apoyo en su camino hacia la apertura y responsabilidad gubernamental" para terminar destacando la importancia geopolítica de un acuerdo que "significará estabilidad y seguridad que sólo pueden provenir de la libertad". Aquí aparece la última dimensión del acuerdo, que no es otra que la de sumar un aporte al aislamiento de Cuba y marcar la diferencia en un momento en que Estados Unidos pretende dividir al mundo entre sus amigos y "el eje del mal". Desde ese punto de vista, una rápida aprobación parlamentaria del acuerdo RD-CAFTA es una prioridad.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Las presiones contrarias que se sucedieron en acuerdos como Nafta o Chile han vuelto a

Gráfico N° 4

INTERCAMBIO ARGENTINA - CAFTA
US\$ millones

aparecer sobre todo por parte de los legisladores que responden a sindicatos, que siempre ven el libre comercio como la posibilidad de perder puestos de trabajo. El lobby azucarero también se opone al acuerdo, con el agravante de que, como varios estados de la unión son productores, la cantidad de legisladores permeable a esos intereses es importante.

En Centroamérica la opinión tampoco es unánime, puesto que al optimismo de las elites gubernamentales se oponen pequeños agricultores y empresarios que destinan su producción al mercado interno y entienden que no podrán competir contra empresas estadounidenses que tienen otra escala productiva y de tecnología. Por otra parte el Tratado plantea también la liberalización del sector servicios donde la diferencia de competitividad es definitiva. El Banco Mundial, expresó en un informe que considera positivo al CAFTA, pero que éste no aumen-

tará por sí mismo el crecimiento ni el desarrollo de los participantes si éstos no llevan a cabo reformas complementarias de sus economías que pasen por mejorar los niveles de educación, la infraestructura y el crédito en las zonas rurales. En definitiva, es posible que este acuerdo genere un aumento de la actividad económica de sus miembros menores, pero no es tan claro que ese crecimiento se traduzca en un mayor bienestar o una mejor distribución del ingreso.

Repercusiones para la Argentina

Nuestro país mantiene un volumen de comercio pequeño con la región y el mismo es absolutamente superavitario. Las exportaciones están en el orden de los doscientos millones de dólares mientras que las importaciones no alcanzan los diez millones (gráfico N° 4).

Cuadro N° 14. Balance comercial Argentina vs. seis "socios menores" de CAFTA (US\$ millones)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial
1995	131,2	6,4	124,8
1996	137,8	16,1	121,7
1997	151,6	11,3	140,3
1998	173,7	14,4	159,4
1999	148,7	11,1	137,6
2000	166,2	7,7	158,5
2001	199,8	8,9	190,9
2002	166,5	3,0	163,5
2003	216,1	6,7	209,4
2004	227,7	8,4	219,3

En la medida en que todos los productos de exportación argentinos son competitivos con los de Estados Unidos, el acuerdo potencialmente podría significar una pérdida de mercados que si bien no sería significativa en el nivel país, seguramente puede serlo en el de sectores o empresas. También hay una pérdida en términos de oportunidades de negocios: estudios realizados por la Cancillería argentina situaban en alrededor de 200 millones de dólares las oportunidades de negocios en el mercado dominicano. Seguramente muchas de esas oportunidades desaparecerán a raíz de la

firma del acuerdo. Debido a que es parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, nuestro país puede mantener alguna ventaja en el desarrollo de obras de infraestructura u otras operaciones que cuenten con financiación de esta institución.

Desde el punto de vista político puede decirse que, paulatinamente, los acuerdos de libre comercio van cercando al MERCOSUR. En el caso de Centroamérica y el Caribe, por volumen de comercio y cercanía geográfica las ventajas estaban a favor de Estados Unidos. Es probable que CARICOM, que agrupa a los pequeños países

Cuadro N° 15. Argentina - RD-CAFTA

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Jeringas	Aceites de Soja y Girasol
Cigarras	Cueros
Partes de aparatos eléctricos	Pañales descartables
Memorias para PC	Hierro para construcción
Prendas de Algodón	Carniones

Fuente: IICE sobre SIECA y ALADI

del Caribe siga el mismo camino. Pero también es cierto que Estados Unidos mantiene negociaciones y fuertes intereses con la Comunidad Andina y el avance de las negociaciones se ha demorado sólo como consecuencia de la situación de Venezuela. De alguna manera los países andinos son la última frontera y avanzar en la

integración sudamericana se transforma paulatinamente en un imperativo estratégico si se pretende negociar con Estados Unidos (y en noviembre se llevará a cabo en Mar del Plata una nueva Cumbre de las Américas) desde una posición medianamente más cómoda.

Bibliografía

- Antena del SELA en Estados Unidos, N^o 71 - 1er. Trimestre 2004; N^o 73 3er. Trimestre 2004.
- Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2004), *El Comercio de la Argentina con República Dominicana: Evolución y oportunidades*, noviembre.
- Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2004), *El Comercio de la Argentina con C4: Evolución y oportunidades*, noviembre.
- Centro de Economía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2004), *El Comercio de la Argentina con Costa Rica: Evolución y oportunidades*, noviembre.
- SELA (2005), *La Integración y sus Instituciones en América Latina y el Caribe*, febrero.
- Dinámica de las Relaciones Externas de América Latina y el Caribe*, Ediciones Corregidor, 1998

El imperio de las finanzas

Bienvenidos al casino global*

*Julio Sevares***

Desde 1980 hasta fin del siglo pasado, la economía de los países industriales creció a un 2,5% anual. En ese mismo tiempo, la liquidez internacional, medida por el aumento de las reservas se multiplicó por más de quince, las operaciones cambiarias crecieron casi un 30% anual y las emisiones de bonos y títulos de deuda un 10 por ciento.

El FMI calcula, a su vez, que los fondos especulativos pueden mover entre 600.000 millones y un billón de dólares diarios para especular con divisas u otros activos financieros. Antes de la liberalización de los mercados de capital en los primeros años setenta, el comercio de divisas diario equivalía a seis veces el valor del comercio mundial anual. Hoy equivale a 50 veces ese valor. En la década de los ochenta la negociación de divisas era un 30% mayor que el valor del comercio internacional de bienes y servicios. En 2000 la superaba en un 60 por ciento.

La globalización financiera se aceleró particularmente a partir de la década de los setenta, con la liberalización de movimientos de los países industriales y a partir de los ochenta en los periféricos, por la misma razón. Según el FMI entre 1980 y 2003, el promedio de activos y pasivos externos de los países industriales se multiplicó por 15, mientras que, en ese mismo período, la producción aumentó poco más de un 50%. Esta tendencia se aceleró a partir de los noventa.

El sostenido incremento de la actividad financiera por encima de la producción, el aumento de las obligaciones financieras desligadas de la actividad real es un fenómeno inquietante cuyo futuro es difícil de predecir. ¿Hasta qué punto puede aumentar la actividad financiera y las ganancias que genera por encima de las operaciones de la economía real?

* Este trabajo es el primer capítulo del libro *El imperio de las finanzas*, Norma, 2005, 360 págs.

** Economista. Investigador del CENES, FCE-UBA. Profesor en la Maestría en Historia Económica de la FCE-UBA y en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Editorialista del diario *Clarín*, Buenos Aires.

“Lo que deja perplejo es el poder del capital...jamás el dinero aulló como hoy por todo el planeta”

George Steiner¹

La revista estadounidense *Forbes* elabora anualmente un *ranking* de las 2.000 corporaciones más grandes del mundo. Durante mucho tiempo los primeros puestos de la lista de *Forbes* y de otras similares, era ocupado por las grandes corporaciones productivas. Pero en 2004 el podio fue ocupado por Citicorp, el principal conglomerado financiero del planeta, que ya había figurado en el segundo puesto en una lista anterior.

El segundo puesto lo logró la estadounidense General Electric y los tres siguientes, otras compañías del mundo financiero: la aseguradora AIG, el Bank of America y el banco HSBC. La única empresa no financiera del grupo de las cinco corporaciones más grandes del mundo, es un conglomerado que incluye desde productoras de aparatos eléctricos hasta fábricas de motores de aviones. Pero también tiene varias compañías de servicios financieros para empresas e inversores individuales.

El hecho de que las corporaciones más grandes del mundo sean grupos financieros, es un claro reflejo de la preeminencia que el capital financiero ha llegado a ocu-

par en la economía, en las relaciones de poder y en la vida cotidiana.

Hasta hace algunas décadas, esas transacciones estaban básicamente vinculadas con operaciones comerciales internacionales, con inversiones fijas externas o préstamos.

Pero, en forma creciente las operaciones financieras se hacen con fines puramente especulativos, alejadas de la producción o el comercio. Como señaló hace ya algunos años el Banco de Pagos Internacionales, una entidad que reúne banqueros centrales y dicta normas bancarias internacionales, consignaba: “En el clima generalizado de desregulación que reina desde hace una decena de años, los movimientos internacionales de capitales han tenido una expansión tan considerable que actualmente las transacciones ligadas a los pagos corrientes parecen bastante modestas en comparación”².

Desde 1980 hasta fin del siglo pasado, la economía de los países industriales creció a un 2,5% anual. Pero, en ese mismo tiempo, la liquidez internacional, medida por el aumento de las reservas se multiplicó por más de quince, las operaciones cambiarias crecieron casi un 30% anual y las emisiones de bonos y títulos de deuda un 10 por ciento.

¹ Steiner, 1999.

² Citado por Plihon, 1999.

El FMI calcula, a su vez, que los fondos especulativos pueden mover entre 600.000 millones y un billón de dólares diarios para especular con divisas u otros activos financieros. Antes de la liberalización de los mercados de capital en los primeros años setenta, el comercio de divisas diario equivalía a seis veces el valor del comercio mundial anual. Hoy equivale a 50 veces ese valor. En la década de los ochenta la negociación de divisas era un 30% mayor que el valor del comercio internacional de bienes y servicios. En 2000 la superaba en un 60 por ciento.

La globalización financiera se aceleró particularmente a partir de la década de los setenta, con la liberalización de movimientos de los países industriales y a partir de los ochenta en los periféricos, por la misma razón. Según el FMI entre 1980 y 2003, el promedio de activos y pasivos externos de los países industriales se multiplicó por 15, mientras que, en ese mismo período, la producción aumentó poco más de un 50%. Esta tendencia se aceleró a partir de los noventa³.

Uno de los segmentos más complejos y de crecimiento vertiginoso del mercado, es el de los derivados, instrumentos de cobertura de riesgos, de apuestas a precios o tasas de interés futuros. En su inmensa mayoría se realizan con propósitos puramente especulativos y con una gran dosis del lla-

mado "apalancamiento", es decir hacer operaciones adelantando sólo una parte de la inversión, a la espera de que la ganancia futura cubra el resto. Otra opción es cubrir la totalidad de la inversión con un endeudamiento que se espera pagar con las ganancias. Según las estadísticas el Banco de Pagos Internacionales, en 2004 el giro diario de derivados de diferente clase llegaba a 2,4 billones de dólares, 16 veces el PBI diario de los países de la OCDE, la organización que reúne a las economías más desarrolladas.

El sostenido incremento de la actividad financiera por encima de la producción, el aumento de las obligaciones financieras desligadas de la actividad real es un fenómeno inquietante cuyo futuro es difícil de predecir. ¿Hasta qué punto puede aumentar la actividad financiera y las ganancias que genera por encima de las operaciones de la economía real?

En los inicios del mundo moderno, Aristóteles hizo una clara diferenciación entre la economía vinculada con la actividad económica concreta y las operaciones destinadas a hacer dinero a partir del dinero mismo.

El Estagirita distinguió entre economía y crematística. La primera es la actividad cuyo objeto es procurar los elementos necesarios para la vida y los bienes útiles para la casa o el Estado. La crema-

³ IMF. World Economic Outlook, april 2005. www.imf.org

tística, nacida con la creación del dinero es, precisamente, la actividad cuyo fin último no es la producción sino hacer dinero. El dinero no es concebido como un medio para llevar a cabo el comercio, sino como un fin en sí mismo. La crematística, dice Aristóteles “no encuentra ningún dique a su ambición, que es enriquecerse de un modo absoluto”⁴.

Carlos Marx retomó este camino y postuló que “A medida que se desarrolla la productividad del trabajo y, por lo tanto, la producción en gran escala: 1° los mercados se extienden y se alejan de los centros de producción; 2° los créditos tienen que prolongarse, y 3° el elemento especulativo tiende necesariamente a dominar cada vez más las transacciones comerciales. El desarrollo del proceso de producción hace que se extienda el crédito y el crédito se traduce en la extensión de las operaciones industriales y mercantiles”⁵.

El sostenimiento del ciclo de producción basado sobre el crédito depende del reflujó de los créditos, es decir que todas las cadenas del sistema cobren los créditos dados para poder, a su vez, cancelar sus deudas. Cuando algún punto de la cadena falla, transmite sus problemas al resto.

Marx observó las potencialidades especulativas del sistema que

estaba surgiendo: “El crédito -sostuvo- acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración del mercado mundial, sienta las bases de la nueva forma de producción”⁶.

Pero este sistema crea, también, un volumen de dinero que no encuentra empleo en la producción y que se reproduce en operaciones especulativas, originando un ambiente de volatilidad financiera y tendencia a la crisis.

Por otra parte, la creciente masa de títulos de deuda pública y privada y de las operaciones de crédito constituye una forma de capital ficticio, cuyo valor se sostiene en la medida en que el ciclo de los negocios progresa y las obligaciones se cumplen. Cuando el ciclo se interrumpe, por fallos en la cadena de producción o por turbulencias originadas en la esfera financiera, muchos de esos títulos y créditos pierden valor y aparece, con toda su crudeza, su carácter ficcional. Accionistas y bonistas, satisfechos por la riqueza escriturada en sus certificados de tenencia de títulos, se convierten en inversores frustrados y empobrecidos. Y los bonistas en particular, en acreedores que claman por la devolución de su dinero y por la efectivización de una renta que sólo existió en la fantasía de que la rueda de la fortuna nunca se interrumpiría.

⁴ Citado por Marx, 1973, p. 108.

⁵ Idem, Tomo II, p. 452.

⁶ Idem, Tomo III, p. 419.

El incremento de la masa de dinero en el sistema financiero está motorizado por uno de los rasgos del capitalismo contemporáneo: el crecimiento de la franja de personas de altos ingresos y el aumento del número de ricos. El enriquecimiento y financiarización, forman un círculo virtuoso para el desarrollo de las formas más parasitarias e injustas de capitalismo: la oportunidad de obtener rentas financieras genera crecientes oportunidades de enriquecimiento y este último genera dinero disponible para la inversión financiera.

En el último listado de la revista *Forbes*, el número de personas con fortunas de más de 1.000 millones de dólares aumentó un 18%. América latina tiene 27 representantes en la lista, entre ellos el mexicano Carlos Salim con una fortuna de 23.800 millones de dólares (el primer multimillonario es Bill Gates, con 46.500 millones). Según las cuentas de la periodista Paola Visca, la fortuna de los multimillonarios de México equivale al 26% de la deuda pública de su país; la de los venezolanos, al 38%; la de los chilenos al 22% y la de los brasileños, al 10%. La posición argentina es más modesta: el único representante en la lista, Gregorio Pérez Compagnon, sólo tiene 1.700 millones de dólares, equivalentes al 1% de la deuda pública⁷.

Las corporaciones no financieras cumplen un papel fundamental en

la creación del nuevo mercado global. Con sus inversiones externas y comercio entre sus diferentes unidades, las corporaciones crearon una red internacional de pagos por bienes y servicios, y de transferencias abiertas u ocultas, que se canalizan a través de los operadores financieros, muchos de los cuales están vinculados con esas mismas corporaciones.

Las corporaciones participan en este escenario acumulando activos financieros, especulando en los mercados globales e incluso comprando y vendiendo otras firmas por motivos puramente financieros. Debido a las oportunidades de renta financiera que ofrece el mercado global, los directores y dueños de compañías manejan los fondos de las empresas, y las empresas mismas, de acuerdo con lógicas financieras, apartándose de los objetivos productivos o de servicios que constituyen el supuesto corazón de sus negocios.

A través del manejo especulativo de sus empresas, los directivos aumentan sus ingresos, vinculados con la cotización de las acciones. Se ha creado de este modo una dinámica y una cultura según la cual la lógica microeconómica de los directivos se superpone, no sólo a lo que debería ser la lógica social de la macroeconomía, sino a la propia lógica microeconómica de la empresa. Todo basado sobre la premisa enunciada por el

⁷ Visca, *Multimillonarios de América latina*. <http://deudaexterna.com/análisis>

financista especializado en compra, venta y destrucción de empresas, Gordon Gecko, en la película *Wall Street*: “la codicia es buena”.

En los años recientes la lógica de la buena codicia -combinada con prácticas delictivas- aplicada en empresas como Enron, World Com o Parmalat, condujo al colapso de las firmas y a la licuación instantánea de inversiones, ahorros y fondos de pensión de sus trabajadores.

Así como las empresas no financieras invierten en finanzas, los fondos de inversión y de pensión se han convertido en grandes accionistas de empresas, cuya dirección ha quedado subordinada a las estrategias de valorización financiera de los inversores accionistas.

Como sostiene un analista del sistema de fondos de pensión, “la marca de fábrica de este régimen de acumulación reside ciertamente en la articulación creciente de la esfera financiera y la esfera real, pero sobre la égida de la primera, a la cual sus estructuras le garantizan una autonomía relativa en una superioridad jerárquica”⁸.

Esta distorsión no es un invento del capitalismo contemporáneo. Ya en los años treinta John Maynard Keynes observó con preocupación la tendencia de las empre-

sas a desviar capitales desde la producción a las actividades financieras, lo que denominó el peligro de la “economía casino”⁹.

Los juegos especulativos de las últimas décadas, habilitados por la desregulación y liberalización de los mercados, mostró que esa designación no era caprichosa ni aventurada. Por si hiciera falta probarlo, basta el caso de George Soros. En su libro *La alquimia de las finanzas*, el financista húngaro cuenta que luego de 1981, cuando la Reserva Federal decidió permitir que el mercado fijara las tasas de interés y, en consecuencia, la cotización de las divisas y de las acciones, su forma de plantear hipótesis y testearlas con la evolución del mercado, se volvió inútil. En busca de una nueva forma de operar contrató a Victor Niederhofer, un especulador que había desarrollado un sistema usando la hipótesis de que el mercado es un casino. “Él -cuenta Soros-, operó exitosamente hasta que la crisis de la deuda de 1982 cambió las reglas de juego”¹⁰.

En el casino gana generalmente la banca y pierden los apostadores. Pero en el casino global las cosas suceden de otra forma. Los grandes apostadores o gerenciadore de fondos de apostadores ganan a costa de muchos que no participan directamente en el juego, o que son forzados a poner su

⁸ Lordon, 2000, p. 67.

⁹ Keynes, 1983.

¹⁰ Soros, p. 303.

dinero en la mesa de los números. Pero también suelen perder los que pretenden ser la banca, como gobiernos y bancos centrales. En 1992, el fondo Quantum de George Soros tuvo un papel fundamental en una especulación contra la libra que obligó al gobierno británico a devaluarla contra su voluntad. En 2004, el Banco Central Europeo, que regula el mercado monetario de la primera economía del planeta, perdió 2.200 millones de euros, 3,4 veces más que en 2003, por la depreciación de los dólares de sus reservas: desde 1973 la cotización del dólar está determinada por las fuerzas del mercado mundial¹¹.

Esta dinámica del capitalismo constituye, en el mejor de los casos, una pésima distribución de recursos creativos y de energía, y un desarrollo de las formas más parasitarias del capitalismo. Es también una fuente de incertidumbre y de perplejidad en relación con el destino del mundo. "La sensación cada vez más recurrente en la experiencia cotidiana, opina el filósofo Martín Hopenhayn, de que estamos expuestos a un destino que nadie controla, tiene su expresión paroxística en el movimiento de capitales, donde esa complejidad varía sus componentes en tiempos infinitesimales y exige, por lo mismo, ser reconstruida mentalmente a ese mismo

ritmo. No hay mayor caja negra hoy para la comprensión humana, ni mayor pérdida de control sobre la complejidad en lo que se refiere a sus propias creaciones, que esta red de flujos, informaciones y conjeturas superpuestas donde son muchos millones de señales, y muchos miles de millones de dólares, los que diariamente circulan y cambian precios relativos, estado de ánimo y posiciones de los jugadores"¹².

La crisis, una casualidad permanente

Según un estudio realizado poco después de la crisis asiática, publicado por el Institute for International Economics, entre 1970 y 1998 se produjeron 64 crisis bancarias, 79 crisis cambiarias y 35 programas de ayuda del FMI¹³.

Para la teoría ortodoxa, la apertura y desregulación del mercado financiero promueven una distribución equilibrada de los recursos financieros y una reducción de los riesgos de crisis. Pero según la realidad, la liberalización del mercado ha generado corrientes de dinero que recorren el mundo fuera del control de cualquier entidad reguladora, con comportamientos impredecibles y en busca de oportunidades especulativas. Como sostiene el politólogo de la London School of Economics,

¹¹ *El Cronista Comercial* 15 de marzo de 2005.

¹² Hopenhayn, 2002, p. 151..

¹³ Hufbauer y Wada, 1999. Idem

John Gray, "Los mercados de valores globales operan en un contexto de incertidumbre en los mercados, que hace que las subidas y bajadas especulativas resulten inevitables. El mecanismo del patrón oro ha sido reemplazado por los reglamentos de un casino"¹⁴.

En las últimas décadas ese mercado ha sufrido una serie continua de crisis en las más diversas circunstancias y geografías: en países tradicionalmente inestables de la periferia, en países que se incorporan al capitalismo de mercado, en países de economías exitosas y ascendentes y en instituciones financieras de primer nivel de países del primer mundo.

Los movimientos de los mercados globales someten a las economías chicas, y aun a las de mayor tamaño, a variaciones de su situación económica que los gobiernos muchas veces no pueden controlar y que dificultan o frustran las políticas de crecimiento. La desestabilización de las economías se traduce en frecuentes crisis cambiarias y bancarias. El término "vulnerabilidad financiera" figura inevitablemente en cualquier descripción de las condiciones de las economías periféricas.

Por otra parte el mercado no ha contribuido, como promete la teoría convencional, a una distribución equilibrada de los recursos financieros en escala global. Según la opinión del semanario liberal

The Economist, "No hay todavía algo así como un único mercado global de capital. La evidencia más obvia es que, dentro de un margen de dos o tres puntos porcentuales para arriba o para abajo, cada país tiende a invertir tanto como ahorra. Si hubiera un mercado global de capital totalmente integrado, esta correlación no persistiría de la forma en que lo ha hecho". Es decir, los países ricos exportarían capital y tendrían superávit de cuenta corriente, y los países pobres recibirían más capital y tendrían déficit de cuenta corriente. Los ricos ahorrarían más de lo que invertirían y los pobres invertirían más que su ahorro interno¹⁵.

Por lo contrario, durante largos períodos la periferia exporta capitales hacia los países ricos, como sucedió con Latinoamérica en las décadas previas a las de los setenta y ochenta.

La dinámica financiera internacional afecta la demanda privada en forma casi directa e inmediata. Las olas de liquidez, incontroladas por los países receptores, promueven el consumo basado sobre el endeudamiento o en la expectativa de las ganancias futuras por rentas financieras o valorización de las acciones -del mismo modo la sobreinversión y la especulación en bienes raíces o en productos primarios-. Un ejemplo fue el caso de los Estados Unidos en los

¹⁴ Gray, 1998, p. 18. Idem

¹⁵ *The Economist*, 20 de septiembre de 1997.

años noventa: en pleno auge bursátil, la inversión de las familias en títulos y bonos aumentó sustancialmente y las rentas de esas inversiones llegaron a formar la cuarta parte de los ingresos familiares.

Por lo contrario, las caídas en las cotizaciones o las reducciones de liquidez provocan el derrumbe del consumo y de las expectativas sobre los ingresos futuros. En esos casos el “efecto riqueza” -la disposición a gastar en función de la valorización de los activos en los que se invirtió- se transforma entonces en el “efecto pobreza” -el temor a gastar por la desvalorización de los activos-. Y, así como la disponibilidad de crédito facilita el consumo basado sobre el endeudamiento, el encarecimiento del crédito o la pérdida de ingresos provoca la insolvencia de los deudores, lo cual afecta también al sistema financiero.

En suma, la inestabilidad de la esfera financiera se traslada a la esfera real, pero en forma amplificada, en los ciclos de auge y de contracción, lo cual contribuye a explicar la inestabilidad macroeconómica, la difusión de la incertidumbre y el temor al futuro.

La dinámica financiera ha llegado a atrapar a los propios asalariados: una porción creciente de los ahorros de trabajadores es destinada a fondos de pensión privados, donde quedan sometidos a los vaivenes e incertidumbres de

los mercados financieros y donde forman una fuente de financiamiento de empresas y gobiernos. El capitalismo contemporáneo ha logrado imponer la gran paradoja de que los trabajadores financien al capital.

En suma, la globalización financiera, lejos de contribuir a la financiación del desarrollo, conspira contra la estabilidad necesaria para ese proceso. Esto explica, entre otros factores, que las tasas de crecimiento de la economía mundial anterior a la ola liberalizadora iniciada en los años setenta haya sido mayor que el crecimiento promedio de las últimas tres décadas.

La libertad del dinero

Al comentar el escenario contemporáneo, George Steiner pudo decir que jamás el dinero aulló como hoy por todo el planeta.

¿Por qué el dinero goza de libertad para aullar? Porque, como afirma Paul Krugman, “se ha producido en todo el mundo un impulso general para desregular los mercados financieros, para volver a los buenos y viejos tiempos del siglo XIX cuando los inversionistas eran libres para colocar su dinero donde quisieran”¹⁶.

La conformación y la dinámica actuales del mercado son, básicamente, el producto de la lucha entre el capital financiero para lograr

¹⁶ Krugman, 1999.

autonomía y regulaciones adecuadas a sus intereses, y los gobiernos que procuran imponerle ciertas limitaciones en defensa de otros sectores del capital, de la sociedad y de objetivos de estabilidad o crecimiento de largo plazo. Este avance de la libertad financiera es, en rigor, parte del avance del poder del capital privado sobre la sociedad y la capacidad regulatoria de los Estados en el campo del comercio y las inversiones.

En la globalización del dinero intervinieron en forma decisiva, otros factores. Uno de ellos, el desarrollo de la tecnología de procesamiento y transmisión de datos, que generó condiciones inmejorables para dotar de alcance global, rapidez e invisibilidad a las operaciones financieras. La tecnología no ha servido para democratizar o transparentar el mercado, sino que ha contribuido y, en muchos casos, forzado, su concentración.

En la formación del mercado financiero ha influido también una de las características dominantes del capitalismo contemporáneo: el aumento de los ingresos de las capas altas y medias de la sociedad, y el consecuente aumento de excedentes financieros en individuos y familias.

En la primera globalización y en el período que siguió a la Segunda Guerra, se registró una tendencia a la convergencia en los niveles de ingresos. En las últimas décadas el número de millonarios y la fortuna de cada uno de ellos au-

mentó sustancialmente, de modo que las diferencias tendieron a ampliarse: hace ya más de una década, el Banco Mundial estimó que los 225 individuos más ricos poseen una fortuna de 1.000 billones de dólares, equivalente al ingreso del 47% de la población mundial más pobre. En 1999 Naciones Unidas estimó que los activos de los tres grandes millonarios del mundo superaban el PBI conjunto de los países más pobres.

En los Estados Unidos, durante el gobierno de George W. Bush, la diferencia entre ricos y pobres aumentó, y en la actualidad el 1% de los ricos controla el 40% de la riqueza del país. En la medida en que los excedentes personales y la posibilidad de obtener con ellos rentas financieras aumenta, se potencia el sistema de ampliación de la brecha de ingresos y posibilidades entre las personas y los países.

Periódicamente, una crisis licua una parte de esas rentas. Pero esto, lejos de reducirlas, aumenta las desigualdades, porque los costos de las crisis suelen ser trasladados a la población más vulnerable a través de la carga fiscal que financia los rescates, las pérdidas de empleo que causan las recesiones o la licuación de ingresos que generan las inflaciones provocadas por las grandes devaluaciones que suelen seguir a las crisis.

La globalización de los mercados financieros genera una com-

petencia que se convierte en una nueva forma de disciplinamiento perverso para las economías: la competencia basada sobre la reducción de impuestos para atraer capitales.

La libre movilidad de capital limita las posibilidades de políticas de pleno empleo. Por otra parte aumenta la competencia entre empresas, provocando presiones sobre los salarios y la precarización de las condiciones laborales en los países con mayor nivel de protección laboral y social.

Una clara exposición de este proceso fue realizada por Vito Tanzi cuando se desempeñaba como experto impositivo del FMI, y luego publicada en un documento de ese organismo. Sostiene Tanzi: "Hoy, los individuos pueden elegir entre muchos países para decidir dónde trabajar, comprar, invertir su capital financiero, localizar las actividades productivas de la empresa que controlan, y así de seguido. En esas decisiones, ellos tomarán en cuenta el impacto de los impuestos, especialmente en la medida en que los sistemas impositivos de los diferentes países continúen divergiendo tanto como lo hacen hoy. El sistema impositivo de muchos países es básicamente el producto de un período (antes, durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra mundial), cuando las economías estaban cerradas y los

movimientos de capital eran más limitados. Debido a que esos sistemas no reflejan hoy, o no totalmente, los recientes desarrollos económicos, hay una amplia perspectiva para que los individuos puedan explotar esas diferencias (entre sistemas fiscales) y para que algunos países traten de aprovechar las oportunidades para atraer capitales de otros países. A medida que las tarifas de importación caen, el incentivo para competir a través de tratamientos impositivos especiales sobre determinadas actividades, aumenta. Nosotros, por lo tanto, observamos un proceso que, por momentos, ha sido descrito como una degradación impositiva, por la cual algunos países cambian sus sistemas impositivos para capturar la base impositiva mundial y exportar su carga impositiva. Este proceso fuerza a los países a reformar sus sistemas impositivos en una dirección que no siempre es bienvenida y que tendrá consecuencias no sólo sobre la estructura, sino también sobre el nivel impositivo"¹⁷.

En suma, el funcionamiento del mercado global, caracterizado por el disciplinamiento regresivo de las sociedades, el estímulo a la competencia fiscal ruinosa y las facilidades para las operaciones delictivas facilita, como sostiene John Gray, en su libro *Falso Amanecer*, las peores clases de capi-

¹⁷ Tanzi, 1996.

¹⁸ Gray, 1988.



Marlon Brando en "El Padrino"

talismo¹⁹. La extensión, sofisticación y complejidad de las redes financieras internacionales y la permisividad para la existencia de paraísos financieros permite las más variadas actividades delictivas, desde los fraudes y la evasión impositiva al lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción o cualquiera de los grandes delitos globales contemporáneos.

Desde hace dos décadas el Citigroup es considerado -además de la compañía más grande del mundo-, la entidad financiera pionera en adaptar su organización a las nuevas reglas de juego bancario. Esta estrella del firmamento financiero y corporativo aparece frecuentemente en redes de delitos financieros: se la encontró vinculada con cuestiones como el gigantesco lavado de dinero del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, los fraudes de Enron y Parmalat y, lateralmente, con el ocultamiento de dinero de Augusto Pinochet.

Los gobiernos han permitido que en las últimas décadas se desarrollaran los centros financieros *off shore*, a través de los cuales el dinero puede ocultarse o movilizarse clandestinamente. Los centros *off shore* o paraísos fiscales fueron original y fundamentalmente, refugio de dinero proveniente del delito. Pero en la actualidad son grandes centros financieros (el de las Islas Caimán es el quinto centro financiero del mundo), en los

cuales participan los grandes bancos, las grandes corporaciones y las grandes fortunas. Los paraísos parecen una forma de esquizofrenia del capitalismo que, por una parte, establece sistemas de tributación y regulaciones para controlar y transparentar los movimientos de dinero, y por otra permite el funcionamiento de centros donde esas reglas no se cumplen. En rigor, el desarrollo de los paraísos es un triunfo más del capital por liberarse de los controles de los Estados y moverse en libertad en búsqueda de ganancias.

El desarrollo de espacios de creciente libertad para los movimientos de dinero, la especulación y las transacciones oscuras o directamente delictivas, contribuye a la inestabilidad del sistema y a las crisis porque, como sostiene Charles Kindleberger, "Las crisis comerciales y financieras están íntimamente ligadas con las transacciones que sobrepasan los confines de la ley y la moralidad, por muy vagos que sean estos confines. La propensión a estafar y a ser estafado discurre paralela a la proclividad a especular durante un auge"¹⁹.

La expansión del imperio del libre mercado no ha conducido a fomentar la competencia, como argumenta la ortodoxia económica, sino la concentración. Esto ha sucedido también en el mercado financiero internacional. Saskia Sassen, profesora de Sociología

¹⁹ Kindleberger, 1991, p. 109.

en la Universidad de Chicago sostiene: "La transformación del mercado global de capitales en un nuevo orden supranacional, continúa avanzando rápidamente a pesar de la actual crisis de mercados. Las operaciones financieras nacionales están reduciéndose, y las orientadas internacionalmente están tomando su lugar. La globalización usualmente implica descentralización. Pero mientras la red internacional de centros financieros se expande, un sistema más reducido, dominado por un puñado de ciudades estratégicas, se está desarrollando. A medida que las operaciones financieras se dispersan alrededor del mundo, sólo unas pocas ciudades tendrán los recursos para ser dominantes. Primeras entre ellas están Londres y Nueva York, con su enorme concentración de recursos y talentos. Esas dos ciudades conducirán las más críticas y complejas operaciones del futuro"²⁰.

A fines del siglo XX, 25 ciudades controlaban el 83% del mercado de acciones (*equities*) bajo administración institucional, y sumaban alrededor de la mitad de la capitalización global del mercado (aproximadamente 29,9 billones de dólares). Londres, Nueva York y Tokio manejaban la tercera parte de las operaciones de acciones y el 58% del mercado de divisas. Otras ciudades están comenzando a emerger como centros finan-

cieros importantes. San Pablo y Bombay aumentaron su participación a partir de la liberalización financiera de sus respectivos países y comenzaron a operar como puentes entre el mercado internacional y el doméstico. Pero la importancia de esos centros seguirá lejos de la relevancia de las grandes ciudades.

"Los participantes del mercado -continúa Sassen- frecuentemente pintan un cuadro de competencia despiadada, lo que es sólo parcialmente correcto. En verdad la relación es más compleja. Durante la ola de desregulación en los años ochenta, los tres grandes (Londres, Nueva York y Tokio), tenían todavía alguna división cooperativa del trabajo que continúa hoy con una especialización creciente. A pesar de toda la palabrería de amarga competencia en los ochenta, estaba emergiendo un verdadero mercado global que estaba circulando capital a través de los centros financieros líderes antes de venderlo reempaquetado en el mercado doméstico. Desde que esa tendencia se intensificó en los noventa, las alianzas estratégicas a través de las fronteras se multiplicaron entre firmas y mercados. La competencia coexiste con colaboración estratégica y jerarquía"²¹.

La globalización, la complejización de las operaciones, implica para las firmas de servicios finan-

²⁰ Sassen, 1999, p. 75.

²¹ Idem, p. 81.

cieros la necesidad de lazos internacionales más estrechos y de tecnologías más potentes, para lo cual necesitan disponer de mayores volúmenes de capital. Como afirma *The Economist*, “sólo un puñado de firmas puede sobrevivir en este negocio corta-pescuezos”.

Como parte de esa tendencia, en la década de los noventa, cambió de manos en los Estados Unidos un monto de activos equivalente a todo el sistema bancario. En esos años la tendencia tuvo un pico de tensión sin precedentes, con la concreción de tres megafusiones cuyos participantes venían, a su vez, de un proceso de compras de empresas. Según el registro del Banco de Pagos Internacionales, en los años noventa se firmaron 7.300 contratos de fusiones o adquisiciones en el sector financiero por un valor superior a un billón y medio de dólares, un monto equivalente a las dos terceras partes de la deuda externa de los países subdesarrollados en 2002 y tres veces el monto de esa deuda en 1980²². Las fusiones aumentan la concentración del sistema. En la década citada la concentración entre las 10 mayores firmas de servicios financieros se duplicó. Los cinco bancos más grandes por sus activos representan el 80% de los activos de ese grupo en Bélgica, Holanda y Suecia; el 70% en Canadá, Australia y Bélgica; el 60% en Tailandia, México y

Suiza; el 50% en India y España; el 40% en la Argentina, Italia y Gran Bretaña.

¿Cuáles son los mayores? En el fluido mundo de la globalización financiera los *rankings* de tamaño bancario duran poco porque la valuación de los activos (que determinan el tamaño de la entidad) varía con los tipos cambio. En los años setenta los bancos estadounidenses encabezaban la lista; en los ochenta fueron desplazados por los japoneses, que crecieron administrando el superávit externo de su país, y cuyos activos se valorizaron con el aumento en la cotización del yen; en los años noventa la crisis económica y bancaria japonesa y la devaluación del yen hicieron retroceder a las casas del sol naciente, y los primeros lugares fueron ocupados por bancos estadounidenses (el Citigroup a la cabeza) acompañados por bancos japoneses y europeos.

La concentración de capacidad financiera puede tener efectos devastadores, como surge de dos ejemplos: en 1982, el fondo de inversión estadounidense canadiense Friedberg Commodity Fund, dirigido por Steve Hanke, realizó por sí solo la mitad de las transacciones con el peso mexicano, que precipitaron la crisis de la deuda mexicana. En 1992, el fondo Quantum de George Soros especuló contra la libra esterlina generando una corriente de ventas que la hizo caer, a pesar de los esfuerzos del Banco de Inglaterra por

²² Girón y Correa, 2004.

sostenerla.

Subordinación monetaria en la globalización financiera

En el siglo XIX la globalización financiera construyó sobre la base del patrón oro, lo que significaba un tipo de cambio fijo y la disponibilidad de una moneda como la libra, con un sólido respaldo oro. Esto garantizaba cierta estabilidad de las tasas de interés, de la oferta monetaria interna de los países, y de la inflación. La globalización financiera contemporánea se desarrolla con tipos de cambio variables y responde a otras reglas.

En el lugar del Banco de Inglaterra, que hegemonizaba la política monetaria en el siglo XIX, está la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed influye sobre la tasa de interés de Estados Unidos y, en consecuencia, sobre la internacional, de dos formas: fijando una tasa de referencia para fondos federales que se prestan a los bancos, lo que determina la tasa que los bancos pagan y cobran a sus clientes. Además influye en las oscilaciones de esa tasa comprando y vendiendo títulos del gobierno a los bancos norteamericanos.

Las tasas de interés influyen sobre el mercado accionario porque los inversores deciden su compra o venta de acciones comparando el rendimiento esperado de los

papeles con la alternativa de los intereses. A mayor nivel de intereses reales, los inversores exigirán mayores rendimientos de las acciones, antes de darle su dinero al agente de bolsa.

Al aumentar las tasas de interés se reduce el valor real de los activos reales de las personas y las empresas, lo cual produce una depresión de las expectativas o "efecto pobreza" que afecta a quienes perdieron su dinero invertido en acciones o bonos.

La posición de hegemonía absoluta de la Reserva Federal disminuyó con la aparición del euro y el Banco Central europeo, pero la institución estadounidense sigue teniendo la última palabra en el mercado financiero.

Los países periféricos son receptores pasivos de las decisiones de los grandes, y tienen dificultades para implementar políticas monetarias o cambiarias independientes. Como reconoce el FMI, "Quizá la más dramática implicación de la integración financiera y de los flujos de capitales más libres para la política monetaria sea que se ha hecho más difícil mantener simultáneamente tipos de cambio fijo y conducir una política monetaria independiente dedicada a objetivos domésticos"²³.

Si un país fija el tipo de cambio con libre circulación de capitales, el ingreso y salida de esos capitales determina la oferta monetaria

²³ FMI, 2005, 134.

interna y, por lo tanto, la tasa de interés. Si no fija el tipo de cambio y no controla la circulación de capitales, esos capitales determinan el tipo de cambio. En el primer caso, el banco central del país pierde capacidad de regular la oferta monetaria interna de acuerdo, como sostiene el FMI, con sus objetivos internos de crecimiento o de inflación. En el segundo caso, el Ministerio de Economía no puede fijar la política cambiaria que considera apropiada para su estrategia económica. Como la participación del comercio externo en la formación del producto tiende a crecer, en el centro y la periferia, esto significa que la libertad de circulación de capitales tiene una influencia creciente en la evolución de la producción.

Las complejas relaciones de las finanzas con el Estado

El capital financiero liberalizado tiene una relación compleja con el Estado. Las pretensiones de libertad del capital, financiero o productivo, orientados por una lógica de obtención de ganancias de corto plazo, chocan habitualmente contra las regulaciones estatales destinadas a garantizar la reproducción del capital en plazos más extendidos y en compatibilizar, en mayor o menor grado, los intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Las relaciones entre las finanzas y los Estados dependen de los perfiles de los gobiernos y de la situación macroeconó-

mica. El capital se siente más incómodo con el Estado cuanto más regulacionista sea, y viceversa.

La historia ofrece dos ejemplos paradigmáticos de esa relación. El primero, en la segunda posguerra, cuando el capital financiero opuso sostenidas resistencias a los proyectos regulatorios de los gobiernos estadounidense y británico cuyo propósito era ordenar el sistema monetario y cambiario y evitar la repetición de los desórdenes monetarios y financieros que habían caracterizado el período de entreguerras. Las regulaciones acordadas en ese momento se conocen como acuerdo de Bretton Woods.

El segundo ejemplo corresponde al primer gobierno de George W. Bush. En la campaña electoral para su primera presidencia Bush hijo prometió retroceder en la política estadounidense de control de los paraísos fiscales, argumentando que eran beneficiosos para el capital en la medida en que permitían a las corporaciones eludir el pago de impuestos. Era un típico caso de gobierno liberal contra el Estado de su país. La orientación de Bush cambió después del atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando se supo que los terroristas que lo perpetraron habían utilizado paraísos fiscales para ocultar la ruta del dinero con que se financiaban.

Pero más allá del carácter de las relaciones entre finanzas y Estado, es indudable que el poder es-

tatal es indispensable para la vida del capital financiero en tanto garantiza el respeto a la propiedad, es permeable a las inquietudes de los sectores más concentrados y, en última instancia, emplea la fuerza para defender los intereses de esos sectores, dentro o fuera del ámbito nacional.

El capitalismo comercial o industrial británicos no se habrían desarrollado sin el poder militar, principalmente naval de Gran Bretaña, sin el proteccionismo agrícola que subsistió hasta 1846, sin las leyes de Navegación que reservaron el acceso al puerto de Londres -el principal del mundo-, a las naves británicas y sin el control imperial de la India y otras regiones del mundo durante el siglo XIX. Algo similar puede decirse de las experiencias de desarrollo de las demás potencias.

A principios de ese siglo, explicando el papel del Estado en la reproducción del capital financiero, el experto financiero y dirigente socialdemócrata austríaco Rudolf Hilferding escribió párrafos que conservan plena vigencia: "El poder político es así decisivo en la lucha por la competencia económica, y para el capital financiero la posición del poder estatal es vital desde el punto de vista del beneficio. La diplomacia recibe ahora como función primordial la representación del capital financiero. (...) Cuanto más grande el espacio económico, cuanto mayor es el

poder del Estado, tanto más favorable es la posición del capital nacional en el mercado universal. Así pues, el capital financiero se convierte en soporte de la idea del fortalecimiento del poder del Estado."

"El capital financiero -continúa Hilferding-, no quiere libertad... sino dominio; no le gusta la independencia del capitalista individual, sino que exige más bien su sujeción; detesta la anarquía de la competencia y aspira a la organización, ciertamente sólo para poder reanudar la competencia en un nivel más alto. A fin de lograrlo y, al mismo tiempo, para conservar y acrecentar su poder, necesita que el Estado garantice el mercado nacional mediante la protección y facilite, de esa forma, la conquista de los mercados exteriores. Necesita un Estado políticamente poderoso que no requiera tener consideraciones con los intereses opuestos de otros Estados al formular su política comercial. Necesita un Estado fuerte que reconozca los intereses del capital financiero en el exterior y use del poder político para arrancar tratados ventajosos a los Estados más pequeños; un Estado que pueda ejercer su influencia en todo el mundo a fin de poder convertir el mundo entero en zona de inversión"²⁴.

También en la actualidad, "Los Estados soberanos -sostiene John Gray-, siguen siendo el te-

²⁴ Hilferding, 1973, pp. 374 y 378.

reno clave para la búsqueda de influencia por parte de las empresas multinacionales. Éstas ejercen influencia sobre las políticas de los Estados soberanos y además ejercitan su ingenio tratando de eludir su jurisdicción”²⁵.

Latinoamérica experimenta en forma continua este fenómeno desde que comenzó el endeudamiento de los países de la región, es decir, prácticamente desde el inicio de los procesos independentistas. Las armadas de países europeos y de los Estados Unidos intervinieron en reiteradas oportunidades para exigir el pago de deudas o para penalizar deudores y los gobiernos de los países acreedores ejercieron y ejercen presión directa para obtener el cobro de las deudas contraídas con agentes privados, organismos internacionales o gobiernos.

Contemporáneamente los Estados juegan un papel decisivo en el sostenimiento de los sistemas financieros mediante el rescate de los bancos o compañías financieras. Entre 1981 y 1992, período de varias crisis bancarias, los bancos estadounidenses recibieron 400.000 millones de dólares bajo diferentes programas y sistemas, como ayudas directas, financiamiento preferencial y cobertura de depósitos. En lo que configura sólo una aparente paradoja, en los siete primeros años de ese período el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos del impulsor

de las reformas liberales, Ronald Reagan. En ese período también proporcionaron ayuda a los bancos los Estados de Japón, Francia, Gran Bretaña y Alemania.

La deuda pública, utilizada para financiar el gasto público, es una de las bestias negras de la ortodoxia económica. El mundo de las finanzas es muy celoso del equilibrio fiscal porque un desbalance puede generar inflación o turbulencias perjudiciales para los inversores en dinero. Pero al mismo tiempo, el endeudamiento público es una fabulosa fuente de ganancias para el sistema financiero internacional y los inversores. Por esa razón los agentes financieros están siempre dispuestos a financiar a los Estados. De hecho, prestarle a los Estados es una de las actividades básicas de los financistas desde el principio de su historia. Reinos y naciones dependieron, en períodos críticos, de la disposición de los financistas para sostener sus guerras y sus despilfarros.

En el siglo XIX, Lord Byron escribió:

“¿Quiénes proveen al viejo y al nuevo mundo, de dolor o de placer?

¿Quiénes hacen de la política un parloteo?

¿La sombra del noble atrevimiento de Bonaparte?

El judío Rothschild y su colega cristiano, Baring.

Aquéllos, y el auténtico liberal Laffit-

²⁵ Gray, 1998, p. 94.

te,
 son los verdaderos amos de Europa.
 No es meramente
 cada préstamo un golpe de especulación,
 sino además el asiento de una nación o la zozobra de un trono”²⁶

En las últimas décadas, a pesar del dominio de los discursos de estabilidad fiscal, la deuda pública de los Estados desarrollados aumentó y, con ellas, las oportunidades de inversión. En la década de los sesenta las cuentas públicas de los países industrializados estaban casi equilibradas y la deuda pública representaba el 30% del PBI. En la década de los ochenta trepó al 5% del PBI, la deuda pública al 60% del PBI y los intereses sobre la deuda al 5% del PBI. En los noventa la deuda pública superaba el 70% del PBI y los intereses se acercaban al 6%²⁷.

Según una evaluación de la consultora Standard & Poors, la deuda pública de los Estados Unidos, Alemania y Francia, pasará de representar el 60% del PBI en 2005, al 230% en 2050²⁸.

Este fenómeno fue señalado con notable claridad hace un siglo y medio por Carlos Marx: “La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado -absoluto, constitucional o republicano-, imprime su sello a la era capitalista. La única parte de

la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es... la deuda pública. (...) El crédito público se convierte en credo del capitalista. Y al surgir de las deudas del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, contra el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio de la deuda pública. La deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria. Es como una varita mágica que infunde virtud procreadora al dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo que siempre conlleva la inversión industrial e incluso la usuraria. En realidad, los acreedores del Estado no entregan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda pública, fácilmente negociables, que siguen desempeñando en sus manos el mismísimo papel que el dinero. Pero, aun prescindiendo de la clase de rentistas ociosos que así se crea, y de la riqueza improvisada que va a parar al regazo de los financieros que actúan de mediadores entre el gobierno y el país, la deuda pública ha venido a dar impulso tanto a las sociedades anónimas, al tráfico de efectos negociables de todo género, como al agio; en una palabra, a la lotería de la Bolsa y a la moderna bancocra-

²⁶ Lord Byron, Don Juan, Canto XII.

²⁷ Plihon, 1999.

²⁸ Standard & Poors. Sovereign Outlook , 2005, mayo de 2005.

²⁹ *El Capital*, Volumen I, pp. 641 y 642.

cia²⁹.

El endeudamiento público somete, a su vez, a los gobiernos y a las sociedades a la disciplina de los mercados financieros. Como sostiene un agudo analista del sistema financiero “La deuda pública es un poderoso medio de asegurar que el Estado permanezca en las manos del capital. Cuanto más alta es la deuda del gobierno, más tiene que complacer a sus banqueros³⁰”.

Cuando la deuda es tomada en el mercado de bonos la situación puede ser peor, porque ese mercado varía diariamente sus “juicios”, que pueden afectar las finanzas públicas y las economías, independientemente de la solvencia de los indicadores fundamentales de las cuentas públicas o la producción.

La expansión de las actividades financieras en relación con las de la economía real y la progresiva erosión de los límites precisos entre unas y otras en muchas zonas de la actividad económica, plantea cada vez con más fuerza una vieja pregunta: ¿hasta que punto las actividades financieras y la obtención de ganancias en esa esfera puede seguir aumentando sin poner en riesgo el conjunto del andamiaje económico? ¿El aumento de las actividades financieras implica la creación de una burbuja destinada al estallido letal o es tan sólo un aspecto problemático pero normal en el giro de los negocios del capitalismo contemporáneo? Si la respuesta es esta última, ¿qué efectos tiene la expansión financiera sobre las actividades

³⁰ Henwood, 1998, p. 22.

productivas y comerciales y la vida social?

Bibliografía

Girón, Alicia y Correa, Eugenia (2004), “Desregulación y crisis financieras”, en Girón, Alicia y Correa, Eugenia (coord.), *Economía financiera contemporánea*. Tomo I. Senado de la República, UNAM, UAM, UAZ. México.

Gray, John (1998), *Falso Amanecer*. Paidós. Barcelona.

Henwood, Doug (1998), *Wall Street*. Verso. New York.

Hopenhayn, Martín (2002), *El mundo del dinero*. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.

Hufbauer, Gary Clyde y Wada, Erica (1999), *Hazards and Precautions: tales of international finance*. Institute for International Economics.

International Monetary Fund (2005), *World Economic Outlook*. abril,

www.imf.org.

- Keynes, John Maynard (1983), *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. FCE. México.
- Kindleberger, Charles (1993), *Manías, pánicos y cracs*. Ariel. Barcelona.
- Krugman, Paul (1999), *El teórico accidental y otras noticias de la ciencia lúgubre*, Crítica, Barcelona.
- Lordon, Frederic (2000), *Fonds de pension, ¿Piège à cons?*, Raison d'agir. Editions, París.
- Marx, Carlos (1973), *El Capital*. FCE. México.
- Plihon, Dominique (1999), "Desequilibrios mundiales e inestabilidad financiera", en Chesnais François (comp.), *La mundialización financiera*, Losada. Buenos Aires.
- Sassen, Saskia (1999), "Global Financial Centers", *Foreign Affairs*, enero-febrero.
- Soros, George (s/f), *The Alchemy of Finance*. John Wiley & Sons. EUA.
- Steiner, George (1999), *La barbarie de la ignorancia*, Barcelona, Taller de Mario Muchnik.
- Tanzi, Vito (1996). *Money Laundering and the International Financial System*. WP/96/55-EA www.imf.org.

En resumidas cuentas*

45 días de noticias

1.10/15.11.2005



Ex presidente argentino Juan Domingo Perón.
A 60 años del 17 de octubre de 1945

* La elaboración de esta síntesis está bajo la responsabilidad de la dirección de la revista y no se somete a dictamen del referato de **Realidad Económica**.

Esta sección de Realidad Económica pretende reflejar hechos y comentarios de significativa trascendencia producidos en los 45 días que abarca la periodicidad de la revista. Es nuestra intención que se convierta en una especie de "ayuda memoria" para sus destinatarios. Como toda selección, corre el riesgo de caer en arbitrariedades que procuraremos acotar, con la colaboración y sugerencias de nuestros amigos lectores.

● ELECCIONES

* “Luego de consolidar su poder en las elecciones legislativas, el presidente argentino, Néstor Kirchner, tendrá como principal desafío, en la segunda mitad de su mandato, mejorar la distribución de la riqueza, opinaron hoy analistas. En los comicios celebrados la víspera para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, el mandatario logró plebiscitar su gestión, como se propuso, y amplió su base política en el peronismo y en el Congreso Nacional. (...) Al margen de esos beneficios, suficientes para el festejo de la Casa Rosada (sede ejecutiva), el analista Artemio López advirtió que para preservar ese liderazgo, Kirchner deberá encarar ahora la lucha contra la creciente desigualdad social. López, director de la consultora Equis, estimó que el escrutinio de este domingo reforzó la popularidad del gobernante argentino y demostró que el camino correcto para su administración es el de la confrontación con los partidos tradicionales.” (*Prensa Latina* -Cuba-, 24-10)

* “Más de 18 millones de personas fueron a votar el domingo en todo el país. Los niveles de participación resultaron similares a los de las últimas elecciones legislativas, pero 1,5 millón de electores se expresaron en negativo: votaron en blanco o sus sufragios resultaron impugnados o declarados nulos. El presentismo fue así del 71 por ciento. En 2001, pocos meses antes de la estrepitosa caída de Fernando De la Rúa y del estallido de los cacerolazos, la concurrencia a las urnas había sido de poco más del 74 por ciento de los empadronados; los votos negativos -bautizados entonces como ‘voto bronca’- habían sumado el 21 por ciento, unos 3,4 millones. Este

domingo, los blancos y nulos fueron el 9 por ciento del total. (...) La ciudadana porteña fue impiadosa con un ejército de candidatos de partido pequeños -algunos conocidos y otros no tanto- que se presentó el domingo. Los números lo dicen todo: 20 partidos (dos de cada tres que compitieron en estas elecciones) no juntaron siquiera un magro uno por ciento de votos. El perfil de estos desafortunados es de lo más variado y va desde el primero de esa lista, el Partido Humanista de Lía Méndez hasta el de peor desempeño, Poder Autónomo, del candidato Pedro Cazés Camarero, ex hombre clave del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del ERP ya que dirigió -en 1973, en el breve lapso de legalidad de esas organizaciones- sus órganos oficiales: Estrella Roja y El combatiente. Camarero se había acercado a Luis Zamora y, desilusionado, se pasó a Poder Autónomo.” (*Clarín*, Buenos Aires, 25-10)

* “(...) El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, destacó a los comicios como ‘un éxito electoral formidable, que despeja el camino de incertidumbre por dos años’. Para el dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, lo más alentador es que ‘hoy el modelo no se discute’, ya que la magra cosecha de votos que obtuvo tanto la izquierda como la derecha deja poco margen para replantearse aspectos de la política económica que resultaron muy alentadores para los industriales, empezando por el actual tipo de cambio. (...) ‘Vamos a un escenario de demandas salariales generalizadas’, se afligía ayer el máximo ejecutivo de una empresa energética.” (*Página 12*, Buenos Aires, 25-10)

✓PRIMERAS PRECISIONES SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL

Los resultados de la reciente elección legislativa han sido presentados, por medios, dirigentes y funcionarios, con cierta intencionalidad. Por un lado, se habló del más alto grado de participación electoral en mucho tiempo, por otro, se habla de que la elección supone casi un plebiscito y, por lo tanto, un “cheque en blanco” para la gestión de gobierno.

Sin embargo, un examen más puntilloso de los datos electorales obligan a revisar ciertas argumentaciones.

El **cuadro Nº 1** presenta la información de la asistencia al comicio. Se observa que el 29% de los que estaban en condiciones de votar prefirieron no concurrir. Este porcentaje es mayor al de la última elección presidencial (22%), al de 1989 (18%) e incluso superior a la elección legislativa de octubre del 2001 (26%) que marcó un punto álgido en la crisis política de finales de la Convertibilidad. Está claro que lejos de disminuir, la tendencia es un aumento de las personas que deciden no asistir al acto electoral.

Cuadro Nº 1. Asistencia al comicio de las elecciones legislativas de octubre 2005. Total nacional.

Asistencia al comicio	Cantidad	Porcentaje
Empadronados	26.098.099	100,0%
Concurrieron	18.529.650	71,0%
No concurrieron	7.568.449	29,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

El **cuadro Nº 2** presenta el porcentaje de votos en blanco e impugnados de los que concurrieron al comicio. El 9% de los que fueron a votar prefirió no elegir a ninguna de las ofertas electorales presentes. Es un porcentaje que también es superior al de las elecciones presidenciales de 1989 (5%) y del 2003 (2%) pero inferior al de la elección legislativa de 2001 (21%).

Cuadro Nº 2. Tipo de votos emitidos. Total nacional

Tipo de votos	Cantidad	Porcentaje
Concurrieron	18.529.650	100,0%
Votos positivos	16.861.982	91,0%
Votos impugnados y/o blancos	1.667.669	9,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

De esta manera, ya sea porque no asistieron o porque no encontraron ninguna opción válida, lo cierto es que el 35,4% del padrón no definió ningún tipo de participación en las elecciones (ver **cuadro Nº 3**).

Cuadro N° 3. Resultados generales del comicio. Total nacional.

Tipo de votos	Cantidad	Porcentaje
Empadronados	26.098.099	100,0%
Votos positivos	16.861.982	64,6%
No votaron	7.568.449	29,0%
Votos impugnados y/o blancos	1.667.669	6,4%
Total de ausentes, en blanco e impugnados	9.236.117	35,4%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

Por otro lado, frente a los intentos de pensar el resultado electoral como un plebiscito de la actual gestión la información obliga a ser mas cautos. La afirmación se sustenta en los datos del **cuadro N°4** donde, sobre la base de los votos positivos, se computa que el oficialismo obtuvo un 40,4% de los votos. Porcentaje que es ampliamente superior al del resto de los participantes de la contienda.

Cuadro N° 4. Votos positivos según boleta electoral. Total nacional.

Votos positivos	Cantidad	Porcentaje
Frente para la Victoria y PJ aliado al Gobierno	6.808.305	40,4%
UCR	2.342.795	13,9%
PJ no Kirchenista	1.905.976	11,3%
ARI	1.240.240	7,4%
Izquierda	904.861	5,4%
Socialistas	828.385	4,9%
Otros	2.831.420	16,8%
Total votos válidos	16.861.982	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

Sin embargo vuelve a ignorarse al conjunto de la sociedad que decidió no asistir a sufragar o que realizándolo optó por no elegir ningún candidato. Incorporándolos resulta, tal como presenta el **cuadro N° 5**, que son el porcentaje más elevado del padrón (35,4%) y que el oficialismo obtuvo un 26,1% del padrón. Pobre porcentaje para hablar de plebiscito, menos aún de "cheque en blanco". El otro dato a considerar es la elevada dispersión de votos. Ninguna oferta electoral (obviamente exceptuando la oficial) ha logrado superar el 10% del padrón.

Cuadro N° 5. Votos según oferta electoral. Total nacional.

Tipo de votos	Cantidad	Porcentaje
Total de ausentes, en blanco e impugnados	9.236.117	35,4%
Frente para la Victoria y PJ aliado al Gobierno	6.808.305	26,1%
Otros	2.831.420	10,8%
UCR	2.342.795	9,0%
PJ no Kirchenista	1.905.976	7,3%
ARI	1.240.240	4,8%
Izquierda	904.861	3,5%
Socialistas	828.385	3,2%
Total	26.098.099	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

Debe considerarse que el 35,4% del padrón que no encontró representación en el comicio tiene incorporado al porcentaje del padrón que históricamente no viene concurriendo a los comicios. Desde inicios del período democrático y hasta 1989 (fecha a partir de la cual el ausentismo empieza a crecer en porcentaje del padrón) el ausentismo se ubicó, con leves oscilaciones, en torno al 15% del mismo. Por ende, descontando este porcentaje resulta que entre los nuevos ausentes y aquellos que no votaron en blanco y/o impugnaron agrupan al 20,4% del padrón (ver **cuadro N° 6**). Es decir, constituye el segundo conglomerado de significación del padrón a una distancia no significativa del que obtuvo la opción oficial.

Cuadro N° 6. Desglose de los votos ausentes y en blanco y/o impugnados. Total nacional

Categoría	% respecto al padrón
Ausentismo histórico	15,0%
Nuevos Ausentes	14,0%
Votos en blanco y/o impugnados	6,4%
Total	35,4%
Nuevos Ausentes y votos en blancos y/o impugnados	20,4%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires 25/10/05

Al corregir el total del padrón por los "históricos ausentes" se accede a los porcentajes que, en nuestra opinión, se acercan más a lo ocurrido el domingo pasado.

Cuadro Nº 7. Votos según oferta electoral. Total nacional.

Tipo de votos	Cantidad	Porcentaje
Frente para la Victoria y PJ aliado al Gobierno	6.808.305	30,6%
Nuevos Ausentes y votos en blancos y/o impugnados	5.324.012	23,9%
Otros	2.831.420	12,7%
UCR	2.342.795	10,5%
PJ no Kirchenista	1.905.976	8,5%
ARI	1.240.240	5,5%
Izquierda	904.861	4,0%
Socialistas	828.385	3,7%
Total Padrón	22.185.994	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior y diario *Clarín*, Buenos Aires, 25-10.

En síntesis, el oficialismo ha recibido un aval moderado por parte de la población, lo cual sigue indicando que la reconciliación efectiva de la política con la sociedad sólo podrá lograrse cuando los efectos materiales y concretos de una gestión de gobierno impacten (seriamente) sobre la vida cotidiana. El hecho objetivo de que la actual actividad económica equipare los niveles de 1998 pero con situaciones sociales más graves en términos de desempleo, ingresos y pobreza, le pone límites concretos a las mejoras relativas que se observan respecto del año 2002. Sin duda alguna, la ausencia de políticas explícitas de redistribución del ingreso y de una apuesta estratégica a un nuevo proyecto de Nación Industrial, son las claves para modificar esta situación y reconstruir esa potente noción de futuro que históricamente tuvo la sociedad argentina. Mientras tanto, la presentación de los datos aquí expuestos como triunfos altisonantes descansan más en los cambios al interior del propio sistema político y en la importante distancia entre el esquema electoral oficial y la dispersión de las restantes fuerzas. Lo que agiganta el triunfo oficial no es la “participación de la sociedad” sino las derrotas, a manos de Kirchner, de Duhalde, Barrionuevo y Menem, así como el hecho de que prácticamente ninguna fuerza de oposición supera el 10% de los votos (el radicalismo en declive apenas llega al 10.5%) (Claudio Lozano, Diputado nacional y director del IDEF-CTA, Buenos Aires, 25.10).

OPINIONES

✓ ALFREDO GARCÍA:

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA

* “Ante una crítica aparecida en *Cash* del 28 de agosto de 2005 (...) sobre la forma cooperativa y el inexorable aburguesamiento de los trabaja-

dores al cual conduce, se demostrará que tal proposición es absolutamente errada. Este yerro conceptual puede surgir, entre otras falencias, de la falta de preocupación por distinguir aquellas organizaciones genuinamente cooperativas, de aquellas formas societarias que bajo el paraguas de la

forma de cooperativas de trabajo han llevado a groseras formas de explotación de los trabajadores, amparadas en regulaciones laxas y controles débiles o inexistentes. Hace más de veinte años el Movimiento Cooperativo viene bregando por la sanción de una Ley de Cooperativas de Trabajo que reconozca la naturaleza especial del acto cooperativo de trabajo y otorgue seguridad jurídica a las relaciones que se entablan entre las cooperativas de trabajo y sus asociados. La esencia cooperativa se diferencia diametralmente de la lógica capitalista. Mientras en esta última prima el peso del capital para formar la voluntad societaria, en la cooperativa la misma se forma por el voto igualitario de los asociados, un socio un voto, independientemente del capital aportado por cada uno de ellos. Bajo ese precepto la organización cooperativa es un ejemplo concreto de propiedad colectiva de los medios de producción. La propiedad colectiva está estrechamente asociada con una forma de gestión específica que garantiza la conducción democrática de la cooperativa a través de preceptos que permiten concretar operativamente estos ideales, y que se encuentran definidos en los valores y principios de la cooperación. La aplicación de los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, junto con los siete principios de asociación voluntaria y abierta, control democrático por los socios (un socio un voto), participación económica de los socios (contribuyen en forma equitativa a la formación del capital), autonomía e independencia, educación, capacitación y formación, cooperación entre cooperativas y preocupación por la comunidad, permiten diferenciar con certeza a las cooperativas genuinas de aquellas que no lo son. Es cierto que las coo-

perativas actúan en una sociedad capitalista y ello las presiona hacia una acumulación compulsiva, pero no menos cierto es que la propia dinámica del desarrollo científico y tecnológico lo exige para mantener la calidad de sus productos y servicios. Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se entiende que la forma más adecuada de enfrentar este desafío es fomentar la propiedad comunitaria, dedicando la mayor parte de los excedentes, si no todos, a ampliar el capital de las cooperativas y no el de sus asociados. Con el mismo sentido, se rechaza la incorporación de capital privado, puesto que ello desvirtúa la esencia cooperativa, aunque algunas cooperativas en la última década, en especial europeas, han echado mano a este recurso. Bajo estos preceptos, el trabajador que se asocia a una cooperativa no se convierte en capitalista, ya que su actividad principal sigue siendo la venta de su fuerza de trabajo, pues el capital social por él aportado es exiguu respecto del capital total de la organización, y participará democráticamente de la misma en tanto y en cuanto ofrezca su trabajo. En el caso de las empresas recuperadas, la organización cooperativa ofrece un modelo de gestión concreto, comprobado en experiencias exitosas a lo largo de todo el mundo, aunque, como sucede en toda organización cooperativa, para convertirse en una experiencia exitosa exige una férrea voluntad de sus asociados, para respetar los valores y principios, en especial los de democracia y asociación voluntaria y abierta. Por la diferenciación sustancial respecto de la organización capitalista, las cooperativas disputan la hegemonía de la sociedad burguesa. No es una anécdota que en todos estos años de gobiernos surgidos del voto ciudadano, se mantenga la prohibi-

ción para que las cooperativas de servicios públicos sean propietarias de sistemas de televisión por cable. Tampoco es ingenua la decisión -fomentada desde la ideología neoliberal- de considerar a las cooperativas como sujetos del impuesto a las ganancias, cuando las mismas son, por definición, entidades sin fines de lucro. Por todo lo expresado, podemos considerar a las cooperativas como verdaderas escuelas de socialismo, que permiten ir acumulando experiencia, voluntad social y subjetividad, ya sea para crear islas de economía solidaria dentro del injusto régimen capitalista, ya sea para enfrentar a dicho régimen, fomentando un cambio que deberá partir de la voluntad de las mayorías que desean otra forma de organizar la producción y la vida de toda la sociedad.” (**Director Cefim - Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos**; TEA, 24-09).

✓ ENRIQUE MARTÍNEZ: MÓDULOS DE PRODUCCIÓN

* “Cash del 9 de octubre pasado publicó 10 medidas posibles para reducir o eliminar la pobreza o la indigencia en el país, recomendadas por otros tantos economistas, de variada ubicación ideológica. Seis tratan de mejorar los ingresos de los pobres a través de diversas formas de subsidio. Dos creen en la tracción de la mayor generación de empleo público o privado. Una quiere achicar el costo de los alimentos reduciendo el IVA. Otra, finalmente, propone regularizar masivamente la situación de dominio sobre la tierra, por parte de los más humildes. Lo notable es que ninguna de ellas, ni siquiera la más sofisticada, que es la última, les asigna ningún papel directo a los pobres, en el intento para dejar de ser tales, salvo buscar

trabajo cuando éste aparezca. (...) ¿Y si se creara un escenario en el que los pobres, organizados en grupos comunitarios -o cualquier grupo que quiera acceder a esa alternativa, aun por encima del nivel mínimo de pobreza- pudieran disponer de los bienes de capital, con asistencia técnica permanente, para producir los bienes básicos, incluyendo la alimentación, la vestimenta y la vivienda popular? El INTI ha estudiado módulos de producción de todos los alimentos componentes de la dieta -como etapa inicial- en el interior de grupos de 150 familias. En esos módulos se aplica tecnología eficiente, quien trabaja cobra un sueldo y quien se lleva mercadería la paga. La inversión en las máquinas y el capital de trabajo para los primeros 30 días no supera los 2.000 pesos por familia. Cada módulo genera 30 puestos de trabajo y el costo final de la canasta de productos, debido a que desaparece la rentabilidad empresaria, se reduce en un 40 por ciento respecto del actual. Hay siete módulos en diverso grado de implementación y seis más en diseño, que abarcarán más de 2.000 familias. Se necesita una organización social de base, alguien que financie los equipos -hoy es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- y quien brinde la asistencia tanto organizativa como técnica -es el INTI-. Es muy complicado de ejecutar. Hay una cultura que cambiar. Hay que sacarse el clientelismo o la dependencia de un puntero de la cabeza. Hay que creer en el otro, a la vez que creer que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, sino que hay unas mejores que otras. Pero con 2.000 millones de pesos -hoy estamos convencidos- se resolvería de modo permanente el problema alimentario de 5 millones de personas, para luego avanzar hacia la vestimenta y la vi-

vienda. Hay una condición fuerte: se debe organizar un sistema de producción que usa el dinero, pero no tiene renta empresaria. No se elimina el mercado, simplemente se acota su vigencia. Así como la educación debería ser de acceso universal y gratuito, así como la salud básica debería estar garantizada, del mismo modo los bienes básicos deberían estar al alcance de todo grupo que quiera poner su esfuerzo en producirlos. La iniciativa -sabemos- entra en conflicto conceptual frontal con la idea del mercado como supremo asignador de los recursos. Lo que sucede es que, en definitiva, ¿queremos de verdad reducir drásticamente la pobreza? En tal caso, los pobres, ¿no deberían tener algo que ver con esto?" (**Presidente del INTI**; Suplemento *Cash*, *Página 12*, Buenos Aires, 16-10)

✓MARÍA SEOANE: 17 DE OCTUBRE

* "(...) Los recuerdos se mezclan siempre, vanos, como si la línea de la pasión y la razón se borrara. Esa frase del padre escondía cosas profundas de la naturaleza del peronismo, anclada en los comienzos de una historia que estalló el 17 de octubre de 1945 pero que se venía incubando en la Argentina. La razón de la historia indicaría, por ejemplo, que millones de argentinos conquistaron derechos sociales inolvidables como vacaciones pagas, derecho a la educación y la salud gratuita y extendida, viviendas económicas, el nivel de empleo más alto de la historia -sólo había un dos por ciento de desocupación entre 1946 y 1952- y la participación de los trabajadores en la riqueza alcanzaba a casi el 51 por ciento del Producto Bruto Interno, la más alta del capitalismo occidental de la posguerra. Y algo

más, algo que haría mítico ese 17 de octubre: miles habían decidido llenar la Plaza de Mayo para incidir en la política como nunca antes lo habían hecho los trabajadores. Perón y Evita habían conquistado su cabeza y su corazón, así simplemente. El peronismo fundado sobre las bases del estado de bienestar de la posguerra tenía sus sujetos políticos mojándose las patas en la fuente. La Argentina conservadora previa había sabido sembrar, en un impulso póstumo después de la crisis de 1930, de cientos de industrias los arrabales de las grandes ciudades. En apenas un lustro a partir de 1940 los obreros industriales se habían triplicado, superando a los rurales. En la política, los sindicatos armados por comunistas y socialistas habían cumplido su función de dar conciencia. Faltaba el Estado omnipotente, un líder con poder (Perón había reunido desde 1943 los cargos de ministro de Guerra, ministro de Trabajo y vicepresidente del general Edelmiro Farrell) y la decisión de miles de sostenerlo y rescatarlo de la cárcel y seguirlo a lo largo de los años. Y si bien miles lo defendieron, otros miles criticaron la pedagogía autoritaria de un régimen insoportable para la vieja Argentina agropecuaria y autoritaria porque había repartido la riqueza en un *fifty-fifty*. El 17 de octubre, entonces, fue el comienzo de esa historia. Fue cuando la democracia política impulsada por el radicalismo se extendió a la democracia social. Fue cuando la Argentina comenzó a ser una república donde los hombres tenían derechos políticos y las mujeres también. Cuando los niños eran privilegiados y cuando los adultos opositores eran perseguidos bajo la ley." (Periodista; *Clarín*, Buenos Aires, 17-10)

☛ POLÍTICA

✓ DERECHOS HUMANOS

* “Con una activa participación de la Argentina, ayer se aprobó en la sede de las Naciones Unidas (ONU) de Ginebra, Suiza, un proyecto de Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que considera a ese delito un crimen de lesa humanidad, de naturaleza imprescriptible. El nuevo instrumento internacional también reconoce el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y recuerda el derecho a conocer la verdad ante esta violación de los derechos humanos, además de establecer la obligación de inculpar las desapariciones forzadas como delito autónomo.” (*La Nación*, Buenos Aires, 23-09)

✓ SANTA VENEZUELA

* “Cuando se estaba a punto de perderlo todo, una operación que se tejó entre Toronto, Caracas y Buenos Aires permitirá que la Argentina conserve al menos por un tiempo más una posición satelital clave. Anik E11 es el satélite canadiense que en semanas ocupará la llamada posición 81, de la que el país iba a ser destronado el próximo 19 de octubre. Por esta salida, que es transitoria, se paga un precio alto para algunos y módico para otros: US\$ 2,1 millones, según pudo saber *Clarín*, de fuentes oficiales y privadas. El contrato con la canadiense Telesat también establece que se aplique la legislación canadiense, algo que Néstor Kirchner suele reprochar. (...) Pero el acuerdo con Canadá prevé el visto bueno del venezolano Hugo Chávez. Ocurre que el Anik ocupa hoy la posición satelital 67 que es de Venezuela y debe desplazarse hacia la 81, para que Argentina no la pierda.” (*Clarín*, Buenos Aires, 24-09)

* “El gobierno de Venezuela confirmó ayer que está listo para concretar la compra de 150 millones de dólares en Boden 2015, los títulos cuya licitación el Ministerio de Economía declaró desierta el pasado miércoles debido a las altas tasas que pretendían los inversores. (...) Pese a las críticas que hizo la oposición, el gobierno de Hugo Chávez defendió la compra de los Boden 2012 (que es la que ya se concretó). Para eso Merentes precisó que con la compra de estos bonos, Venezuela ya ganó 15 millones de dólares. Y sostuvo que ‘aquí no se está regalando nada, porque no sólo ya ganamos, sino que si la economía argentina sigue creciendo, esos bonos pueden apreciarse más, hasta llegar a 96% de su valor.’” (*Clarín*, Buenos Aires, 24-09)

* “El presidente Néstor Kirchner y su par venezolano Hugo Chávez anunciaron anoche un acuerdo por el cual las empresas petroleras PDVSA y Enarsa comprarán 150 estaciones de servicio RHASA, de capitales argentinos, por un monto de 92 millones de dólares. Estos convenios se ampliarán con la asociación de PDVSA con la brasileña Petrobras para intercambiar activos, abriendo la posibilidad de que ambas empresas compartan explotación petrolera, destilería y abastecimiento de estaciones de servicios en los mercados de la Argentina y la Región del Orinoco en Venezuela (una de las mayores reservas de petróleo del continente). La presencia de Kirchner aquí representó un fuerte gesto de apoyo político a su par del Brasil y anfitrión de la Cumbre Sudamericana de Naciones, Inácio Lula da Silva, en momentos en que atraviesa la más profunda de las crisis políticas desde que asumió el poder. (...) Chávez, durante la conferencia de prensa junto al presidente Kirchner antes de la cena, anunció que también invertirá

en la compra de maquinaria agrícola y tecnología desarrollada en la Argentina en lo que consideró 'una alianza estratégica que está rompiendo con los mecanismos imperialistas y neoliberales'." (*Río Negro*, 30-09)

* "Venezuela dispondrá de petróleo propio en la Argentina, una refinera para procesarlo y una cadena de comercialización para vender el combustible. Repsol YPF explorará y extraerá crudo en Venezuela en el que se considera el mayor reservorio de crudo pesado y extrapesado del mundo. Petrobras se asocia a Pdvsa para instalar una gigantesca refinera en el nordeste brasileño, en donde procesará crudo que ambas, también asociadas, extraerán en Venezuela. Enarsa, la novel empresa estatal argentina, será socia local de Pdvsa en la refinación y comercialización. Toda la movida quedó concretada en apenas 24 horas, a través de acuerdos simultáneos firmados en Brasilia entre la tarde del jueves y la tarde del viernes. Tres gobiernos latinoamericanos y un cuarto, el de España, a través de su estrecha vinculación con la firma petrolera participante en los acuerdos, quedaron ligados en una estrategia común de integración que los coloca en el escenario grande del combate petrolero mundial. Un rumbo del que será difícil dar marcha atrás, pero por el que tampoco va a ser fácil avanzar sin confrontar con otros poderosos intereses. Con diferentes intereses y por distintos caminos, los protagonistas principales y secundarios de esta historia llegaron a un punto de encuentro. Punto que podría tener muy pronto nombre propio: Petrosur." (*Página 12*, Buenos Aires, 1-10)

✓ RECUERDOS DEL ESTADO TERRORISTA

* "Los restos de la monja francesa Léonie Duquet y de Angela Ahuad,

secuestradas y desaparecidas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, durante la pasada dictadura militar (1976-1983), fueron inhumados hoy en los predios de la iglesia de Santa Cruz después de una ceremonia en esa sede religiosa en la que participaron organismos humanitarios, Madres de Plaza de Mayo y cientos de familiares de desaparecidos. (...) Organizaciones de derechos humanos en Francia despidieron también a la religiosa en una ceremonia simultánea desde la iglesia Española de París. La procesión para enterrar los restos de Duquet fue encabezada por sus sobrinas -también religiosas- Geneviève y Noelle Bellepoid, quienes arrojaron tierra de la ciudad francesa de Charquemont, donde nació la monja, en la tumba de la iglesia de Santa Cruz que fue cubierta de rosas rojas. 'Aquí son los oprimidos quienes reaccionan y quieren liberarse. No podemos quedar insensibles. Por esto tenemos que comprometernos con ese pueblo. Callarse hoy sería cobarde, sería la muerte', dice la lápida colocada en la tumba de Duquet. (...) Duquet y Alice Domon integraban la congregación Misioneras Extranjeras, que desde la iglesia Santa Cruz colaboraba con las Madres de Plaza de Mayo. (...) En tanto, diversas organizaciones humanitarias repudiaron en estas horas la decisión del juez de San Martín, Alberto Suares Araujo, quien negó a la Federación Juvenil Comunista el carácter de querellante en la causa en la que se investiga el asesinato de Floreal Avellaneda, un niño de 14 años secuestrado, torturado, y arrojado al mar 'empalado', como fue encontrado su cadáver, el primero que apareció en las costas del Uruguay durante la pasada dictadura. El niño 'fue asesinado por negarse a denunciar a sus compañeros de la Fede', como sostuvo la madre." (*La Jornada* -México-, 26-09)

* “En nombre de Francia, quiero rendir un homenaje solemne a la hermana Léonie (...) Francia puede enorgullecerse de contar entre los suyos a la hermana Léonie, quien, por una causa justa, sacrificó su vida en la Argentina, país al que amaba tanto como su tierra natal’, afirmó Chirac en un mensaje divulgado hoy por el Elíseo. (...) ‘No se construye el futuro sobre el olvido. Sólo puede ser construido sobre la memoria’, concluyó Chirac.” (*Terra Argentina*, 26-09)

✓FUSILADOS DEL 56

* “Luego de varios años y distintos gobiernos, el ministerio de Economía puso a disposición los fondos para indemnizar a los familiares de los civiles y militares fusilados en 1956, que se habían alzado contra el gobierno de facto instaurado tras el golpe del 16 de setiembre de 1955.” (*Clarín*, Buenos Aires, 6-10)

✓IGLESIA-GOBIERNO: NUEVO ROUND

* “Néstor Kirchner montó ayer un acto de campaña dentro de la basílica de Luján e improvisó el palco en el altar. Con el entorno imponente del templo y ante la imagen de la Virgen de Luján, el Presidente atacó a algunos sectores de la Iglesia al decir que ‘utilizando la fe y utilizando a Dios se hicieron genocidios y cosas horribles’ en la Argentina. Aclaró que es ‘un hombre católico’, pero advirtió que “ello no significa que muchas veces no coincida con las palabras de muchos pastores’. (...) el obispo emérito de Morón, monseñor Justo Laguna, consideró que la basílica de Luján ‘no era el lugar’ para que el Presidente expresara sus cuestionamientos, pero sostuvo que en la década de los setenta ‘hubo hombres de la Iglesia con

un papel lamentable’. ‘Hay un mundo entre el Episcopado de hoy y el Episcopado de aquel entonces, donde un grupo muy chico defendíamos los derechos humanos y la mayoría, incluso de la jerarquía, miraron al costado’, sentenció el prelado.” (*La Nación*, Buenos Aires, 13-10)

* “El obispo emérito de Resistencia, monseñor Carmelo Giaquinta, confesó que ‘sintió un gran disgusto’ por el episodio que Néstor Kirchner protagonizó en Luján, donde exhortó desde el altar de la basílica a que los argentinos lo acompañaran con su voto.” (*La Nación*, Buenos Aires, 21-10)

✓CÁRCELES

* “Si el presidente Néstor Kirchner no le hubiera dicho que su política carcelaria fracasó y que es imprescindible introducir cambios que privilegien el respeto por la vida de las personas privadas de su libertad, Felipe Solo ni siquiera hubiera dispuesto la intervención a la cárcel de Magdalena, donde 32 personas encerradas dentro del pabellón de baja peligrosidad murieron por asfixia el sábado. Incapaz de sentir el dolor ajeno, el gobernador bonaerense apenas puede pensar en su propia conveniencia. Pero de tanto negar los hechos, ya ni sabe lo que le conviene y necesita que otros se lo digan. La Comisión Provincial por la Memoria fue recibida ayer por el jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández, lo cual indica la gravedad que el gobierno nacional reconoce a la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Enterado de la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte y los demás integrantes de ese organismo creado por una ley provincial, Kirchner se sumó a la mesa. Fernández les había dicho que el episo-

dio de Magdalena constituía un punto de inflexión que tornaba impostergable la toma de decisiones y que le había comunicado al gobernador que las cosas no podían ser iguales después de 32 muertes.” (*Página 12*, Buenos Aires, 19-10)

✓ LUCTUOSO FINAL PARA CRIMINAL SERBIO

* “Quienes sobrevivieron a las masacres de Cuska (1998) y Pec (1999), en el conflicto de los Balcanes, cuentan que Nebojsa Minic inspiraba miedo y se presentaba con su apodo: “El Muerto”. El martes pasado, en la última entrevista que tuvo con periodistas, su aspecto dejaba en claro que esa muerte estaba más cerca que nunca. Ayer a las 8.45, el serbio detenido en Mendoza y acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, murió en una sala común del hospital Lagomaggiore. Padecía cáncer, sida y había resistido algunas complicaciones cardíacas. Minic ingresó a Mendoza en setiembre de 2003, aunque nunca quedó claro en qué condiciones y con qué identidad. Para los efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC), lo hizo en un micro y acompañado de una prostituta chilena. Con apenas días en nuestra provincia, le robaron todos sus documentos y una cifra cercana a los siete mil dólares. Ahí comenzó a tejerse la historia que terminaría con una denuncia en su contra.” (*Los Andes -Mendoza-*, 21-10)

☛ ECONOMÍA

✓ LAVAGNA: MINISTRO DEL AÑO

* “Roberto Lavagna llegará hoy a Washington decidido a pasar lo más desapercibido posible durante la asamblea anual del FMI y el Banco

Mundial. Ya anticipó que no viene a los Estados Unidos con la expectativa de retomar negociaciones con el FMI. (...) Sin embargo, Lavagna ya envió un mensaje crítico hacia el FMI que ayer fue leído con atención en varios despachos cercanos al de Rodrigo Rato, el jefe del organismo. ‘En algunos, no en todos, los departamentos del Fondo ha existido una clara tendencia a transformar a la institución en *lobbista* de los acreedores de la Argentina’, se quejó el ministro. El comentario forma parte de una entrevista que le hicieron para la publicación especializada *Emerging Markets*, que se publicó ayer y que se distribuye gratis entre todos los asistentes a la reunión anual. El reportaje ocupa un lugar destacado en la publicación porque Lavagna fue elegido como ‘El ministro de Economía del año’ en América latina. El premio, aclara la publicación, está basado sobre las nominaciones que hicieron los bancos de inversión, los analistas y los economistas.” (*Clarín*, Buenos Aires, 23-09)

✓ EL SUPERÁVIT FISCAL TIENE COSTOS

* “Más del 50% del superávit fiscal previsto para 2006 se alcanzará por la licuación de las jubilaciones y de los salarios del sector público, dado que, al menos según el presupuesto, no tendrán ajustes pese a la inflación esperada, que aportará una mayor recaudación. En el proyecto oficial no se prevé un alza de los haberes ni de los sueldos: tal como lo sostuvo el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, en una conferencia que dio días atrás, el aumento de los montos para ese concepto con respecto a 2005 sólo responde a lo que demanda cumplir con las mejoras dispuestas durante este año. Según destaca un informe

del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), si las jubilaciones hubieran aumentado al ritmo de los precios, se deberían haber presupuesto \$ 33,9 mil millones para su pago, en lugar de los \$ 28,8 mil millones previstos. En el caso de los salarios, el crecimiento a igual ritmo que la inflación habría llevado el monto de \$ 17,5 mil millones a \$ 21,9 mil millones. Por eso, el estudio advierte que el superávit primario de \$ 17,8 mil millones para 2006 se logra, en más de la mitad del monto, por la licuación de jubilaciones y sueldos.” (*La Nación*, Buenos Aires, 10-10)

* “La Argentina registró un superávit primario de 1.617 millones de pesos (544 millones de dólares) en septiembre, dijo el jueves el Ministerio de Economía, un resultado en línea con las expectativas de los analistas. El saldo fiscal positivo acumulado entre enero y septiembre es de 16.886 millones de pesos, frente al objetivo anual fijado por el gobierno de 18.326,1 millones. Los especialistas consultados cada semana por el Banco Central esperaban un superávit primario (que excluye el pago de servicios de deuda) de 1.601 millones de pesos en septiembre y para todo 2005 estiman que crecerá hasta 19.578 millones. (...) Las claves del resultado fiscal son un fuerte aumento de los ingresos por tributos ligados al consumo doméstico y a las exportaciones junto con un control del gasto público.” (*Reuters*, 20-10)

✓ SUBSIDIOS

* “Entre subsidios directos e indirectos, el Estado repartirá el año próximo alrededor de \$ 25.000 millones. En el universo de beneficiados figuran los ferrocarriles, las empresas de transporte automotor, el campo, la indus-

tria, las compañías de energía, los desocupados, los pobres, los consumidores de electricidad y de gas. Una parte de las subvenciones se adjudica mediante descuentos impositivos. El año próximo se distribuirán \$ 13.329 millones, una cifra 13,6% superior a la de 2005. El Estado también dará ayudas directas. La administración pública nacional otorgará \$ 10.443 millones al sector privado y a empresas públicas, una cifra similar a la de este año. En forma paralela, los fondos fiduciarios repartirán 1139 millones (...).” (*La Nación*, Buenos Aires, 23-10)

➡ EMPRESAS

✓ AGUA QUE NO HAS DE BEBER...

* “Aguas Argentinas pidió al Gobierno la rescisión de su contrato de concesión. Fue luego de una asamblea en la cual cuatro accionistas (las francesas Suez y Vivendi, la española Agbar y la inglesa Anglian Water) votaran por esa postura, con la oposición de otros dos socios (el Banco de Galicia y los empleados), en tanto que el Banco Mundial se abstuvo. Sin embargo, la empresa podría quedarse al frente del servicio hasta fines del verano, administrando el período más crítico, cuando puede haber cortes y bajas de presión. Y resolviendo así la mayor de las preocupaciones del Gobierno.” (*Clarín*, Buenos Aires, 23-09)

* “El embajador de Francia en la Argentina, Francis Lott, culpó al gobierno de Néstor Kirchner por el retiro del Grupo Suez de Aguas Argentinas y denunció la actitud ‘populista’ y ‘un poco sesenta y ochista’ (en alusión al Mayo francés de 1968) del presidente. El gobierno argentino adoptó en este asunto ‘una posición populista, un poco sesenta y ochista, que puso en dificultades nuestras empresas’,

declaró el embajador en un discurso sobre las relaciones bilaterales. El diplomático empleó la palabra del argot popular 'soixante-huitard (sesenta y ochista)' para referirse a quienes participaron de las jornadas de la rebelión estudiantil y obrera en 1968. 'Ocurre a menudo que empresas extranjeras son ahorcadas por los gobiernos', agregó el diplomático ante algunos periodistas y representantes del Arri, sigla de una asociación francesa cuya misión es favorecer que Francia tome en cuenta las 'realidades internacionales'. El embajador de Francia admitió que Aguas Argentinas ganó unos 5.600 millones de dólares entre 1993 y 2001, pero afirmó que durante ese período sólo 106 millones de dólares fueron distribuidos entre los accionistas (de los cuales Suez es el principal), ya que la mayoría (53%) de estos dividendos le correspondía al Estado argentino. La senadora Cristina Fernández salió al cruce de las declaraciones del francés, a quien acusó de ser 'gestor' de los 'intereses económicos' de la empresa Suez y le dijo que "tiene que saber que está en un país soberano donde las decisiones las toman el presidente, el Parlamento y la Justicia". (*La Capital* -Rosario-, 6-10)

✓PYMES

* "El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley por el que se le otorgará beneficios impositivos a las pymes, con el fin de incentivar la inversión productiva. Según ese proyecto, los accionistas de las pequeñas y medianas empresas quedarán exentos de pagar el impuesto a las Ganancias sobre los dividendos distribuidos durante los dos próximos ejercicios económicos. Y también se eximirá a este sector del pago del im-

puesto a las Ganancias en el caso de que se adquieran bienes de capital." (*Infobae*, 29-09)

* "El Estado comprará bonos de deuda privada emitidos por pequeñas y medianas empresas, destinados a financiar proyectos de inversión. Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Roberto Lavagna. La suscripción se hará a través del Fondo Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa (Finapyme), que destinará a ese fin un total de 40 millones de pesos. La decisión oficial implica el compromiso de adquirir hasta el 80% de los bonos (Obligaciones Negociables) emitidos por las pymes que tengan cotización pública (Bolsa de Comercio), siempre que los inversores privados no alcancen a cubrir la totalidad de la emisión. 'La intención es ayudar a introducir esta modalidad, darle impulso, para en algún momento poder prescindir de la ayuda oficial', explicó Lavagna, flanqueado por el secretario de Industria, Miguel Peirano, y por el subsecretario de Pymes, Federico Poli. También participaron de la presentación del mecanismo dirigentes de la Bolsa y empresarios de las pymes." (*Clarín*, Buenos Aires, 7-10)

☛ CAMPO

✓CRECEN LAS EXPORTACIONES DE LÁCTEOS Y CARNES

* "Las ventas externas de productos lácteos concretadas entre enero y agosto de este año crecieron 22 y 34 por ciento en volumen y divisas, respectivamente y en relación con igual lapso de 2004, y dejaron ingresos al país por un monto superior a los 400 millones de dólares." (*Infobae*, 6-10)

* "Las ventas externas de carne vacuna fresca, concretadas entre enero

y setiembre de este año, se incrementaron 27 y 30 por ciento en volumen y divisas, respectivamente, y en relación con igual lapso de 2004, y dejaron ingresos al país por un monto superior a los 996 millones de dólares. Así se desprende de datos oficiales que se conocieron ayer, donde se puntualiza que en ese período el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fiscalizó exportaciones del producto por 434.387 toneladas y 996.958.000 dólares, entre cortes Hilton, carnes frescas, carnes procesadas, menudencias y vísceras.” (*La Nueva Provincia* -Bahía Blanca-, 20-10)

✓ **LOS CAMPOS PIERDEN FERTILIDAD**

* “A pesar de las sucesión de cosechas récord, la fertilidad natural de los campos argentinos está en baja. El tema es que los cultivos, para desarrollarse, extraen nutrientes del suelo, pero los productores sólo reponen una pequeña parte de ellos a través de los fertilizantes. Un estudio llevado a cabo por la asociación civil Fertilizar mostró recientemente cuál es la situación en los tres principales nutrientes de los suelos: nitrógeno, fósforo y azufre. Y llevó a la entidad a afirmar que ‘todavía nuestras pampas son fértiles, pero ¿hasta cuándo?’.” (*Clarín*, Buenos Aires, 6-10)

✓ **DENUNCIA CONTRA MONSANTO**

* “El secretario de Agricultura de la Argentina, Miguel Campos, denunció ayer ante la Comisión Europea los ‘abusos’ en que estaría incurriendo la firma norteamericana Monsanto, por querer cobrar derechos de patente a los compradores de soja transgénica argentina. En una reunión con la comisaría europea de Agricultura, Ma-

riann Fischer Boel, Campos presentó documentos para demostrar ‘las prácticas monopólicas abusivas’ de la multinacional contra los importadores europeos de derivados de soja. En concreto, expuso los perjuicios que suponen los procedimientos judiciales de Monsanto contra importadores europeos de harinas de soja de la Argentina. La compañía estadounidense ha emprendido hasta ahora acciones en Dinamarca y Holanda. (...) La comisaría europea de Agricultura dijo comprender la preocupación argentina y se comprometió a informar a los países de la Unión Europea sobre este problema, así como al resto del Colegio de Comisarios de la UE, según informaron a la agencia EFE fuentes comunitarias.” (*Clarín*, Buenos Aires, 7-10)

✓ **MOVILIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN AGRARIA**

* “Un importante número de ruralistas, nucleados en la Federación Agraria Argentina, realizaron ayer una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para hacer conocer en la ciudad la crítica situación que atraviesan pequeños productores del interior y en señal de protesta regalaron frutas y verduras. (...) En declaraciones, Buzzi explicó que ‘nos movilizamos para reclamar, para que los candidatos que sean electos el 23 de octubre tengan en cuenta la realidad del campo’, sostuvo el dirigente.” (*Contacto Rural*, 13-10)

✓ **LA PATRIA SOJERA**

* “Los agricultores argentinos volverán a apostar fuerte por la soja en esta campaña: sembrarán un millón de hectáreas más con esta oleaginosa que el año pasado, batiendo un nuevo récord de área implantada. Y, mientras la siembra avanza en el país,

ayer se registró una inesperada suba de precios. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este año se sembrarán con soja 15,6 millones de hectáreas, muy por encima de las 14,6 millones de hectáreas del año pasado. Así, la soja se consolida como el principal cultivo del país y supera más del 50% de la superficie total con granos en la Argentina." (*Clarín*, Buenos Aires, 13-10)

INDICES

✓ TODO CRECE

* "Los números de la economía le siguen proporcionando buenas noticias al Gobierno. En este caso, el ahorro fiscal, que ya superó las expectativas para este año, y el empleo en blanco, que continúa su recuperación en el país, fueron los motivos para celebrar en la Casa Rosada. La secretaria de Hacienda anunció que el superávit fiscal primario sumó entre enero y agosto 15.629 millones de pesos y superó así la pauta de 14.300 millones prevista para todo el año. Ese resultado positivo se consiguió luego de que las cuentas de agosto cerraran con una ganancia de 1.845,5 millones de pesos, tras consolidar un 'piso' de recaudación tributaria de 10.000 millones. En tanto, el empleo privado formal en las principales ciudades del país aumentó un 9,5 por ciento entre agosto y el mismo mes del año pasado. El incremento fue impulsado por la construcción, cuyos planteles crecieron un 34,8 por ciento en ese mismo lapso." (*InfoRegión*, 21-09)

* "La recaudación impositiva de septiembre ascendió a 9.886,9 millones de pesos, lo que representa un incremento del 24 por ciento con relación a igual mes del año pasado, impulsada por un alza récord en el impuesto al valor agregado (IVA), según anunció

ayer el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad. Con este resultado, en nueve meses los ingresos tributarios alcanzaron a 87.949 millones de pesos, un 18,6 por ciento por encima de lo recolectado en el mismo período de 2004 y un 9 por ciento más que los 80.347 millones presupuestados para esta etapa. (...) El impuesto a las Ganancias aportó 2.075,1 millones de pesos, lo que implica un alza de 38,4 por ciento." (*La Nueva Provincia* -Bahía Blanca-, 4-10)

* "La canasta básica total (CBT) llegó a \$ 801,82 durante septiembre pasado. Ese es el monto que necesita una familia tipo para superar la línea de pobreza, lo que implica una suba de un 1,3 por ciento respecto de agosto, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)." (*La Nación*, Buenos Aires, 8-10)

* "La construcción y refacción de viviendas privadas y las obras viales del Gobierno siguen creciendo. Quienes tienen ahorros compran autos, que son más caros en pesos y más baratos en dólares que hace cinco años. Los fabricantes de productos agroquímicos y de aceites aprovechan la explosión de la soja para vender como nunca antes. Todo el contexto volvió a conjugarse en septiembre para lograr un nuevo repunte de la actividad industrial: creció un 8,6% en relación con el mismo mes del año pasado y un 1,2% si se lo compara con agosto de este año." (*La Nación*, Buenos Aires, 19-10)

✓ LA POBREZA

* "Unos 14,9 millones de argentinos no cubren las necesidades esenciales de vestimenta, transporte, educación y salud. Son pobres. Casi un tercio de

ellos, 5,2 millones, ni siquiera tienen para alimentarse. Son indigentes. La realidad sigue espantando, pero no es tan mala como en los últimos tiempos. El crecimiento económico y la creación de empleo llevaron a que el índice de pobreza se redujera del 40,2% de las personas en el segundo semestre del año pasado al 38,5% en el primero de 2005, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en los 28 principales aglomerados urbanos. La indigencia también se redujo: del 15% de la población al 13,6%. Si se miden las tasas por hogares, la pobreza bajó del 29,8% al 28,4% y la indigencia, del 10,7% al 9,5 por ciento.” (*La Nación*, Buenos Aires, 23-09)

✓ EL REPARTO DE LA RIQUEZA

* “En los últimos 12 años, por el aumento del desempleo, el trabajo en negro, la precarización laboral y el deterioro salarial, la participación de los trabajadores en la economía tuvo una caída casi ininterrumpida: bajó del 40,14% del PIB a apenas el 22,9% en 2003, cuando tocó fondo. Pero en 2004 tuvo una leve recuperación, al subir a 23,87%. Y este año se mantendría en esos valores, según sostiene un estudio del CEPED (Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo), un organismo que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.” (*Clarín*, Buenos Aires, 10-10)

☛ SOCIEDAD

✓ ABUELAS

* “Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este martes el hallazgo de otro nieto, que nació en 1977 en el centro clandestino de detención de la comisaría quinta de La Plata y fue

sustraído a sus padres, que aún permanecen desaparecidos. Se trata de un joven de 28 años que se sometió al análisis de ADN genético, los cuales revelaron que es hijo de Inés Ortega (17) y Rubén Fosatti (22), ambos vistos por última vez con vida en la comisaría 5ta. platense, donde ella, el 12 de marzo de 1977, dio a luz un varón al que llamó Leonardo. Ortega era obrera textil, estudiante, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y llevaba un embarazo de 7 meses de gestación al ser secuestrada, mientras que Fosatti trabajaba de obrero metalúrgico y estudiaba el Profesorado de Historia en la Universidad de La Plata.” (*Terra Argentina*, 21-09)

✓ MURIÓ LA CÉLEBRE FOTÓGRAFA ANNEMARIE HEINRICH

* “La fotógrafa alemana Annemarie Heinrich, radicada en la Argentina desde 1926 y testigo durante más de medio siglo de la vida cultural del país, murió a los 93 años de edad en Buenos Aires, informaron sus familiares. Los restos de Heinrich serán cremados mañana en el Cementerio de la Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires. La fotógrafa, declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, nació el 9 de enero de 1912 y arribó a la Argentina cuando tenía 14 años, junto con su padre -un violinista alemán que perdió un brazo durante la Primera Guerra Mundial-, su madre y una hermana.” (*Ansa*, 22-09)

✓ TRAGEDIA EN LA ANTÁRTIDA

* “Socorristas argentinos suspendieron hoy la búsqueda de dos compatriotas desaparecidos hace 12 días en la Antártida y se sumaron a las tareas de rescate de tres militares chilenos que corrieron similar suerte en el con-

tinente helado. Los miembros del Ejército que desde el pasado día 17 rastrean de manera infructuosa a un biólogo y un marino argentinos caídos en una grieta de un glaciar detuvieron sus labores y se trasladaron a unos 17 kilómetros para ayudar al rescate de los chilenos.” (*Prensa Latina* -Cuba-, 29-09)

✓APOYO A DEMANDA DEL PUEBLO WICHI

* “El director general de la FVSA (Fundación Vida Silvestre) Javier Corcuera, el director de Campañas de Greenpeace Emiliano Ezcurra; Juan Carr de la Red Solidaria, los representantes wichi y el actor Ricardo Darín expusieron hoy a la mañana al Presidente Kirchner y al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la situación de la reserva de General Pizarro en la provincia de Salta que es actualmente propiedad de empresarios privados y está a punto de ser desmontada para darle un uso agrícola. El objetivo de la FVSA, Greenpeace, la Red Solidaria y la Administración de Parques Nacionales -que trabajan juntos en esta campaña para salvar la reserva- es conseguir comprar algunas de las tierras vendidas para convertirlas en un área protegida bajo la órbita del Gobierno nacional. ‘Estamos cerca de un acuerdo a partir de la propuesta hecha por Parques Nacionales al gobierno de Salta’ señaló Javier Corcuera a la salida del encuentro. Aparentemente tanto el gobierno de la provincia como los empresarios y actuales dueños, estarían dispuestos a ceder parte de las tierras para conseguir la meta y recuperar el área. Allí vive una comunidad wichí de alrededor de 60 personas cuya supervivencia depende de los recursos que le brinda el bosque y que también pelea junto con

las organizaciones por sus derechos.” (*Misiones on line*, 30-09)

✓ARGENTINA A LA VANGUARDIA DE LA MEDICINA NUCLEAR

* “El centro de medicina nuclear más avanzado de Sudamérica, en el se podrán diagnosticar enfermedades antes de que sean clínicamente detectables, se comenzó a construir ayer en el barrio porteño de La Paterナル. La obra es una iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) apoyada por el Ministerio de Planificación Federal, que aportó 5 millones de dólares para contar con la tecnología a partir del primer semestre del año próximo. Los equipos fueron aportados por la Secretaría de Ciencia y Técnica y se instalarán en terrenos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), frente al Instituto Nacional de Oncología Dr. Angel Roffo, en la esquina de las avenidas Nazca y San Martín. El centro llevará el nombre de ‘Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear’ y tendrá varios tomógrafos, algunos capaces de analizar la constitución física y hasta la anatomía de los pacientes, ya que los de uso común sólo pueden revisar tejidos.” (*La Razón*, 7-10)

✓ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

* “La marcha del Encuentro Nacional de Mujeres que se efectuó en Mar del Plata reclamó en forma masiva por el derecho a un aborto ‘legal, seguro y gratuito’. Hubo polémicas fuertes en los talleres con grupos religiosos y antiabortistas y también hubo una pequeña contramanifestación. ‘Por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito’, decían los pañuelos verdes; y lo cierto es que no hubo un solo cen-

tímetro en los muchos metros cuadrados que ocupó la marcha de cierre del XX Encuentro Nacional de Mujeres -más de ocho compactas cuadras de manifestantes- sin ese distintivo que unificó las voces más diversas. La disidencia a esta consigna, que quisieron meter como una cuña grupos de mujeres católicas evidentemente organizadas -sus argumentos se calcaban de taller en taller- en las conclusiones de cada debate, desapareció literalmente cuando la marea verde empezó a avanzar por el centro de Mar del Plata. Y aunque el coro de voces gritó también su repudio a la visita de George Bush a esta ciudad, se hizo agitando los mismos pañuelos, para que no haya 'ni una muerta más por abortos clandestinos', como decía la bandera detrás de la que todas se encolumnaron." (*Total News Agency*, 10-10)

✓SE FUE UN CHICO DEL PUEBLO

* "Le decían Carlitos o el Curita, pero su verdadero nombre era Carlos Cajade. Toda la semana que pasó entre el ajetreo de la campaña electoral, la gente de La Plata vio desfilar columnas de gente humilde, sobre todo muchos chicos y adolescentes con pancartas que decían 'Fuerza Carlos Cajade', pero Carlitos no era un candidato. Nadie sabe cómo se enfrenta a la muerte o cómo se la detiene o cómo se le explica que es injusta, cómo se la convence de que pare, que dé marcha atrás. Entonces la gente hizo manifestaciones contra la muerte y misas por el Curita, que se murió de una muerte sorda el sábado y fue velado el domingo en su Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, para chicos en situación de calle. Carlos Cajade había fundado ese hogar, en 643, entre 12 y 13 de La Plata, y fue secretario general del Movimiento de

Chicos del Pueblo, enrolado en la CTA." (*Página 12*, Buenos Aires, 25-10)

☛ JUSTICIA

✓EL SENADO DESTITUYÓ A BOGGIANO

* "El Senado destituyó y, de manera inesperada, también inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos al juez de la Corte Antonio Boggiano, el último de los integrantes de la llamada 'mayoría automática' menemista que permanecía en el alto Tribunal. La decisión, apoyada por peronistas, radicales y aliados, fue contundente en todos los cargos referidos al caso Meller -el aval de la Corte a un millonario pago a esa empresa por la impresión de guías telefónicas- que obtuvieron bastante más de los dos tercios necesarios. La destitución de Boggiano se resolvió en un momento de máxima tensión, horas después de que el juez acusara al Gobierno de traicionarlo y de que la Corte de conjuces lo restituyera en el cargo, lo que duró apenas 24 horas. Ayer, algunos conjuces dejaron trascender que volverían a avocarse al tema para tratar 'el fondo de la cuestión', lo que dejaría abierta la puerta a un serio conflicto de poderes." (*Clarín*, Buenos Aires, 29-09)

✓ASESINATOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001

* "A pesar de la parálisis que afecta la investigación sobre la masacre del 20 de diciembre de 2001, la Cámara Federal ordenó que cuatro policías volvieran a la cárcel hasta que se inicie el juicio oral en su contra por el asesinato de Alberto Márquez, un dirigente del PJ bonaerense, y las lesiones de los jóvenes Martín Galli y Pau-

la Simonetti. Además, los camaristas de la sala II ordenaron a la jueza federal María Servini de Cubría que enviara de inmediato esa parte de la investigación al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para su enjuiciamiento. La causa sobre la muerte de cinco manifestantes y centenares de heridos durante la represión que acompañó la caída de Fernando de la Rúa fue dividida en partes, en teoría, para agilizarla, pero se está diluyendo con el paso del tiempo: sólo hay cuatro policías detenidos, fueron liberados los acusados del homicidio de Gustavo Benedetto y las responsabilidades políticas también parecen desvanecerse." (*Página 12*, Buenos Aires, 1-10)

✓TERRORISMO DE ESTADO

* "La Cámara Federal de Resistencia ordenó investigar a dos fiscales de esa ciudad que están acusados de haber participado de torturas durante la última dictadura militar. (...) En la misma resolución, el tribunal chaqueño ordenó que regresaran a prisión ocho represores." (*Página 12*, Buenos Aires, 1-10)

* "Un ex miembro de Inteligencia del ejército argentino denunció el viernes que los cuerpos de decenas de desaparecidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 fueron enterrados en tambores de metal en una cantera de arenilla en las afueras de Buenos Aires. Según la denuncia del ex oficial Francisco Benzi, difundida por la agencia de noticias privada DyN, los restos de las personas secuestradas por las fuerzas de seguridad eran colocados en tambores de 200 litros 'con un producto químico y se los hacía desaparecer'." (*El Nuevo Herald* - Miami-, 1-10)

* "Bignone, quien cumplía prisión domiciliaria desde 1999, recuperó la li-

bertad ayer, miércoles, junto al ex jefe de la Armada Rubén Franco por una resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires. La medida también benefició al ex dictador Jorge Videla y a otros cinco jefes de la dictadura militar (1976-1983), quienes sin embargo seguirán en prisión por otras causas sobre violaciones de los derechos humanos que pesan en su contra. Los jueces del tribunal de segunda instancia argumentaron que los plazos de las prisiones preventivas de los procesados han prescrito y que su prórroga vulneraría el plazo 'razonable' que prescribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (*Terra Argentina*, 20-10)

✓MASACRE DE AVELLANEDA:

SORPRESIVO PRIMER CONDENADO

* "El primer condenado por los hechos ocurridos cuando la masacre de Avellaneda no fue el comisario Alfredo Fanchiotti ni ninguno de los funcionarios que tuvieron bajo su mando el operativo de represión, sino un manifestante que intentó frenar a la policía. Hernán Gurián, un estudiante que intervino para que la policía no siguiera haciendo detenciones dentro del hospital Fiorito, donde los familiares de los heridos se habían reunido luego de la represión, recibió ayer una sentencia de 18 meses de prisión, por 'atentado y resistencia a la autoridad'. El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Raúl Calvante." (*Página 12*, Buenos Aires, 1-10)

✓EL EX JUEZ VÁZQUEZ NO SABE DONDE PONER SUS AHORROS

* "El ex juez de la Corte Suprema intentó una defensa: 'Con el dinero mío -le salió- hago lo que quiero'. Adolfo

Vázquez respondió de este modo a la investigación encarada por la Unidad de Investigación financiera del Ministerio de Justicia (UIF) a pedido de un banco de Luxemburgo en el que el ex magistrado intentó infructuosamente en el mes de abril abrir una cuenta para depositar nada menos que sus ahorros de un millón y medio de dólares. (...) El episodio del depósito comenzó el 18 de abril de 2005, cuando Vázquez se presentó con su hija en un banco de Luxemburgo para abrir una cuenta con un pasaporte español y un domicilio uruguayo." (*Página 12*, Buenos Aires, 4-10)

INTERNACIONALES

✓SIMON WIESENTHAL

* "El 'cazador de nazis', Simon Wiesenthal, murió en Viena, Austria, a los 96 años de edad. Wiesenthal, quien estuvo detenido en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, dedicó la mayor parte de su vida a la búsqueda de los responsables del holocausto. Se estima que llevó a más de 1.100 criminales de guerra ante la justicia en las décadas de la posguerra." (*BBC Mundo - Inglaterra-*, 20-09)

✓ESTADOS UNIDOS

* "Que florece la corrupción y el compadrazgo en Washington ya no es noticia. Pero sí que se exhiba a tal extremo que ahora empieza a tener costos en los niveles más altos del gobierno. Hoy el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, fiel aliado de George W. Bush y cabeza de la revolución ultraconservadora, fue obligado a renunciar a ese puesto cuando un gran jurado en Texas lo acusó formalmente de conspiración en una manio-

bra ilícita de financiamiento de campañas electorales." (*La Jornada -México-*, 29-09)

* "El alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, anunció el martes el despido de alrededor de 3.000 trabajadores del Ayuntamiento -la mitad de los empleados públicos- por la falta de fondos necesarios para pagar los salarios tras la catástrofe causada por el huracán Katrina. (...) El alcalde indicó que habló con bancos locales y otras instituciones financieras en busca de recursos, pero que fue en vano. El reverendo Jesse Jackson, del Partido Demócrata, tachó la decisión de 'inmoral'. Estimó que era 'inaceptable' dejar sin trabajo a los supervivientes del huracán y preguntó dónde se encuentra el dinero." (*Gara -País Vasco*, 6-10)

* "El ex ministro palestino de Información Nabil Chaath, reveló a la BBC de Londres una conversación en la que el mandatario estadounidense le confió que su decisión de invadir a Iraq había obedecido a un 'mandato divino'. Según Chaath, Bush dijo: 'Dios me ha dicho: George, ve y lucha contra los terroristas en Afganistán, y lo hice. Dios me dijo también, George, pon fin a la tiranía en Iraq, y lo hice. Y ahora siento aún la palabra de Dios que me dice: da su Estado a los palestinos y a los israelíes su seguridad, y logra la paz en Oriente Medio. Y, por Dios, yo lo haré'. El presidente estadounidense habría pronunciado esas palabras durante una reunión mantenida en junio de 2003 en la localidad costera egipcia de Sharm El Sheik, donde también estuvo presente el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, quien recordó haber oído declarar a Bush en dicha reunión: 'Tengo una obligación moral y religiosa. Por tanto voy a

lograr un Estado palestino'." (*Total New Agency*, 7-10)

✓ VENEZUELA INICIA LA REFORMA AGRARIA

* "El presidente venezolano, Hugo Chávez, aterrizó ayer en un helicóptero en una estancia del estado de Barinas, en el centro del país y, desde un latifundio intervenido, afirmó que su gobierno repartiría esas tierras entre campesinos y una empresa estatal. Así, el mandatario anunció el lanzamiento de una polémica reforma agraria, que de inmediato generó en distintas ciudades protestas y marchas de la oposición, cuyos líderes la consideran una violación al derecho de propiedad. (...) El presidente aseguró que enviará al Ejército contra quienes se atrincheren en sus haciendas y desacaten la orden de entregar sus propiedades, como en La Marqueseña. Afirmó que 'todas las tierras son propiedad del Estado' y argumentó que, por una ley del año 1821, los propietarios debieron registrar sus bienes pero no lo hicieron, por eso 'nadie en Venezuela es dueño de ningún terreno'." (*Clarín*, Buenos Aires, 26-09)

✓ IRA: ADIÓS A LAS ARMAS

* "El general canadiense John de Chastelain, presidente de la Comisión Internacional de Desarme (IIDC), confirmó hoy en Belfast que el Ejército Republicano Irlandés (IRA) ha inutilizado todos sus arsenales. En una rueda de prensa celebrada en la capital norirlandesa, el general canadiense aseguró que todas las armas de las que se cree que disponía la organización terrorista han sido inutilizadas. Según De Chastelain, entre el armamento decomisado se incluye cartuchos de munición, rifles, ametralla-

doras, morteros, misiles, pistolas, explosivos y sustancias explosivas. Acompañado por los dos observadores que, a petición del IRA, han presenciado el último capítulo del proceso de desarme -un clérigo católico y otro protestante-, el general declaró que el trabajo de la Comisión con la organización republicana 'ha terminado'. (...) Desde la firma del acuerdo del Viernes Santo (1998), el IRA ha protagonizado tres actos de desarme, aunque el secretismo que los rodeó y la vaguedad de los informes de De Chastelain no bastaron para convencer a los unionistas de las intenciones de los republicanos. Sin pruebas visuales, los expertos creen que el DUP rechazará el trabajo de la IIDC. En este contexto, parece remota la posibilidad de que el mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) y el Sinn Féin, segundo partido de la provincia, se sienten a negociar la formación de un gobierno autónomo norirlandés de poder compartido. Sin embargo, los republicanos han pedido a Londres y Dublín que redoblen sus esfuerzos para restaurar la autonomía de la provincia, que permanece suspendida desde octubre de 2002 por un supuesto caso de espionaje del IRA en oficinas gubernamentales." (*Deia* - País Vasco-, 26-09)

✓ FBI ASESINA A LÍDER INDEPENDENTISTA DE PUERTO RICO

* "El líder del independentista Ejército Popular Boricua - Macheteros de Puerto Rico, Filiberto Ojeda Ríos, murió el viernes desangrado y sin asistencia, tras recibir un balazo, en una operación del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizada en la localidad de Hormigueros, al oeste de la isla. Ojeda Ríos permaneció en la

clandestinidad durante los últimos 15 años, buscado entre otras cosas por su participación en el asalto a una empresa de transporte de valores en Estados Unidos, realizado en 1983 para financiar las actividades del grupo, que lucha por la independencia puertorriqueña. Era considerado el 'puertorriqueño más buscado' por el FBI. El operativo del viernes se realizó con 'alto grado de hermetismo', según señalaron varias organizaciones independentistas, que anunciaron protestas por lo que consideran un 'atropello'. El gobierno de Puerto Rico admitió que desconoce los detalles de la operación del FBI, mientras que los medios de comunicación no tuvieron acceso al lugar. El jefe de la policía puertorriqueña, Pedro Toledo, reconoció que se enteró del asesinato de Ojeda Ríos 'varias horas después de que sucediera'. (...) El obispo Roberto González Nieves, principal referente de la Iglesia Católica en Puerto Rico, expresó su 'indignación por la forma que murió Ojeda Ríos', y pronosticó que su asesinato "continuará el ciclo de la violencia" en el país." (*Radio Mundo Real*, 26-09)

✓ALERTA MUNDIAL POR LA GRIPE AVIARIA

* "La Unión Europea (UE) advirtió ayer que la gripe aviaria representa una 'amenaza mundial' y llamó a dar al problema una 'respuesta internacional coordinada', ante señales de una posible expansión de la enfermedad y el temor a una pandemia en caso de una mutación a la variante más peligrosa del virus. Reunidos en Luxemburgo en sesión de emergencia tras la confirmación de un caso de gripe aviaria en Grecia, los ministros de relaciones exteriores de la UE reconocieron además que el bloque no se

puede proteger en forma aislada, pero insistieron en lanzar un mensaje de calma, sin alarmismo. De hecho, la declaración de los cancilleres europeos, difundida al finalizar el encuentro, intentó llevar tranquilidad al elogiar la rápida reacción de la Comisión Europea luego de que se confirmó la presencia de la peligrosa cepa H5N1 del virus en Turquía y Rumania, la semana pasada." (*La Nación*, Buenos Aires, 19-10)

✓GELMAN

* "En la tarde de al lado vive/una vieja que pide para el pan./Así se calla el universo/con esa piedra encima y/lo que hiere/del dulce amor./La canción de las raíces es/atravesada parte a parte/por una piedra que tiró/la tarde de al lado con/la lejanía de los grillos y/su efigie calcinada/en una boca grande abierta". (Poema inédito titulado "A ver", que se conoció en Madrid, donde el poeta argentino Juan Gelman recibió el XIV Premio Iberoamericano de Poesía de manos de la reina Sofía.) (*Página 12*, Buenos Aires, 28.10)



Galera de corrección

RICARDO A. FERRARO

¿Para qué sirve la tecnología? Un desafío para crecer

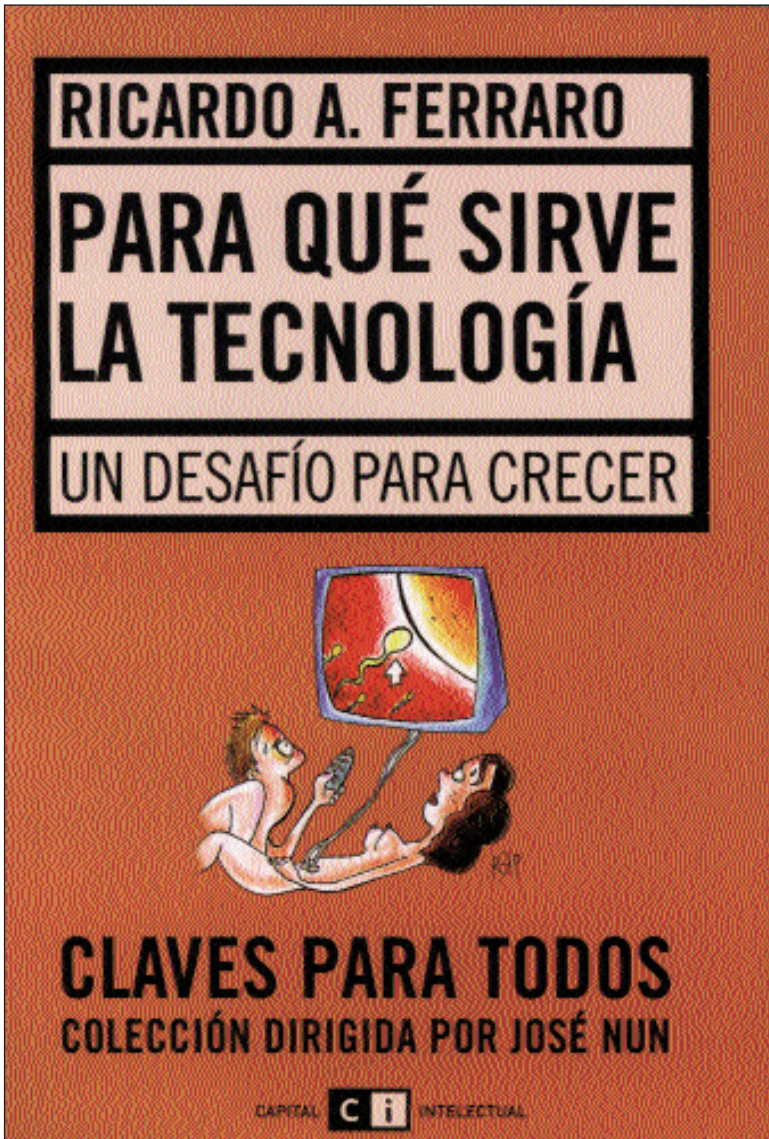
Capital Intelectual, Buenos Aires,
2005, 125 págs.

El libro que comentamos se ubica dentro de las corrientes de pensamiento que, a partir de una realidad insatisfactoria, coinciden en apuntalar y ampliar los aspectos considerados más positivos, para avanzar con propuestas creativas y acciones concretas. Es así como su autor, sin perder de vista el panorama de la situación de la ciencia y tecnología en nuestro país, y sin caer en la letanía de la lamentación y la resignación constata que “algo hacemos bien” (y bastante, agregaríamos, sobre la base de los ejemplos que presenta), y podríamos hacer mucho más en el refuerzo y consolidación de estas tendencias. Ello ayudará a las nuevas generaciones a que avancen hacia una sociedad que aproveche racionalmente nuestros mejores recursos naturales y humanos. “Hoy necesitamos ganar una guerra -dice Ferraro- la guerra a la desocupación, a la indigencia y al hambre”. Para ello sirven la ciencia y la tecnología.

El objetivo principal de estas acciones es la educación, en todos los ni-

veles, pero especialmente enfocada a formar los cuadros técnicos necesarios, en particular en el nivel de la enseñanza media, el más afectado por la crisis. El libro tiene un claro enfoque didáctico, insistiendo en la necesidad de producir y distribuir el conocimiento como respuesta a la pregunta de su título y sobre la base de su democratización. Para fundamentar sus propuestas el autor efectúa un rápido análisis de las principales contribuciones de las instituciones oficiales dedicadas a la investigación y desarrollo como las universidades y los institutos tecnológicos, como así también a los esfuerzos de empresas privadas, principalmente PyMEs. Integrados al texto, y dándole una amplia base de sustentación, se insertan frases y comentarios ilustrativos de especialistas argentinos y extranjeros desde distintos puntos de vista, así como ejemplos prácticos y cifras, y datos comparativos con otros países.

Una de las características del libro es el esfuerzo por utilizar un lenguaje ameno y comprensible, como lo indica el cuidado puesto en la definición de los términos utilizados y en la claridad con que se enuncian conceptos e ideas. Como anexo se incluye el “Informe de los ciudadanos de Pergamino sobre ‘Semillas transgénicas y alimentos genéticamente modifica-



dos". Unas sesenta referencias bibliográficas completan la obra.

El libro está dirigido a un amplio espectro de protagonistas de este proceso, desde economistas y sociólogos a ingenieros, educadores y funcionarios

de organismos estatales nacionales e internacionales, pero su lectura será igualmente de gran interés y utilidad para estudiantes, dirigentes, docentes y público en general.

Eduardo A. Mari



Actividades realizadas

1º DE FEBRERO DE 2005

Ciclo de Conferencias sobre la crisis mundial

Estados Unidos y la crisis mundial: dimensión y perspectiva

Gérard Duménil

14 DE MARZO DE 2005

Ciclo de conferencias sobre la Crisis Mundial

Acumulación y crisis capitalista

Rolando Astarita

20 DE ABRIL DE 2005

Conferencia

¿Hacia dónde va la industria argentina?

Límites, posibilidades y alternativas de reindustrialización

Martín Schorr

25 DE ABRIL DE 2005

Conferencia

**Los microemprendimientos en Venezuela para los sectores
desposeídos y excluidos del mercado de trabajo.**

Isa Mercedes Sierra Flores

9 DE MAYO DE 2005

Conferencia

El trasfondo y los límites del modelo exportador chileno

Claudio Lara

7 DE JUNIO DE 2005

Conferencia

La crisis del actual orden internacional

Jaime Estay

8 DE JUNIO DE 2005

Conferencia

El militarismo keynesiano y la economía estadounidense

James Cypher

15 DE JUNIO DE 2005

Conferencia

**Elevación de los niveles de formación y mercado de trabajo
en Europa**

Jean François Germe

18 DE JULIO DE 2005

*Conferencia***Los principales desafíos del gobierno progresista uruguayo***Antonio Elías*

25 DE JULIO DE 2005

*Mesa debate***Opciones al modelo económico: grados de libertad de la política económica. Argentina 2000-2005.***Mario E. Burkún - Guillermo Vitelli*

8 DE AGOSTO DE 2005

Ciclo de conferencias y mesas debate América latina hoy: una nueva fase política**América latina: globalización y crisis***Alberto Bonnet, Hugo Calello,**Eduardo Grüner, Daniel Campione*

10 DE AGOSTO DE 2005

*Conferencia***El neoliberalismo en el Brasil y el gobierno de Lula***Alfredo Saad Filbo*

16 DE AGOSTO DE 2005

*Presentación del libro***La economía argentina y su crisis (1976-2003): visiones institucionalistas y regulacionistas***Julio César Neffa, Mariano Féliz, Leonardo Pérez Candreva,**Alejandro Roig, José Sbatella*

16 DE AGOSTO DE 2005

Ciclo de conferencias y mesas debate América latina hoy: una nueva fase política**Respuestas del movimiento social***Ana Esther Ceceña, Modesto Emilio Guerrero,**Guido Chávez, Maristella Svampa*Coordinadora: *Clara Algranati*

22 DE AGOSTO DE 2005

Argentina: coyuntura económica y perspectivas*Eduardo Lucita*Coordinador: *Jorge Marchini*

25 DE AGOSTO DE 2005 19.00 hs.

30 años del modelo chileno ¿fin de expansión y elitismo?*Claudio Lara*Coordinador: *Eliseo Gai*

29 DE AGOSTO DE 2005 19.00 hs.

Argentina: crisis y reorganización de la dominación.**Perspectivas***Claudio Katz, Emilio Taddéi, Daniel Campione*Coordinador: *Juan Grigera*

5 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Posibilidades y límites de la autogestión*Mabel Thwaites Rey, Luis Mattini, Ana Fernández*

Coordinador: *Hernán Ouviaña*

12 DE SEPTIEMBRE DE 2005

**Libre comercio y nueva gobernabilidad en la región.
En camino a la Cumbre de los Pueblos (Mar del Plata 2005)***Beverly Keene, José Seoane, Julio Gambina, Eduardo Lucita*Coordinador: *Eliseo Gai*

17 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Jornada de cierre

El movimiento social en presencia

Jornada de debate e intercambio con integrantes de las distintas vertientes del movimiento social: piqueteros, trabajadores ocupados, empresas recuperadas, asambleístas

Coordinador: *Eduardo Lucita*

28 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Conferencia

La crisis argentina y las estrategias de desarrollo*Robert Boyer*

1º DE NOVIEMBRE DE 2005

Conferencia

Argentina: génesis de una trayectoria insostenible.*Gérard Duménil*

9 DE NOVIEMBRE DE 2005

Presentación del libro

Agricultura industrial y transnacionalización en América latina de Walter PengueComentaristas: *Sara Rietti, Carlos Barrera y Jorge Morello*

Actividades a realizar

30 DE NOVIEMBRE DE 2005 19.00 hs.

Conferencia

Las nuevas formas de acumulación y de encierro.**El panóptico disciplinario para el siglo XXI****aplicado por las empresas privatizadas en la Argentina***Damián Pierbattisti**Sociólogo de la UBA y doctor en Sociología de la Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Se formó con Juan Carlos Marín y León Rozitchner. En Francia continuó su formación en el Groupe de Recherche sur l'Economie Internationale, le Travail et le**Développement, cuyo director es Pierre Salama y en el Laboratoire Printemps dirigido por Claude Dubar.*Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, "Sala Jacobo Laks", Av. Corrientes 1543
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORMES E INSCRIPCIÓN TELEFÓNICA

(54 11) 4381-9337/7380/4076 fax 4381-2158

o por e-mail: iade@iade.org.ar oen <http://www.iade.org.ar> (inscripción online)